

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA AMÉRICA



TESIS DOCTORAL

**Las relaciones entre partidos políticos, Iglesia, Fuerzas Armadas y
Gremios con el Estado en Colombia de 1934 a 1962**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Juan Rodrigo Álvarez Álvarez

DIRIGIDA POR

José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco

Madrid, 2002

ISBN: 978-84-8466-001-9

©Juan Rodrigo Álvarez Álvarez, 1992

Las Relaciones entre Partidos Políticos, Iglesia, Fuerzas Armadas y Gremios con el Estado en Colombia de 1934 a 1962.

TESIS DOCTORAL

Dirigida por: Prof. Dr. Dn. José Manuel Pérez Prendes.

Departamento de Historia del Derecho.

Juan Rodrigo Alvarez Alvarez.

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
Sección de Historia de América.**

Madrid, Septiembre de 1992.

AGRADECIMIENTO.

Quiero expresar aquí mi más profundo agradecimiento por su valiosa ayuda a todas las personas, en particular al director de esta tesis el Profesor Dn José Manuel Pérez Prendes, e Instituciones que han colaborado en la elaboración de este trabajo.

A MIS PADRES.

INDICE

INDICE

MAPA DE COLOMBIA.....	V I
INTRODUCCION.....	V II
CAPITULO 1	
LA REPUBLICA LIBERAL (1934-1945).....	2
1.1. El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938).....	2
1.1.1 El Estado y los Partidos Políticos.....	2
1.1.1.1. "La Revolución en Marcha".....	3
1.1.1.2. Fin de la "Revolución en Marcha".....	1 1
1.1.2. Las relaciones Iglesia-Estado.....	1 3
1.1.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.....	1 7
1.1.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.....	2 1
1.2. El gobierno de Eduardo Santos (1938-1942).....	2 7
1.2.1. Los partidos políticos y el Estado.....	2 7
1.2.2. Las relaciones Iglesia-Estado.....	3 1
1.2.3. Estado y las Fuerzas Armadas.....	3 5
1.2.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.....	3 6
1.3. El segundo gobierno de Alfonso López, 1942-45.....	4 0
1.3.1. El Estado y los Partidos Políticos.....	4 0
1.3.1.1. La interinidad de Darío Echandía.....	4 3
1.3.1.2. Fin de la interinidad de Darío Echandía.	4 5
1.3.1.3. El intermedio de Alberto Lleras Camargo, 1945-1946.....	4 8
1.3.1.4. Los candidatos a las presidenciales del 46.....	5 3
1.3.2. Las relaciones Iglesia-Estado, 1942-1946.....	6 0
1.3.3. El Estado y las Fuerzas Armadas, 1942-1946.....	6 4
1.3.4. Las Relaciones entre los Gremios y el Estado, 1942-1946.....	6 7
NOTAS.....	7 3
CAPITULO II	
LAS ADMINISTRACIONES CONSERVADORAS (1946-1953).....	8 4
2.1 El gobierno de Mariano Ospina Pérez, 1946-1950.....	8 4
2.1.1. El Estado y los Partidos Políticos.....	8 4
2.1.1.1. La huelga de mayo.....	9 5
2.1.1.2. Los comicios de octubre.....	9 7
2.1.1.3. El nueve de Abril.....	1 0 7
2.1.1.4. Después del 9 de abril.....	1 1 0
2.1.2. Las relaciones Iglesia-Estado.....	1 4 1

2.1.2.1. La Iglesia y el 9 de abril.....	143
2.1.2. El Estado y las Fuerzas Armadas.....	146
2.1.3.1. Las Fuerzas Armadas durante y después del 9 de abril.....	148
2.1.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.....	152
2.2. El gobierno de Laureano Gómez, 1950-1953.....	157
2.2.1. El Estado y los Partidos Políticos.....	157
2.2.1.1. El gobierno interino de Roberto Urdaneta, 1951-53.....	168
2.2.2. Las relaciones Iglesia-Estado.....	192
2.2.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.....	196
2.2.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.....	202
NOTAS	214
CAPITULO III	
EL GOBIERNO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA (1953-1957).	
.....	237
3. 1. El Estado y los Partidos Políticos.....	237
3.1.1. Comienzo de las primeras fisuras.....	245
3.1.2. Cambios en la situación nacional.....	257
3.1.3. Los partidos se organizan.....	282
3.1.4. Los últimos días del mandato rojista.	288
3.2 Las Relaciones Iglesia-Estado.....	294
3.2.1. La jerarquía ante la CNT y la Tercera Fuerza.	295
3.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.....	298
3.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.....	303
3.4.1. El comienzo de las disensiones.....	306
3.4.2. Fin de la época de bonanza.....	310
3.4.3. Los gremios junto al Frente Civil.....	319
NOTAS.....	324
CAPITULO IV	
LA JUNTA MILITAR (1957-1958).	
4.1. El Estado y los Partidos Políticos.....	345
4.1.1. El Pacto de Sitges.....	349
4.1.2. El Plebiscito de Diciembre.....	353
4.1.3. Los comicios de marzo.....	358
4.1.4. La elección del candidato a la presidencia.....	360
4.1.5. El fallido golpe de estado.....	364
4.2. Las Relaciones Iglesia-Estado.....	366
4.2.1. La posición de la Iglesia en el plebiscito y las elecciones.....	368
4.3. Las Relaciones Estado-Fuerzas Armadas.....	369
4.3.1. Las Fuerzas Armadas y el fallido golpe de estado.....	372
4.4. Las relaciones entre el Estado y los Gremios.....	374
NOTAS.....	381

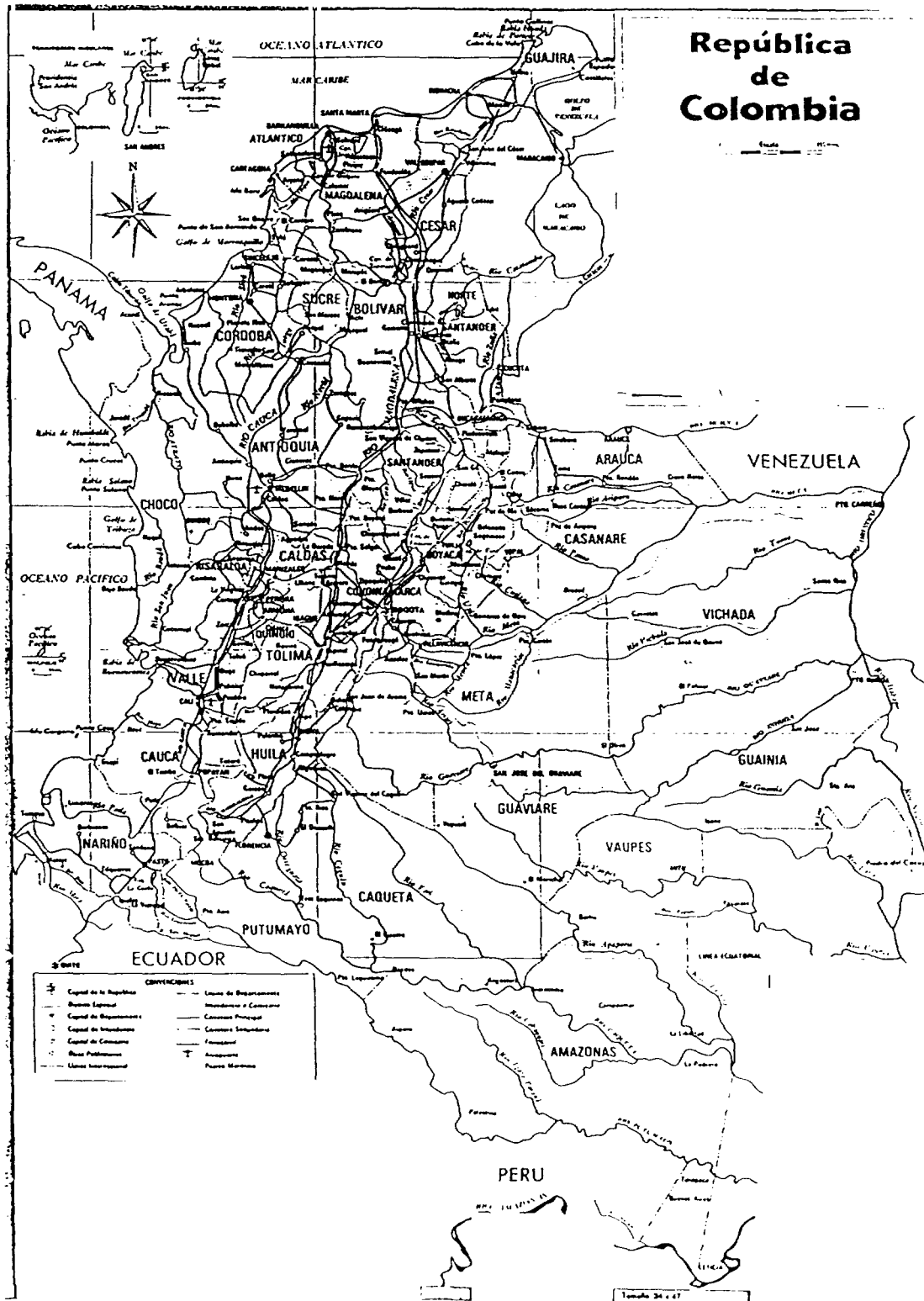
CAPITULO V

EL GOBIERNO DE ALBERTO LLERAS CAMARGO (1958-1962).

.....	390
5.1. El Estado y los Partidos Políticos.....	390
5.1.1. Las elecciones al Congreso.....	405
5.1.2. La situación postelectoral.....	408
5.1.3. El camino hacia el final.....	413
5.1.4. La elección del candidato.....	421
5.2. Las Relaciones Iglesia-Estado.....	424
5.2.1. La Iglesia y la Reforma Agraria.....	428
5.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.....	429
5.4. Las relaciones entre el Estado y los Gremios.....	434
5.4.1. Gremios y Estado en la Reforma Agraria.....	438
5.4.2. Gremios y Estado ante la política industrial.....	447
NOTAS	452
CONCLUSION.....	468
FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	473
I. FUENTES DOCUMENTALES.....	473
II. MONOGRAFIAS, OTROS LIBROS PUBLICADOS.....	474
III. PERIODICOS Y REVISTAS	509

INTRODUCCION

Mapa de Colombia.



INTRODUCCION.

La elección del tema de estudio, más allá del condicionante que supone haber nacido en Colombia o la curiosidad personal que despierta lo allí acontecido, estriba en ofrecer una investigación que, complementaria a las ya existentes, acerque a la historiografía contemporánea española el país andino.

Los antecedentes que ésta ofrece, si exceptuamos el trabajo del excanciller colombiano Diego Uribe Vargas "Las Constituciones de Colombia" en tres volúmenes y que editaba por primera vez en 1977 el Instituto de Cultura Hispánica, son pocos. La atracción que otros países del área generaban al estudioso español, originando un interés de carácter más general que particular, o la prioridad que los acontecimientos puntuales tenían, venían a explicarlo.

Hechos como la muerte de Jorge E. Gaitán, la longevidad, en comparación con sus vecinos, de los gobiernos democráticos, o más recientes como la incorporación a la actividad política de grupos guerrilleros y el narcotráfico, si bien permitían una aproximación a su realidad, no superaban esa barrera.

El curso de esta situación, sin embargo, vino a ofrecer algunas variaciones. La irrupción en la escena, principalmente periodística, de hechos nuevamente puntuales, como el asalto en noviembre de 1985 al palacio de Justicia en Bogotá, o la campaña presidencial de 1990, durante la cual tres de sus candidatos fueron asesinados, parecieron despertar entre el estudioso español el interés por la Historia Contemporánea de Colombia, y en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial.

A ese interés se debió que, en el espacio de dos años, aparecieran otras tantas publicaciones. La primera, realizada en 1987 por el profesor Miquel Izard y que lleva por título "Tierra Firme: Historia de Colombia y Venezuela", supone un intento por superar lo hasta ahora indicado. La segunda, en el 89, corre a cargo del también profesor Manuel Alcantara, quien con "Sistemas Políticos de América Latina", trata de indagar, con especial atención a los distintos estamentos del Estado, la situación actual del país en comparación a los de su entorno.

Es en este medio, al cual hubo que sumar el límite que supuso la imposibilidad, por motivos económicos, de realizar una parte del trabajo en el país objeto del estudio, lo que me animó más si cabe a reiterar el interés por éste.

Así, una vez que el objeto de la investigación fue elegido, los interrogantes fueron apareciendo. Entre ellos habría que señalar, desde la amplitud cronológica del trabajo, pasando por las distintas administraciones tratadas, a la forma de abordar la relación e influencia que los diferentes protagonistas tendrían en el manejo del Estado.

Para afrontar dichos interrogantes, el acopio bibliográfico realizado en los distintos fondos españoles especializados, resultó de particular importancia. De entre ellos, y como lugar en el que encontré buena parte de la bibliografía empleada, está la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Esta, que por una parte cuenta con un importante fondo de libros y revistas de información general, caso de *Revista Javeriana*, de otra, sin embargo queda mermada en los de tipo eclesial, económico y militar.

No será la única. La Biblioteca Nacional, con algunas publicaciones oficiales de los años 30, la Hemeroteca Municipal, y los

Departamentos de Historia de América, y Ciencia Política de las Facultades de Geografía e Historia y Ciencias Políticas y Sociología respectivamente, le acompañarían. Es más, la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (A.E.I.T.I), que en el número 9 de su revista *Síntesis* dedicó un monográfico al país, publicado con aportación exclusiva de autores colombianos, vino a completar lo encontrado en la primera.

Mención aparte merece, en cualquier caso, el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. De la información contenida en sus legajos, particularmente la que hace referencia a la de situación política, no solamente pude obtener una valiosa visión acerca de la realidad colombiana en las diferentes administraciones tratadas, limitada por los componentes ideológicos existentes, sino también, el necesario complemento que, en algunos casos, contenían los recortes de prensa allí incluídos.

Es entonces cuando al quedar completado lo anterior, las mencionadas dudas parecieron ir despejándose. Así, la que hace referencia a la limitación temporal queda fijada entre 1934 y 1962. La importancia que este período tiene para la comprensión de las distintas formas de intervención que no sólo el Estado, sino también Partidos Políticos, Iglesia -jerarquía-, Fuerzas Armadas -Ejército-, y Gremios, tratan de articular y conformar en aras de sus propios intereses, y la influencia que ello tiene con posterioridad al fin de este trabajo, lo recomendaban.

La distribución, mientras, se haría de acuerdo a los mandatos presidenciales. Estos, encuadrados en el análisis de los gobiernos liberales de 1934 a 1946, y conservadores de 1946 a 1953, vienen sucedidos por el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957. Sin embargo, la continuidad de las

administraciones civiles, después que desde mayo del 57 hasta agosto del 58 una Junta Militar se hiciera cargo del país, queda garantizada con el primer gabinete del Frente Nacional que preside Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962.

Vistas así las cosas, y después de señalar que la tesis central que se sostiene en esta investigación es la de demostrar que más allá de la inexistencia del Estado colombiano como entidad de decisión política, algo que al considerarlo incapáz de detener la Violencia, el autor estadounidense Paul Oquist defiende en la obra "Violencia, conflicto y política en Colombia" (1976); lo que se da es, de acuerdo con Daniel Pecuat -"Orden y Violencia: Colombia 1930-1954" (1987)- y Jonathan Hartlyn -"The Politics of Coalition Rule in Colombia" (1988)-; el progresivo debilitamiento en la realización autónoma de sus funciones.

Es por ello que, iniciada aquí la descripción de los cinco capítulos que componen el trabajo, esa última constante parece mantenerse sin variación. En el primer capítulo, dividido en tres apartados, pues el intermedio de Alberto Lleras Camargo, a excepción de la reseñada actividad gubernamental, en lo que se refiere a las relaciones con Iglesia, Fuerzas Armadas y Gremios, es una prolongación de las iniciadas por López Pumarejo; se adivinan unos decididos intentos, en línea con los principios existentes en el resto del continente, de profundización en la autonomía del Estado.

Las fases de mayor realización, vinieron a coincidir con los ímpetus que el primer mandato de Alfonso López Pumarejo descubre. Este, unido a la aportación que en principio ciertos sectores del partido Liberal y agentes sociales, particularmente sindicatos, le proporcionan, debe sin embargo, reconducir sus deseos iniciales. Los celos de su partido, amen de los que Iglesia y

Gremios expresan acerca de las reformas educativa y agraria respectivamente, sumados a los conservadores, provocan no sólo una pausa, sino también el aumento de las disputas que al interior del liberalismo se descubren.

Los intentos por paliarlas, situado Eduardo Santos en la presidencia, parecen avanzar en sentido contrario al buscado. Las tías iniciativas del nuevo presidente, como es la carrera administrativa, o la fundación de institutos oficiales en favor de los municipios, resultan con todo, insuficientes para su superación. Esta, no obstante, en un mandato que discurre paralelo a la conflagración mundial, y al de una oposición conservadora encabezada por Laureano Gómez, en continuo choque dialéctico, no facilitaban tal logro. Con ello, y como antesala de la que habría de ser costosa fractura en el dominio liberal, se llega al último gobierno de López Pumarejo y el mencionado intermedio de Lleras Camargo.

Con ellos, especialmente el primero, se ponen de manifiesto, de una parte las insatisfactorias bases políticas sobre las que actúa el partido Liberal, muestra feaciente de ello resultará ser, tanto el golpe de Estado del 44, como la presentación de dos candidaturas en las presidenciales del 46; y de otra, el claro distanciamiento que con respecto a los sindicatos se consigue con Lleras Camargo.

En el segundo capítulo, consumado el cambio de gobierno a favor de Mariano Ospina Pérez, y asumida la quiebra del dominio liberal, al menos en el Ejecutivo, asistimos a la implantación de una nueva administración. La realización de ésta, en la que los ánimos de revancha no son extraños y el número de afectados abundante, los intentos por solucionar democráticamente la crisis aparecen desbordados. La muerte de Jorge E. Gaitán, y las dudas que la

legitimidad del gobierno-Estado genera, traerán como resultado, junto a otros componentes de índole socio-económico, la aparición de la Violencia.

El proceso que a todo eso le sigue, introducidos en la segunda parte del capítulo 2, se agrava al ocupar la jefatura del Estado Laureano Gómez. Con él, cuyo mandato esta regido en buena medida por la interinidad de Roberto Urdaneta, las posibilidades de alcanzar un acuerdo quedan relegadas a un segundo plano. Los intentos por acomodar no sólo la administración a proyectos de tipo corporativo, sino también, el empleo que de las fuerzas policiales hace en persecución de todos aquellos que fueran opositores al régimen, llevan tanto al recrudecimiento de la indicada Violencia, como a la formación de una fuerte contestación. Fruto de ésta, a la cual se unen miembros de su propio partido, los militares con el general Gustavo Rojas Pinilla al frente dan un golpe de estado.

En el tercer capítulo, el mencionado general, tras contar con el respaldo que partidos políticos, jerarquía eclesiástica y compañeros de armas le brindan, y favorecido igualmente por las expectativas pacificadoras, como por la situación económica, trata de dar los pasos necesarios en pos de la reconciliación. La colaboración que esos le dieron inicialmente, irá variando a medida que su administración avance. Hechos como los enfrentamientos con los estudiantes y los propietarios de la prensa escrita; la creación de una central sindical por fuera de las establecidas; los intentos de fundar un partido propio, en competencia con los existentes, o la cuestionada gestión que la bonanza recibida pudo tener, hicieron cambiar el curso de los acontecimientos.

Es por eso que los partidos políticos y sus miembros, tras el incómodo intento de "pacificación política", busquen con la misma

unión que tuvo la llegada de Rojas Pinilla al poder, la finalización forzosa de su administración.

En el cuarto capítulo, y ante la situación dejada, una Junta Militar pasa a ocupar la máxima magistratura del país. Su presencia, que discurre paralela a los renovados reproches que sustentadores del derrocado general y detractores tuvieron, viene respaldada, a pesar de todo, por la decidida intención que liberales y conservadores demuestran en controlar el conjunto del Estado. Los acuerdos que para ello han de realizar, pactos de Sitges, y San Carlos, habrán de sentar los principios de un reparto, que vía plebiscito y con estrictas bases constitucionales ordene, no sólo la igual distribución de puestos en la administración del Estado para los mencionados liberales y conservadores, sino también, las exclusivas formas de competencia política.

En el último capítulo, la responsabilidad de poner en práctica los postulados anteriores corresponde a Alberto Lleras Camargo. Este, que en un primer momento contará con los conservadores de la corriente laureanista como aliados, trata de obtener un amplio consenso. Sin embargo las peculiaridades que un pacto como el Frente Nacional trae consigo, donde la disciplina interna de los partidos aparece más sujeta a las directrices de los dirigentes de las distintas corrientes, que a las líneas de interés general, entorpecen su consecución.

Los diferentes cambios de gabinete que durante su administración habrá de realizar, la no menos tortuosa presentación, y posterior aprobación en el Legislativo del proyecto de reforma agraria, uno de los más largos en la historia parlamentaria, o la elección de un candidato presidencial que respondiera a los postulados del mencionado Frente Nacional, servirán de ejemplo.

CAPITULO I
LA REPUBLICA LIBERAL (1934-1945)

CAPITULO 1: LA REPUBLICA LIBERAL (1934-1945).

Durante los años treinta tienen lugar en el continente americano una serie de acontecimientos que, tras la herencia del 29, harían variar los patrones de intervención del Estado seguidos hasta entonces. El caso de Colombia no constituye ninguna excepción. Al contrario, la especial forma de entender el juego político, sujeto al férreo bipartidismo que liberales y conservadores imponían, poco acostumbrado al debate, y la Administración prácticamente al servicio de los intereses privados, recomendaban el cambio.

Es en este medio, cuando después del primer gobierno de la República Liberal, inaugurada por Enrique Olaya Herrera en 1930, Alfonso López Pumarejo llega a la presidencia. Con él, se abre una etapa nueva que habrá de concebir ciertas esperanzas al respecto.

1.1. El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938).

1.1.1 El Estado y los Partidos Políticos.

Las elecciones del 34, celebradas con la exclusiva participación de los liberales, dado que los conservadores las tildaban de fraudulentas, llevan a la máxima magistratura a López Pumarejo. Con ello, las expectativas de aquéllos en las labores de gobierno se afianzaban, al tiempo que permitían, ante la ausencia del partido Conservador, aventurar algunas ilusiones.

Estas, condicionadas en opinión del gobierno lopista por la vigencia de la Constitución de 1886 y el ejemplo del 29, requerían no sólo cimentar el papel del Estado como institución decisora, sino también hacer de él un motor que contribuyese a transformar la actividad política y económica del país (1).

La mejor vía para lograrlo, según el presidente, era dando comienzo a un proceso que bajo el nombre de "Revolución en Marcha", persiguiera tanto la realización de esas intenciones, como la profundización de las relaciones entre pueblo y Estado (2).

1.1.1.1. "La Revolución en Marcha".

Para ponerla en práctica, los legisladores liberales, sabedores que mientras la mencionada Carta mantuviese, la educación bajo tutela eclesial, una parca política fiscal, un agro regido por prácticas feudales y el voto censitario, la concreción de aquélla quedaba en suspenso. Con el fin de superar esta situación, deciden acometer las reformas educativa, fiscal, electoral y agrícola.

Es entonces cuando al ser conocidas las intenciones gubernamentales, los conservadores y ciertos sectores disidentes del liberalismo preparan la debida respuesta. Los primeros, dirigidos por Laureano Gómez, antiguo amigo de López y decidido opositor del expresidente Marco Fidel Suárez, emplean el diario *El Siglo* para emprender una abierta crítica.

Los segundos a su vez, aglutinados desde 1933 por el abogado Jorge Elíecer Gaitán en la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, UNIR, tratan de motivar a los sectores rurales y urbanos que observaban indiferentes las propuestas mencionadas. Como vía para sobrepasar esa apatía, a entender del dirigente

unirista, había que ofrecer alternativas, entre otras, al agro, la economía y las relaciones con la Iglesia.

Respecto al primero, donde los conflictos entre propietarios y colonos eran continuos, la solución pasaba por el control que el Estado ejercería, para posterior distribución, de las tierras no cultivadas en cinco años. La segunda, respetando la prioridad estatal sobre ella, contemplaba la creación de un banco de previsión social, gracias a los fondos aportados por los más pudientes. Finalmente, para la tercera la opción era clara, separación entre Iglesia y Estado (3).

Ahora bien, las consideraciones anteriores difícilmente podían dispersar la atención que para el Ejecutivo merecían los pilares que sustentaban la indicada "Revolución". Uno de ellos, cual era el educativo, plantea, desde el momento que es dado a conocer, variadas disputas entre gobierno e Iglesia.

El señalado control que la Carta del 86 ofrecía a la institución eclesiástica en tan importante materia, pues según el artículo 41 la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica, estaba en el fondo de la pugna. Para contrarrestarlo, desde las filas liberales se apostaba, no sólo por la afirmación de la autoridad gubernamental en este sector, sino también, acorde con las orientaciones laicales, por una separación entre ambas instituciones.

Dichos planes, que eran defendidos por el entonces ministro de Educación Darío Echandía, tendrían cumplida respuesta desde la oposición. Así Laureano Gómez, descontento con la propuesta, elabora una árdua defensa. En ella, aparte de reiterarle al clero su solidaridad y emplear *El Siglo* como portavoz del descontento, buscaba impedir el control liberal de la enseñanza (4). La polémica,

en cualquier caso, descenderá cuando, llegado el momento de aprobar la reforma del 36, el Artículo 13 diga: " ... El Estado garantiza la libertad de conciencia ... se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes ... " (5).

Completado uno de los objetivos, al Legislativo le corresponde, consciente de las críticas que recibiría por ello, afrontar las reformas electoral, tributaria y agraria.

Así la primera, cuya intención básica era lograr la desaparición del fraude, consigue que el sufragio universal para los hombres sea reconocido, sin tener en cuenta si éstos eran alfabetos o propietarios de tierras. Ante ella, la oposición es mínima. Los deseos de verse favorecidos por los nuevos votantes, fácilmente asumibles por los partidos tradicionales, vía clientelismo, eran la causa (6).

La concordía anterior, sin embargo, distaba de encontrarse al ser anunciada la tributaria. El que ya el 28 y 30 de diciembre del 34 los Decretos 2429 y 2432 respectivamente, no fuesen aceptados por la Corte Suprema de Justicia, y retrasasen las intenciones del Ejecutivo de reformar el impuesto de la renta, en particular gracias al segundo, resultaba indicativo.

Ante la respuesta recibida, el gobierno procedió por la vía legislativa y consiguió la aprobación de la Ley 78 de 1935. Esta, que modificaba las tarifas a las rentas altas y creaba un impuesto de patrimonio, complementario al de la renta, buscaba inicialmente además de fortalecer las necesitadas arcas del Estado, dos objetivos.

Uno diferenciar el gravamen que pagarían las rentas del capital de las del trabajo, y dos, imponer tasas progresivas, iguales a las existentes en 1931, para rentas líquidas inferiores a 7.000 pesos, extendiéndolas, según el tamaño, a las empresas. Todo ello, en

cualquier caso, vendría a completarlo la Ley 69 de 1936, por la cual se modificaban los impuestos de sucesión y las donaciones.

En contra de esa reforma, ya en 1934 un grupo de hacendados, fundaba APEN (Asociación Patriótica Económica Nacional). Esta, cuya duración se ceñía prácticamente al primer gobierno de López y algunos años del gobierno Santos, asumía, en cierto modo, los postulados de Acción Nacional (contrarios a la intervención estatal). Sus miembros, preocupados por las huelgas cafeteras, vuelcan las críticas, aprobada la reforma constitucional el 5 de agosto de 1936, primero ante la indicada reforma fiscal, y a continuación por el anuncio de una ley agraria (7).

A su juicio, que en septiembre del 34 se presentara un proyecto tendente a reformar la propiedad, y que el artículo 10 de la reiterada reforma constitucional contemplase la propiedad como una función social, sin olvidar que, en caso de utilidad pública podía expropiarse, era motivo suficiente para rechazarla.

Es por ello que la atención, iniciadas las actividades parlamentarias que habrían de traer el primer fruto de los cambios introducidos en la Constitución, la mencionada ley, queda centrada en la pugna que detractores y defensores establecen.

Los primeros, agrupados en la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), cansados de la ocupación de sus tierras - algo que durante los años 34 y 35 vino a ser continuado y que ante el anuncio de la ley pareció disminuir- y de la presión que a su entender ejercían "los conflictos provocados por los jornaleros, arrendatarios y colonos" preparan una campaña en contra de dicha ley (8).

Los segundos, en cambio, caso de los colonos, cuya única posesión venía dada por la ocupación efectiva de tierra baldía, intentaban, que de una parte, el respaldo ofrecido por partidos como

el Socialista Revolucionario, UNIR -hasta 1935- e inclusive el de Acción Nacional -localizado en Sumapáz- no se perdiese (9), y de otra, obtener, aún a falta de títulos legales que lo demostrasen, el definitivo reconocimiento de sus derechos, dado que el tiempo de trabajo, creían, era suficiente.

El encuentro entre ambas posiciones vino, después de rechazar el gobierno la propuesta gremial de colonizar los mencionados terrenos baldíos, al quedar superadas las diferencias respecto al artículo 6º, que contemplaba, tras la posible expropiación, la devolución de las tierras a los diez años. Así mientras -aprobada en diciembre de 1936 la reforma agraria o Ley 200- el primer punto aceptaba la presunción de propiedad en base a la explotación económica del suelo, para el mencionado punto 6º, fijaba al Estado como poseedor de los terrenos, siempre que hubieran estado abandonados durante los diez años señalados (10).

Dicha Ley, en cualquier caso, que asentaba el control del Estado sobre un medio tan importante, no pudo impedir que las expulsiones en Cundinamarca o Boyacá tuviesen lugar. Pese a ello, el gobierno liberal a través de su promulgación había buscado la modernización de la estructura agraria, con vistas a la explotación económica del suelo (11). Igualmente, desde la óptica política, se podían descubrir dos caminos: uno, la disminución del poder socio-político de la SAC, dos, atenuar los conflictos agrícolas (12).

En contra de lo que pudiese parecer, la mencionada Ley, no perseguía una distribución real de la tierra. Tampoco anhelaba la desaparición del latifundio. Su perspectiva última había que buscarla en la adecuación de la estructura agraria, a las nacientes necesidades de explotación comercial que se descubrían sobre el campo colombiano (13).

Ahora bien, las acciones reformistas no quedaban limitadas a los aspectos meramente legislativos. Para el gobierno lopista, había que proceder a una mayor y decidida intervención en la llamada "sociedad civil". Conseguir la identificación de ésta con el Estado, utilizando la necesaria colaboración que partidos de naciente y pujante fuerza de convocatoria logran, será uno de los puntos del programa inicial propuesto por Alfonso López.

Durante el decenio anterior miembros del partido Liberal habían mantenido contactos con representantes del entonces llamado Partido Socialista Revolucionario (años más adelante Partido Comunista); que siguiendo las directrices de la Internacional Comunista, referentes a colaboración con las llamadas "burguesías progresistas", se propuso la máxima: "con López contra la reacción" (14).

En igual medida, UNIR, vista la poca rentabilidad política obtenida, pues el contenido legalista del mensaje, ofrecía escasas alternativas, es disuelta por Gaitán en 1935 y regresa al seno liberal. De esta forma, las expectativas de una tercera fuerza se disipaban, y las descalificaciones, principalmente comunistas, tildándoles de practicar "una demagogia audaz y cínica" finalizaban (15).

Despejadas las divisiones internas, y recibiendo la ayuda de sectores hasta entonces inimaginables, Alfonso López busca establecer las bases de una mejor colaboración-intervención con los sindicatos -cuyo número de afiliados pasó de 42.678 en 1935 a 165.595 en 1947, 4,7% de la fuerza total sindicalizada-. Así las cosas, miembros de Vanguardia Socialista, (fundado en 1935), que ocupaban puestos de importancia en la progubernamental Confederación Sindical de Colombia, denominada en 1938, y posteriormente conocida por Confederación de Trabajadores de

Colombia, CTC, ofrecen el apoyo necesario tendente a la funcionalidad de las reformas aprobadas. Estas, sin ser una ruptura, trataban dar paso a los renovadores, distanciándose del inmovilismo semifeudal.

La intervención de las nuevas formaciones políticas, se notó. La aparición de diversos representantes afines a ideas comunistas y socialistas mezclados con los liberales, sirvió para mostrar el amplio crisol de ideas que en el movimiento sindical podía encontrarse.

A pesar de ello, las diferencias de tipo ideológico comienzan a surgir. El abandono de los comunistas en 1935 de la Confederación, era un ejemplo. Esta marcha, en cualquier caso, no impide que las reivindicaciones de contenido social, como las realizadas en el Congreso del 36, continúen. Allí, tras abogar por la necesaria intervención legislativa del Estado para que entre otras cosas admitiera la huelga inclusive en los servicios públicos, solicitan una jornada laboral de ocho horas, semanal de 44 (16). La respuesta de ese no se hace esperar, el derecho de huelga es aceptado (Artículo 20), a excepción de los servicios públicos.

Toda esta realidad de beneficio en favor de las masas trabajadoras, aunque sólo fuese desde la óptica legislativa, tendrá su contrapartida en el medio de trabajo. Con la llegada de López Pumarejo al poder, los efectos de la Depresión, aunque atenuados siguen. Sectores como el industrial notan esta dureza. Los salarios obreros reales, mantienen una oscilación que va desde el aumento de 1933, al derrumbe de 1934. Comparando ambos años tenemos, que en el 33 el salario de los obreros en la industria de transformación de Medellín era de 201.8 pesos, mientras que al año siguiente alcanzó 142.9 pesos (17).

Dichos indicadores hacen revelar ciertas posturas que anteriormente no se mostraban. Para los sectores populares y en especial sus representantes, las demandas de tipo legislativo eran importantes, la respuesta dada aceptable; el problema estaba en saber si verdaderamente su función estaría más bien encaminada al logro de unas conquistas sociales reales, o hacer que la evolución capitalista siguiese su curso.

Desde el Estado, resultaba importante hacer funcionar la máquina productiva de forma racional. Superando cualquier tipo de conflictividad, conseguía, no sólo el prestigio ante la Confederación y sus allegados, sino que podría esgrimir sus argumentos de árbitro ante cualquier tipo de problema laboral que surgiese. Como ejemplo, las propuestas de arbitraje logradas en el conflicto del río Magdalena. La existencia de tres huelgas sucesivas (una en el 36, las restantes en el 37), no impiden que el acuerdo se alcance gracias al buen hacer presidencial (18).

Con la evolución de los hechos, los elementos más recelosos a la política lopista, trataban de buscar un punto de encuentro en el que cimentar su oposición. El año 1936 supone un cambio en estas perspectivas. La alianza entre los sectores sindicales y el Estado estaba peligrando, los representantes de la burguesía industrial, (la Federación Nacional de Industriales), comenzaban a estar descontentos por las prerrogativas alcanzadas en medios laborales.

El mismo presidente se daba cuenta de ello. El formalismo jurídico, tan importante hasta este momento, no podía seguir chocando con los intereses internos del liberalismo (19). Su cambio de actitud no tardó en llegar. La oportunidad de conseguir la

cohesión entre pueblo y Estado donde éste podría haber sido un agente de concordia, había fallado.

1.1.1.2. Fin de la "Revolución en Marcha".

Los ideales marcados en principio, llegaban a su destino. A partir de este momento, la alternativa se plantea entre romper la adhesión gubernamental o continuar con ella. La opción, provocaba una realidad difícil de asumir. Para el movimiento obrero resultaba de vital importancia que hubiera continuidad en los logros alcanzados. La ayuda prestada desde el gobierno en este sentido, no podía ser abandonada.

Por contra, los miembros de la burguesía industrial buscarán insistentemente poner fin a esta situación de beneficio. Como respuesta, bloquear las propuestas sindicales. En contra de lo que pudiera parecer, la burguesía agraria (SAC), era más dialogante. La reforma, había llevado una relativa calma en sus posesiones. El paso para la explotación más racional de sus riquezas estaba dado, el agradecimiento era múltiple.

La postura de intransigencia, iniciada en el 36, sigue aflorando, a pesar de la pausa marcada por López Pumarejo. Las normativas que buscaban una mayor ordenación-control del medio laboral se suceden. En 1937, la propuesta gubernamental de obligar al pago del despido, es desestimada por diversos medios industriales y agrarios. Detrás de ello, perseguían evitar una legislación social, que contemplase la existencia de un código laboral, la protección eficaz al trabajador sindicalizado o el salario mínimo (20).

Tal era el panorama que se dibuja en el horizonte laboral colombiano. La posición adoptada desde el gobierno, manifestaba el

cambio gestado durante este tiempo. Las elecciones celebradas al parlamento en 1937, son buena muestra. Para el presidente no haber podido evitar la derrota de la candidatura de Echandía -50.000 votos a favor de éste por 350.000 de Eduardo Santos- le traería costes políticos difíciles de asumir (21). La oposición al jefe del gobierno, consolida posiciones en las filas liberales. Finalizaba así una forma de tratar las relaciones laborales y de actuar desde el Estado.

Los reformistas, que se habían hecho un puesto en el partido, ven como sus logros son detenidos. Mantener las prerrogativas de cierto bienestar social, hubiera supuesto el aumento en la presión tributaria. Políticamente resultaba desaconsejable, el presidente no deseaba más enfrentamientos con los sectores financieros de ambos partidos.

De esta manera, la modernización, que había tenido su momento álgido hasta el 36, tenía un impacto incompleto. Las reformas agraria y educativa venían a demostrarlo. La primera, no llegó a todas las zonas del país. La segunda, que entre sus objetivos estaba alcanzar una mayor escolarización, ve como no se consigue. Sin embargo, si bien es cierto reconocer lo alcanzado por las distintas reformas emprendidas, resulta, igualmente importante señalar que las lagunas dejadas por la "Revolución en Marcha", serían posteriormente demandadas por los sectores gaitanistas.

Los dos últimos años, en cualquier caso, traerían la recuperación para aquellos que pudieron llegar a sentir resquebrajados sus intereses. Si Alfonso López logra mantenerse en el poder en 1937 y 38, es gracias a un cambio en su política. Las alianzas con los sindicatos ya no son tan estrechas. Los sectores financieros se constituirán en los principales valedores. La renuncia a las propuestas de tipo radical, le hizo ganar la confianza de los que en

un principio le habían combatido. El mismo lenguaje empleado desde los sindicatos, comenzó a variar. En 1938 el congreso de la CTC, hace una condena a las huelgas, declarándose contrario a las "huelgas locas que estallan por doquier, sin preparación, sin estudio, sin la menor consulta" (22).

Con ello, el balance que el gobierno liberal hacía resultaba desigual. Si en un principio quiso ganarse a los sectores populares mediante propuestas casi revolucionarias, a continuación hubo de retroceder, tanto por la presión de los grupos de oposición, como por las disidencias en su propio partido.

El coste político que las indicadas disidencias tuvieron fue importante. Para los sectores locales del liberalismo, que todavía seguían siendo mayoritarios pues tomada la distribución de población según censo de 1938, el 70,9% era rural (23), las decisiones centralistas, no hacían sino aumentar el descontento en sus zonas. Los sectores urbanos, a su vez, que inicialmente apoyaron al gobierno lopista, también comenzaron a distanciarse ante lo que consideraban falta de credibilidad liberal (24).

1.1.2. Las relaciones Iglesia-Estado.

Al asumir Alfonso López la presidencia, el diálogo entre las instituciones experimenta un cambio. Las intromisiones que uno y otro venían experimentando se había convertido en algo aceptado. La introducción del hasta entonces, incuestionable tema educativo, rompió la tensa calma.

Las primeras declaraciones que el presidente realiza, sin embargo, refiriéndose al debatido tema, parecían abrigar más

esperanzas que temores acerca del comportamiento del mandatario liberal. Según él: "Podemos anunciarles que ya es posible una cooperación como la que ahora ofrecéis al Gobierno Liberal entre el clero que sirve por comisión directa, los intereses del pueblo, para lograr la prosperidad de la República" (25).

Pese a éstas, para el liberalismo de aquel tiempo la solución del llamado problema religioso era fundamental. La realización de una encuesta, ya en el año 34, a cargo de un grupo de dirigentes del partido Liberal entre los diferentes directores departamentales, eran muestra de ello. Que los responsables en la periferia solicitasen, además del matrimonio civil y el divorcio, la no existencia de religión oficial, la separación entre Iglesia y Estado, a través de la reforma del Concordato, y que la enseñanza fuera pública, obligatoria y laica, lo corroboraban (26).

Estas propuestas de carácter interno, tratarían de ser llevadas a la práctica. En algunos casos intentaban, que todas ellas fueran promulgadas. Tal es el caso del matrimonio civil, el divorcio, o las que hacían mención a la enseñanza. En la realidad, aparte del reconocimiento a la libertad de cultos, solamente quedan abolidas aquellas que hacían referencia a los privilegios eclesiales (27).

Ahora bien, el medio político en el cual habrán de encuadrarse estas relaciones, no dejará dudas sobre las distancias que entre ambos existían. Como punto de partida, podríamos encontrar las declaraciones que ciertos liberales expresan en contra de la Iglesia. Es así como ya en el primer año de mandato lopista, un representante local del liberalismo en el Concejo de Bogotá, durante la sesión celebrada en éste en el mes de noviembre, manifiesta: "Así como el Cabildo de 1810 había iniciado la independencia de la dominación

española, así el Cabildo de 1934, quería iniciar la independencia de la dominación jesuítica, la cual era casi peor que la primera" (28).

Como era de esperar la respuesta eclesial fue rápida. Para el clero se acercaban tiempos, donde los recalcitrantes liberales aprovecharían cualquier ocasión para poner en sorna sus realizaciones. En consecuencia, habría que estar preparados con el fin expreso de evitar los todavía frescos ejemplos de Rusia, México y España.

Internamente la Iglesia colombiana, al igual que ocurría en los medios políticos, manifestaba sus diferencias entre miembros del clero rural y urbano. Para los primeros, la identificación con el pensamiento conservador constituía una garantía doctrinal. Entre sus más conocidos dirigentes se encontraba Miguel Angel Builes, obispo de Santa Rosa. Junto a él, ya en el medio urbano estará el que fuera arzobispo coadjutor de Bogotá, Juan Manuel González Arbeláez. Por otra parte, tanto para el arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, como para el clero capitalino, los peligros del resurgimiento liberal eran prácticamente inexistentes. Las actitudes del Vaticano ante situaciones como las vividas en Europa, le servían de ejemplo (29).

El año 35 marca el comienzo de las diferencias entre Iglesia y Estado. Con la celebración del Congreso Eucarístico Bolivariano, al cual asisten prelados de los países vecinos, González Arbeláez, aprovecha la ocasión para lanzar acusaciones contra las reformas lopistas. Para él, no tendrían porqué producirse renunciaciones ante los privilegios eclesiales. Los conservadores, ofrecen su apoyo y las garantías ofrecidas por Perdomo, hablando sobre la independencia política de la Iglesia, comienzan a perder la escasa consistencia que tenían en los sectores liberales. En igual medida desde las publicaciones de tipo eclesial, como es el caso de *Revista*

Javeriana, hacen votos para que el Congreso Eucarístico, interpretara: "los sentimientos de un pueblo católico, y manifieste una vez más ... que el Estado colombiano es un Estado Religioso" (30).

Es así, cómo desde el gobierno liberal la situación comienza a ser incomoda. La polarización político-religiosa, supondrá una nueva fuente de preocupaciones gubernamentales. Si una parte demostraba anticlericalismo, de otra no había ningún temor en manifestarse antiliberales. Todos los acontecimientos eran válidos. La guerra civil española, servía como blanco de pruebas. Tal y como ocurriera desde la óptica política, los liberales apoyaban a los republicanos. Con ello, las antipatías del clero estaban garantizadas. Mientras, para los conservadores, no existían dudas, era necesario respaldar claramente al clero español.

Otro punto de disputa será la señalada reforma educativa. Al ser anunciadas las medidas liberales, que establecían el control estatal sobre ésta, medios eclesiales muestran su abierta oposición.

Durante 1935, el obispo Ismael Perdomo, envía una circular acerca de la intervención estatal en centros privados. Igualmente, el episcopado, preocupado por la orientación que la escuela liberal planteaba, publican en el mismo año, un memorial, criticando los programas educativos oficiales, por creer que las enseñanzas propuestas eran laicistas y naturalistas (31).

Un año después, los enfrentamientos continúan. Ismael Perdomo, en una nueva circular dirigida a los colegios católicos, les advierte sobre la no admisión de inspección oficial en sus clases. Ahora el enfrentamiento es político. Los conservadores, apoyan la decisión obispal. Para éstos, la ocasión es óptima, con ella, no sólo acrecientan la realidad del problema; internamente aparecen como

defensores de los valores católicos. Las simpatías de amplios sectores del clero estaban garantizadas.

En otro orden de cosas, mientras la pugna sobre reforma educativa disminuía, el episcopado amplía el campo de sus enseñanzas. Así, en 1936 una pastoral colectiva se ocupará del comunismo y de la Doctrina Social de la Iglesia. Mediante su difusión, buscaban establecer una doble separación. Primero, la doctrinal, en algo tan espinoso como el marxismo, y segundo, de acción pública, respecto a los partidos políticos. Por último, y refiriéndose al conflictivo tema de las asociaciones obreras, si bien expresaban tranquilidad por su existencia, mantenían distancias con las de carácter revolucionario (alusión indirecta a la CTC). En consecuencia, la prohibición a los católicos de afiliarse a sindicatos filo comunistas resultaba tajante (32).

1.1.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.

Al igual que con la Iglesia, durante este período, las relaciones entre ambas instituciones atravesarán diversas etapas. Así, en los años anteriores al gobierno lopista, lo que en principio fueron distancias e incluso tibias muestras de apoyo; se transformarán en colaboración, toda vez que el poder civil comprueba la necesidad de prestar una mayor atención al aparato de guerra nacional.

Como primeros pasos para la formación de un Ejército profesional, es fundada en 1907 la Escuela Militar de Cadetes. Para ello, contarán con la colaboración de una misión militar chilena. Entre sus alumnos, acudirán buena parte de los hijos de destacadas familias, de un partido u otro. Así mismo, tres años después y

sirviendo de complemento a la anterior, es inaugurada la Escuela Superior de Guerra. Gracias a éstas, se trata de dotar al Ejército de un mayor grado de formación, en el más estricto ámbito castrense.

Contrariamente, sin embargo, a los países vecinos, los militares colombianos de época prelopista, no amenazan al poder civil. Los escasos miembros, entre 5 y 6000 mil, unida a la baja aportación presupuestal (aproximadamente el 5% en 1929), de los gastos públicos, parecían confirmarlo. Es más, políticamente sus derechos de voto estaban vetados, aunque, llegado el caso, eran empleados para solucionar el orden público, como ocurrió en el caso de las bananeras o en 1932, debido al conflicto fronterizo con el Perú (33).

Esta situación, no incomodaba al primer gobierno de la República Liberal. Olaya Herrera, por ello, ante el Congreso en 1930 manifiesta: "Somos un país de estructura netamente civil y nuestro Ejército es y debe continuar siendo meramente el reflejo de la patria" (34).

Para las Fuerzas Armadas, el cambio de gobierno traía consigo asumir la continuidad en sus relaciones institucionales. Estar sujetos al Ejecutivo, sin cuestionar las intervenciones que hubiera, aunque éstas fueran de carácter partidario, por sospechar que la oficialidad, era en su mayoría conservadora, confirmaban el sentimiento. Es más, debido a los rumores sobre la orientación militar, potencian la policía. La Ley 15 de 1935, aumentando los poderes presidenciales sobre la Policía Nacional, y el Decreto 1715, que daba al ministerio de Gobierno, amplias facultades sobre las municipales y departamentales, hicieron aumentar las dudas sobre su posterior empleo (35).

Entre tanto, los deseos gubernamentales no se concentraban sólo en objetivos intervencionistas. Los intentos del

ministro de Guerra, Carlos Uribe Gaviria, por conseguir que la institución armada diera pequeños pasos, aunque teóricos, en la apertura hacia la sociedad, parecían apuntarse. El artículo "La función social del Ejército", publicado en *Revista Militar del Ejército*, sirve de ejemplo (36).

La actitud presidencial, sin embargo, dista mucho de manifestar aprecio hacia las Fuerzas Armadas. De una parte, elevará pensiones a sus miembros, o fundará el Instituto Geográfico Militar. De otra, apostará decididamente por impulsar la presencia del Ejército en aquellas zonas que están prácticamente deshabitadas. Es por ello que el presidente, aprovechando el foro que la prensa bogotana le ofrece, manifiesta:

" ... Pero tampoco se entendió a cabalidad esta función nueva que el gobierno encomendaba al Ejército ¿Qué iban a hacer las armas urbanas, las armas más eficaces de la política, en las soledades de la Guajira, de Arauca, o de Amazonas?. Pues sencillamente a tratar de compensar al contribuyente colombiano de los sacrificios que se impone para sostener las fuerzas de defensa nacional, realizando un programa de utilidad social que atiende a la exploración, dominio y protección de todos los territorios nacionales ... " (37).

Mediante estas declaraciones, López no hace más que expresar, con desdén, la posición que según los liberales, el Ejército debía ocupar en el panorama político nacional. En igual medida, otros puntos habrán de afirmar las dificultades entre ambos estamentos. Así, la elección de un ministro como jefe máximo de policía, provoca las sospechas conservadoras, sobre la utilización, por parte del Ejecutivo, de una policía adicta. A ella, vino a unirse la llegada del nuevo ministro de Guerra, Plinio Mendoza. Este, con la reordenación de la Escuela de Cadetes, acusada de conservadora, interviene en el

cambio de la oficialidad, supervisa la entrada de nuevos alumnos en la Escuela, y controla los ascensos (38).

Sin embargo, y a pesar del control oficial, dos años después, el gobierno sufre una intentona golpista. El general Amadeo Rodríguez sera su mentor. La falta de planificación y el poco apoyo político, traen la pronta rendición. Pese al fracaso, los militares expresan sus deseos de participar en el poder político (39).

Será cuando, el entonces parlamentario liberal, Eduardo Santos, dando lectura a la Memoria del ministro de Guerra, diga: " ... Nuestro Ejército no quiere otra cosa que confianza ... del pueblo colombiano. Yo creo que en nombre del Congreso, podríamos contestar al Ejército, que tiene conquistado ese derecho ... y que el partido liberal reconocerá los méritos de aquellos que quieren ser fieles a sus juramentos ... " (40).

De esta manera, los problemas entre Ejército y Estado, por lo que al primer gobierno lopista respecta, quedaban pospuestos. Entre tanto, las energías gubernamentales, se distribuían entre el apartado presupuestario y la deseada profesionalización. Del primero, las asignaciones al ministerio de Guerra, pasaron de un generoso 18.3% en 1934, al 7.4% del último año. Las causas del descenso, estaban en el ajuste tributario del 35 y posterior crisis cafetera del 37 (41).

Ya en la segunda, los objetivos estaban dirigidos a potenciar la enseñanza castrense, con la Escuela Militar como centro de formación para la futura oficialidad. Con ella, se evitarían experiencias pasadas. Como ejemplo, el señalado conflicto fronterizo con Perú, donde las tropas colombianas estuvieron al mando del "general" Alfredo Vásquez Cobo, (antiguo combatiente conservador). Sin embargo, los frutos que la Escuela tenga, con alumnos formados y

graduados en ella, tendrán que esperar hasta 1937 para que uno de ellos llegue al grado de general (42).

1.1.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.

Al hilo de las actividades políticas, el primer mandato de López Pumarejo, en lo que a este apartado se refiere, debe también aceptar una herencia, que más allá de los efectos de la crisis del 29, le lega unos órganos de decisión económica limitados. Estos, pese a contar desde el año 1923 con el Banco de la República -siguiendo los consejos de la misión Kenmerer y destinado a romper el control privado sobre el sector bancario-, difícilmente podían escapar de la influencia que gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), o la Federación Nacional de Cafeteros tenían sobre la política económica (43).

La presencia de dichos gremios, fundados en 1871 y en 1927 respectivamente, en las directivas de entidades como la Caja Agraria, formada en 1931, o en el Banco Agrícola e Hipotecario -a partir del 32 Banco Central Hipotecario-, eran un ejemplo (44). El Estado, con todo, daba muestras de ir tomando ciertas posiciones a favor de una mayor intervención. La aportación de 12 millones de pesos para la fundación del mencionado Banco Central a cargo del indicado Banco de la República, venían a confirmarlo (45).

Ahora bien, el curso de la situación anterior, en consonancia con las reiteradas actividades políticas, trae la introducción de algunas variaciones. Estas, más acordes con la implantación, a partir de 1935, de una reforma tributaria -Ley 78-, que con un cambio radical en la intervención de los gremios; estarán

destinadas a obtener la ampliación y diversificación de los ingresos del Estado (46).

Para hacerlo realidad, la puesta en práctica de dicha Ley - que incluía el aumento progresivo del impuesto sobre la renta y un año después -Ley 69- lo añadía al patrimonio y a los beneficios-, resultaba básica. La evolución seguida por los ingresos totales ordinarios, pareció confirmarlo.

Así, mientras en 1935 las entradas fueron de 67.8 millones de pesos, y en 1936 ascendieron a 82.4 millones -de los que el 36.4% eran gracias al capítulo aduanero y 15.7% al referido impuesto sobre la renta-, en el 38 eran 97.6 millones -31.9% de aduanas y 18.6% por el impuesto- (47).

Como contraste a la naciente intervención que desde el Estado se estaba articulando, los gremios, deseosos de afirmar, de una parte su independencia, no olvidando los beneficios que traía el acceso a los círculos de decisión, intentarán, de otra, incidir decisivamente en las políticas económicas que el gobierno lopista emprenda.

Tal es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros. Esta, consciente del valor que el café tenía para la economía nacional, toda vez que los años 29 y 30 trajeron una remodelación en su interior, se prepara para ello. Los primeros pasos, coincidiendo con la entrada de Mariano Ospina Pérez en la presidencia del gremio (1930-35), serán para hacer no sólo efectiva la Ley 76 de 1927, que destinaba a favor de la indicada Federación un gravamen a la exportación, sino también, en medio de un fuerte debate interno, la de dar prioridad a los exportadores.

A lo anterior, que viene unido a la potenciación de los Almacenes Generales de Depósito (lo que reducía los costos de

comercialización), el control sobre el grano y la industria del café tostado, había que sumar otras. Estas, relacionadas con las influencias, ya fueran políticas o sociales, que la reseñada Federación tenía en la vida rural, más allá de lo que el propio Estado pudiera hacer, despertaba los deseos de control por parte del Ejecutivo (48).

La posibilidad de hacerlos efectivos, más cuando la Federación contaba con representantes en el Banco de la República, o el Consejo Superior de Agronomía, estaba en la elección, a entender del presidente liberal, de dos caminos. El primero, copiar a sus vecinos brasileños, que transformando el homólogo de la Federación (Consejo Nacional del Café), lo sitúan bajo tutela gubernamental y pasa a ser un departamento más (Departamento Nacional del Café); o el segundo, aceptar la existencia de un "Estado dentro del Estado" (49).

La solución adoptada en 1935 vino a suponer, tanto la imposibilidad de llevar a la práctica cualquiera de esas dos opciones, como la obligada aceptación por parte del gremio a cambiar sus estatutos. Esta maniobra, en cualquier caso, que era la de ampliar los directivos de siete a diez, lejos de mermar la capacidad de decisión trajo consigo, de una parte, el equilibrio entre los representantes privados y los públicos -tres ministros y los dos restantes de la Caja Agraria y del Banco Agrícola Hipotecario-, y de otra, la elección del gerente del gremio por parte del presidente entre una terna presentada por la Federación.

Fruto de las transformaciones en la directiva, Alejandro López es nombrado gerente. Este, que ya en 1936 establece un acuerdo con Brasil, obteniendo la existencia de un precio mínimo para el grano, ligeramente favorable al colombiano, debe hacer frente a comienzos de 1937, a la baja de las cotizaciones nacionales -

de 47.8 pesos en 1936, a 37.8 en 1937-, e internacionales. Debido a ésta, la Federación, que no contaba con recursos financieros adecuados, ni con el respaldo de las instituciones de crédito, se ve sumida en la crisis (50).

A consecuencia de ella, el enfrentamiento entre el presidente liberal, defensor del acuerdo, y Mariano Ospina, a favor del libre comercio, se desata. Su continuidad, salpicada por la renuncia de Alejandro López, y la sustitución de éste por Manuel Mejía -gerente de la entidad hasta su fallecimiento en 1957-, vino a poner de manifiesto dos cosas. Primera, la efectividad de las presiones gremiales por colocar a una persona de confianza al frente del gremio cafetero, y segunda la contundencia de dichas presiones siempre que considerasen dañados sus intereses (51).

Ahora bien, la intención controladora que los gremios desean extender al conjunto de las actividades reformistas, va más allá. La señalada Ley 200 de 1936, como primer punto de la reforma agraria, despierta múltiples recelos. A las sospechas que el concepto "función social de la propiedad" ocasionó -por considerar que dejaba abierta la puerta a las expropiaciones-, hay que sumar los argumentos contrarios que la SAC tuvo al conocer las condiciones en que la reforma fue aprobada.

Que dicha Ley contemplara, de una parte, la desaparición del pago de las rentas de trabajo en especie -debían ser sustituidas por salarios- y de otra despejara la incertidumbre que prevalecía sobre la propiedad de las tierras y los títulos, sentando las bases para que la posesión de esas supusiera una obligación de utilización productiva, no gustó al presidente de la SAC Laureano García Ortiz. A su juicio, no sólo la Ley parecía el trabajo de congresistas comunistas en vez de liberales, sino que también dudaba de su efectividad para

contener las peticiones de los afectados, ya fueran colonos o propietarios (52).

En otro orden y atendiendo al comportamiento que la industria nacional -representada por las textiles, cementeras y de bienes de consumo no duraderos, cerveza y azúcar en particular-, tendría durante el primer mandato lopista, se descubren, entre otras cosas, distintas variables. Estas, si bien indicaban un crecimiento del 10.8% en el período 33-38, no por ello se distanciaban de una economía dependiente.

La fijación que dicha industria tenía por el amparo que le ofrecían las devaluaciones o la necesaria importación de equipos tecnológicos, no sólo parecían confirmarlo, sino que además despertaban los recelos entre industriales y cafeteros. Los primeros, quejosos por los aparentes beneficios que la indicada devaluación pudiera traer, culpaban a los segundos de abogar por ella y así encarecer la entrada de bienes intermedios (53).

Estas pugnas, sin embargo, vinieron a trasladarse al importante sector textil. La actitud distante que los empresarios mantenían, ya desde principio de los treinta, respecto a la solicitud oficial de potenciar el consumo nacional de algodón, eran la causa. Los intentos por variar su opinión, localizados principalmente en Medellín y defensores de la libre importación, resulta fallidos. Las propuestas de Alfonso López, dirigidas a conseguir un trato favorable para los cultivadores internos, vía acuerdo, son rechazadas. La tasa de crecimiento que el sector tuvo para el período 30-39, 19.59%, unida al aumento de los salarios entre 1935-37, del 5.5%, explicaban el difícil cambio de actitud empresarial. Es más, en 1938 las sugerencias planteadas por López, siguen sin ser aceptadas por los empresarios (54).

Por otra parte, y en consonancia con los países del área, Colombia no escapó al fenómeno de sustitución de importaciones. Otro aspecto es la incidencia que ésta tuvo en el medio industrial nacional. Refiriéndose al capítulo que suponen los bienes de consumo, en los años veinte, alcanzaba la cifra de 46.6% de aquéllas. Ahora bien, si la situamos en el 36, sólo llega al 45%. En capítulos como los bienes de equipo, el cambio era más importante, 30.3% en 1925 a 22%, contrastaba con los bienes intermedios o materias primas, en las que (para el mismo período), el aumento iba del 23.1% al 33% (55).

Si entre los industriales, la presencia del sector textil era básica, no menos importante era el contraste que ofrecía la falta de un gremio en el sector. Los intentos iniciados por la Federación Nacional de Febricantes y Productores, posteriormente formada como Federación Nacional de Industriales, sólo pareció adquirir notoriedad cuando, una compañía británica (British Tobacco), deseosa de instalarse en el país, buscaba romper el monopolio de la Compañía Colombiana de Tabaco. Esto ocurría en el año 37, cuando los indicativos del país, adquirían cotas preocupantes, como era el caso del PIB, de ese año, que contrastando con el 36 (5.3%); descendía al 1.7%, dando a entender la influencia del sector cafetero en el conjunto económico nacional (56).

Así las cosas, el gobierno de López, si bien había contado con un primer momento de beneficio, introduciendo algunas medidas destinadas a potenciar el ingreso público, tuvo como consecuencia posterior un aumento de su inversión, pasando en 1936 de un 22.6%, al 27.6% de 1938, observa cómo los índices de inflación mantienen una situación dispersa.

Estos, iban del 38.8%, del año 34, descendiendo bruscamente al 4.3% en el siguiente, encontrando una estabilidad en

los años 36-37 donde alcanzan 6.0% y 3.3% respectivamente; recuperaban índices alcistas en el último año con un 12.6%. Con ellos, quedaba claro, de una parte, que resultaba necesario introducir reformas, aún siendo el momento de pausa, y de otra, hacer que éstas atendieran a la problemática del sector industrial, si deseaban evitar lo ocurrido en 1937 (57).

1.2. El gobierno de Eduardo Santos (1938-1942).

1.2.1. Los partidos políticos y el Estado.

Terminado el mandato de Alfonso López en 1938, el propietario de *El Tiempo*, Eduardo Santos, es nombrado presidente. Con éste, los distintos miembros de las élites partidarias, habían logrado el ascenso a la máxima autoridad de una persona de total confianza para sus intereses.

En principio podrían distinguirse dos efectos. Por una parte, mantendría el tono de moderación con respecto a las reformas emprendidas en el mandato anterior. De otra, deseaba seguir con cierto grado de intervencionismo estatal, ofreciendo una imagen catalizadora más allá de las consideraciones clasistas. Para él la intervención, no podrá estar separada del modelo liberal de desarrollo. Igualmente, la anterior unión establecida en tiempos de López en términos de pacto social, tendrá que estar relegada a la primacía que marque el mantenimiento del orden social (58).

No en vano ya en el año 37, uno antes de su elección como presidente, manifestaba su disconformidad a la formación de los frentes populares que López proponía con el fin de superar

diferencias y así lograr el pacto social. Para Santos el ejemplo español resultaba bien elocuente y es por ello que:

" .. En la mezcla de fuerzas distintas y aún opuestas, unidas sólo por la pasión del ataque o por la necesidad de la defensa, con la prescindencia de las características propias de cada uno, se esconde un peligro que es preciso no disimular. El historiador encontrará para el desastre actual de España una explicación clara y sencilla, ... el hecho de que los jefes republicanos españoles no pudieron formar un partido que les permitiera obrar que les permitiera vivir y que hiciera posible su acción constructiva .. " (59).

El haber logrado un consenso con las élites de ambos partidos en torno a su persona, traducido en el apoyo del Congreso al Ejecutivo (60), hacía prever que las propuestas gubernamentales, encontrarían poca oposición. Como ya había manifestado durante la campaña presidencial, una de sus máximas aspiraciones era implantar la carrera administrativa. Con ella, daría mayor credibilidad a la acción de gobierno, evitando "la idea de que el liberalismo necesita, que no necesita, del señuelo de los empleos públicos repartidos como botín de guerra, para ganar las elecciones o para mantenerse en el poder" (61).

Mediante la Ley 165 de 1938 el gobierno de Santos persigue la modernización del aparato administrativo. Su meta estaría en asegurar el carácter apolítico del empleado público, por medio de la carrera administrativa. Tal disposición fracasó; la falta de instituciones poderosas, encargadas de vigilar las disposiciones emanadas de la Ley, la no atención al adiestramiento ni capacitación técnica del personal, hicieron fallar el intento (62). Los miembros de la administración, seguirían siendo reclutados entre las diversas

opciones del liberalismo, así la confusión entre intereses de partido y Estado era mayor.

Tal y como quedó señalado, las intenciones de control por parte del gobierno Santos, con respecto a los sindicatos, y sus peticiones de tipo reivindicativo, será un punto en el que se centrarán las acciones de gobierno. Toda vez que las propuestas lopistas, ya no tienen el eco conseguido en sus inicios, los liberales, acuden a disposiciones de tipo legal para poder controlar la representatividad obrera.

Las vías elegidas básicamente serán dos. Primero, hacer que el Estado tenga los elementos necesarios para mantener su papel de árbitro. Segundo, dar a la negociación colectiva dentro de la empresa una gran importancia. Para poner en práctica tales medidas, se constituirá un ministerio de Trabajo, acompañado de una justicia laboral encargada de intervenir en los conflictos sociales. Además, extenderán el servicio público a ciertas actividades privadas, como la navegación en el río Magdalena (lo que suponía la privación del derecho de huelga), y por último, controlarán las subvenciones destinadas al sindicalismo representado en la CTC. Respecto a la segunda vía, persiguiendo la regulación de la negociación colectiva, resulta desestimada al creer que fortalecía el sindicalismo (63).

La intervención, sin embargo, traducida en fundación de organismos oficiales tendentes a continuar la tímida presencia estatal en diversas áreas de producción continuó. Así en el año 1939, se crea el Instituto de Crédito Territorial, destinado a la construcción de viviendas en las zonas rurales y urbanas. Al año siguiente, el Instituto de Fomento Municipal, encargado de ayudar a los municipios en materia de servicios. Por último, el Instituto de Fomento Industrial (1940-41), con el fin de colaborar en la fundación

de empresas y prestar la orientación técnica y financiera que fuese necesaria (64).

En contraste con la unidad que el control sindical despertaba, por parte de ambos partidos, había que señalar los distintos derroteros cuando la competencia política estaba en juego.

Los acontecimientos, ya fueran nacionales o foráneos, afectaron de manera especial a la segunda mitad del gobierno santista. El asesinato de un grupo de campesinos conservadores, en el municipio de Gachetá, a manos de la policía de Cundinamarca, (blanco de las iras conservadoras, acusada de pro liberal), sirvió para que Gómez, de forma decidida acuse al presidente de incumplir "una justicia pronta y eficaz, no tolerando la impunidad" (65).

Las críticas, que iban destinadas al Ejecutivo, y por ende al sistema que representaba el liberalismo, harían ganar en intensidad a la actividad parlamentaria. De poco servía que la composición del Legislativo en las elecciones del 39 y 41, tuviera mayoría liberal. La vuelta de los conservadores, durante la última consulta, y la creciente influencia que dentro del grupo liberal tendría la corriente lopista, venían a explicarlo (66).

Con todo, y a pesar de lo ocurrido en Gachetá, la Segunda Guerra Mundial, y buena parte de la discusión acerca del Concordato, sirvieron para aumentar la discordia. Los liberales, con Santos al frente, no dudaban, cuando de brindar el apoyo incondicional hacia Estados Unidos se trataba. Las compensaciones de tipo económico, principalmente el café, no permitían devaneos ideológicos, como los manifestados desde filas conservadoras (67).

Para éstos, la política liberal de colaboración con Estados Unidos, era una muestra de traición al pasado patrio. Ahora bien, dado el cariz que tomaban las cosas, Gómez, no sólo tendrá que

soportar la distancia de los sectores económicos, o las amenazas de perder la publicidad norteamericana en *El Siglo*; ante esta disyuntiva sus ataques irían dirigidos hacia Inglaterra.

Así las cosas, la presidencia de Santos tocaba a su fin. El año 42 marcaba, con elecciones, la despedida. La división liberal quedaría reflejada en ellas. De una parte, aquellos nostálgicos del primer mandato lopista, optan por apoyar al expresidente. De otra, los sectores partidarios de la continuidad, respaldarían a Carlos Arango Vélez.

Los conservadores, mientras, sabedores de lo limitado de sus votantes, no superiores al 36%, anhelaban superar la consideración de partido minoritario. Para ello, en sintonía con las palabras de Gómez "Nosotros respaldamos sin reserva alguna al candidato antilopista. Los antilopistas y nosotros podemos y debemos derrotar a López" (68), preparan todo su aparato electoral en favor de Arango.

Los deseos gomistas, sin embargo, no tienen fruto. Alfonso López con un 48,5%, frente al 41,3% de Arango, sin olvidar una abstención cercana al 60%, inicia su segundo mandato. Los conservadores, contrariados por ello, hablan de fraude (69).

1.2.2. Las relaciones Iglesia-Estado.

Con la presencia de Eduardo Santos en la jefatura del Estado, las relaciones entre ambas instituciones, siguiendo la tónica que habría de presidir su administración, entraron en una dinámica de relativa calma. El propio presidente, consciente de la importancia que la Iglesia tenía, en el armónico desarrollo del país, indica ya desde los primeros momentos de su mandato, las líneas de actuación. Es así como:

"Para satisfacción de mi gobierno, las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Colombia continúan desarrollándose sobre bases de la más franca cordialidad y de la cooperación más deferente. El régimen inaugurado en 1930 ha demostrado con hechos más sinceros, su respeto por las creencias de los colombianos y más decidida su voluntad de mantener sin sombras la paz religiosa" (70).

Por otra parte, estos afanes de concordia tendrán pronto que superar diversas barreras. La primera de ellas, llegará con el anuncio, por parte del gobierno santista, de reformar el Concordato que databa de 1887. Para Santos, la realización de dicho proyecto, supondrá poner en práctica, algunas intenciones fallidas del primer gobierno lopista. La forma adoptada para llevarlo a cabo será distinta al mandato anterior.

Empleando notables dotes de negociación, hace lo posible por despejar los nubarrones anticlericales como algo inherente al liberalismo. Mediante el nombramiento de Darío Echandía, hombre de su total confianza, como embajador en Roma y máximo responsable en las negociaciones del nuevo Concordato, intenta: "el mutuo respeto y la recíproca deferencia como bases de relaciones entre los dos poderes" (71).

Los puntos del Concordato, sobre los cuales intentaba hacer mayor énfasis, eran aquellos referidos al matrimonio, registro civil y administración de cementerios. Si bien es cierto que las primeras pretensiones del gobierno santista querían llegar más allá, como en el caso de recomendación de obispos, finalmente hubieron de contentarse con los tres señalados. Por su parte, el Vaticano, debía aceptar el veto presidencial en lo que al nombramiento de obispos se refería. Estos, habrían de ser colombianos, respetando las leyes

nacionales y cuidando que el clero se abstuviera de actividades perjudiciales para el orden nacional (72).

La tardanza por lograr un acuerdo sobre el Concordato (prácticamente cinco años), se debió, en buena medida, a los acontecimientos que por aquel entonces asolaban al Viejo Continente. Es necesario indicar, que de igual forma las polémicas introducidas por los contrarios a la firma, ya fueran obispos o políticos, supusieron el aumento de tensión y cierto enrarecimiento en las relaciones entre ambas instituciones.

González Arbeláez, siguiendo su línea de distanciamiento episcopal, creía al contrario que Perdomo, que las intenciones reformistas, no tendrían por qué ser aceptadas tácticamente, como hacía el arzobispo. Por todo ello, cualquier celebración pública que sirviera para dar a conocer el descontento reinante, era válida. Es así como, aprovechando un homenaje a la Iglesia, por parte del ministro de Educación, se lanzan vítores a González y en contra del arzobispo Perdomo. Estos ponen de manifiesto la oposición, que tanto sectores eclesiales como políticos, mantienen respecto a la reforma (73).

Las pugnas se hicieron patentes en el episcopado. Si bien Perdomo, en un primer momento manifestaba ciertas reticencias hacia la reforma del Concordato, hubo de aceptar las recomendaciones del entonces nuncio, monseñor Carlos Serana, en el sentido de favorecer los deseos de cambio. En aquellos momentos el arzobispo de Bogotá contaba con el valioso apoyo del obispo de Manizales, Luis Concha. Los dos prelados, presentarán un informe favorable al proyecto de reforma. Con ello, el enfrentamiento estaba servido. Buena parte del obispado y ciertos sectores del clero, fieles a González Arbeláez y Miguel Angel Builes, consideran que tal propuesta no podía seguir adelante. Para éste había que acudir a los

medios más convincentes, entre ellos, exhortar a los diputados conservadores para que bloquearan la firma del Concordato (74).

Los representantes del partido Conservador emprenden una oposición frontal al proyecto. Las palabras de Builes fueron seguidas con devoción. Laureano Gómez, calificó de masónica a la jerarquía bogotana; haciendo que la separación sea infranqueable entre catolicismo y la Santa Sede. De esta manera, el grado de confusión que tenían los fieles católicos resultaba mayor. Las palabras de Gómez, parecían levantar más atención que los mensajes episcopales.

Con todo, las relaciones entre los obispos y el líder conservador fueron enrareciéndose cada vez más. Las ya señaladas muestras de oposición por parte de González Arbeláez, a todo lo relacionado con el Concordato, unido a sus opiniones de carácter antiliberal, tienen como resultado la separación del prelado de la diócesis bogotana y su traslado a Popayán.

Ante éste, los conservadores expresan su repulsa. Desde *El Siglo*, las primeras críticas se dirigen contra Perdomo. Estas, son tan intensas, que la Nunciatura hubo de presentar una nota explicativa. En ella, confiando acallar las voces que argumentaban ingerencia política de la decisión, dicen que González Arbeláez había presentado la renuncia.

Tan encendidos debates, sin embargo, toda vez que llega el momento de ponerlos en práctica, quedan sin efecto. La no realización del preceptivo canje por parte del gobierno, firmado ya en abril del 42 el Concordato y aprobado por el Congreso, evitaron que tuviera vigencia (75).

Para el gobierno, los ya referidos ataques, unidos al recuerdo de conflictos religiosos del siglo XIX, suponen un retroceso

ante las perspectivas renovadoras que la reforma plural del 36 propugnaba. La posibilidad de que las relaciones Iglesia-Estado tuvieran mayor fluidez, quedaron cortadas. Una vez más, la concordia entre reforma plural y Concordato confesional no llegó a producirse (76).

1.2.3. Estado y las Fuerzas Armadas.

Con la nueva administración, las relaciones entre ambas instituciones parecieron adquirir un nuevo rumbo. En el primer año de mandato, sube el sueldo a los militares, e introduce mejoras en los cuarteles. Junto a ello, y coincidiendo con la escalada bélica, dada la proximidad del canal de Panamá, firma un acuerdo con Estados Unidos para la formación de marinos, posteriormente ampliado a la aviación (77).

Este ambiente de colaboración, se extendió hacia las fuentes de financiación, siempre que las posibilidades económicas lo permitían. Durante este mandato, las cantidades asignadas al entonces ministerio de Guerra, trajeron un aumento del 15.9% en 1938, al 16.7% del último año (78).

Un año después, de su llegada a la presidencia, y aprovechando la oportunidad brindada por *Revista Militar*, publica el 1 de enero un artículo titulado "El gobierno y el Ejército". Las ideas que en éste se expresan, hablan de la necesidad de contar con un Ejército nacional, identificado con la patria (79).

Por el contrario, en febrero, y en la misma publicación, Silvio Villegas escribe un artículo sobre el fracaso de la conspiración del 36. En él, Gómez es acusado de traidor. La reacción gubernamental es inmediata, el entonces Inspector General de las

Fuerzas Armadas, resulta cesado. Igualmente durante el año 39, el gobierno santista, dictará decretos tendentes a la reorganización del aparato militar.

Posteriormente, al igual que le ocurrió a su antecesor, la situación policial, también habría de afectarle. Si bien, en principio, el empleo para labores de tráfico urbano, o aquellas que afectaban sobre la criminalidad, resultaban bien acogidas, internamente, tal y como quedó reflejado en un informe presentado por el entonces director Alfredo Azuero, solicitando la definición y potenciación de ésta, unida a una profunda necesidad de reforma, sembraron cierta inquietud en las suaves aguas políticas. Como respuesta, en 1940, Santos inaugura la Escuela General Santander, mediante ésta, intentaban completar una mejor formación policial (80).

Ya en los últimos meses de gobierno, las tranquilas relaciones se verán un tanto resquebrajadas. Llegado el momento de nombrar Jefe de Estado Mayor del Ejército, el gobierno da el cargo a una persona no formada en la Escuela Militar. La renuncia de dos militares de carrera que optaban al cargo, no se hace esperar. Una vez más, primarán los criterios de tipo partidista sobre el estrictamente profesional. No en vano, habrá que esperar hasta el año 43 (segundo mandato de López), para que se elija como Jefe de Estado Mayor, a un general que anteriormente había pasado por la Escuela.

1.2.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.

El nuevo gobierno, vista la situación heredada, donde los temores de reivindicación sindical parecían despejarse (no exentos de contradicciones internas), conociendo la bajada del precio del café

en la bolsa de Nueva York (de 10 centavos de dólar la libra en el 37 a 9 en 1938), asumiendo los controles que la crisis había establecido sobre las importaciones, (dando preferencia a productos esenciales), el gobierno Santos deberá asumir una difícil realidad nacional.

Si durante el mandato lopista, los mecanismos de intervención hubieron de establecerse en los últimos momentos, para el gobierno de Santos, la utilización de éstos, no resulta extraña. En principio, y debido a las restricciones impuestas en el 37, el sector textil, asume la suspensión temporal de importaciones. Ya en 1939 y 1940, habrán de ampliarlas, mediante listas de importación. Por contra los exportadores de café, cimentando su posición, consiguen bonificaciones sobre el grano exportado, a pesar de estar gravada con un leve impuesto, y que tenía como función disminuir las deudas cafeteras (81).

En medio de toda esta situación, los acontecimientos externos pasaban a ser determinantes. Concluído el acuerdo mundial del café, toda una garantía para el sector, pues absorbía dos tercios de la producción, se plantea la renovación. Esta, no sólo tendrá lugar, sino que además, como medida destacada, el entonces ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, sienta las bases del Fondo Nacional del Café.

La importancia del Fondo es notoria. Su financiación, procedente de la emisión de bonos, junto al doble impuesto sobre los giros al exterior y los dólares provenientes de las exportaciones de café, garantizan su viabilidad. El control pertenece a la Federación. Por ello, resulta comprensible que Lleras señalara que sería "la más poderosa institución financiera de la República" (82).

Los precios, sin embargo, se mantuvieron variables. Agosto del 40, con un valor para el café Manizales de 7.5 centavos de

dólar la libra, supuso el punto más bajo. Con todo, a mediados del 41 la cotización subió hasta 16 centavos, suponiendo casi el doble del hasta entonces mantenido.

Ahora bien, el comienzo de la campaña submarina en el Atlántico, suspendiendo las exportaciones hacia Europa, orientaba sobre un sólo consumidor gran parte del café. Los exportadores, con Brasil al frente, resultaron perjudicados. La mayor incidencia recayó sobre 1942 y buena parte del 43. Con todo la crisis era considerable, el PIB mostraba una fuerte caída. Si en 1941 había supuesto 1.7%, al año siguiente, bajaba al 0.2%; contrastando con un alto volumen de reservas (61.9 millones de dólares, en comparación a los 22.5 del 41). Junto a ello, la inflación no perdía su tendencia alcista; llegaba al 8.7%.

La intervención administrativa, no sólo protegía los intereses cafeteros. El resto del sector agrícola, ante la imposibilidad de satisfacer la demanda interna (incluso de trigo), visto el peligro que suponía para las importaciones la guerra, obliga al gobierno Santos a tomar medidas. A éstas, no será extraña la SAC, que despejando sus temores políticos (aún criticando el pobre resultado agrícola por la Ley 200), no desestima las inversiones estatales para el sector.

Así, si en 1937, del conjunto de inversión pública llegaban al 8.9%, al final del mandato santista, lograban el 38.3%. Igualmente, la inversión bruta en agricultura supone, para los mismos años, un ascenso de 6.4% hasta 41.7%. De esta forma, el Estado, compensa la tendencia a la baja de la inversión privada, mejorando la infraestructura, excepto en aquello que se refiere al dominio tecnológico (83).

Al sector industrial la crisis también llegó. Para una economía dependiente, donde era necesario importar equipos, la influencia que tendría sobre el ramo resultaba clara. Comparando períodos tenemos, que si para los años 33-39 el crecimiento es del 10.8%; para 41-45 es 5.37%. El contraste resulta más indicativo fijándolo en el dinámico sector textil. Pasando del 19.59% de crecimiento para los años 30-39, desciende al 0.14% del 41-45. Los salarios textiles, resultaron igualmente afectados. En el período 39-41 los sueldos caen al 3.4%, cuando durante 1935-37, habían subido un 5.5% (84).

Vistos los efectos que la situación de crisis traía para el sector, y ante la dificultad privada en hacerle frente, la opción intervencionista, vuelve a tomar efecto. Las medidas, iniciadas en 1940, buscan apoyar aquellas industrias nacionales, incapaces de desarrollarse satisfactoriamente. El objetivo, contar con una industria que atienda a las necesidades metalúrgicas, producción de caucho, química etc.

Como respuesta mediata, en 1940-41, fundan el Instituto de Fomento Industrial, (IFI). Este, con un capital inicial de 4 millones de pesos, de los cuales tres son aportados directamente por el Estado, y uno por el Banco Central Hipotecario, intenta desarrollar una actividad de apoyo al sector, que posteriormente será concretada con fábricas de neumáticos, productos químicos, etc. A éstas les seguirán, toda vez que es confiscada una firma alemana, la empresa de aviación Avianca, los ferrocarriles y la flota Grancolombiana, con participación del gremio cafetero.

Otros sectores, como es el caso de la construcción, también reciben el apoyo estatal. En 1939, y bajo el nombre de Instituto de Crédito Territorial, se proponen atender las necesidades existentes

para los campesinos. Tres años después se le agrega la vivienda popular urbana (85).

De esta forma, el gobierno de Santos parecía actuar de forma contraria al pensamiento liberal. Los institutos nacionales, sumados a la creciente inversión pública, sin olvidar algunas concesiones al estamento privado, hicieron concebir esperanzas. La realidad será distinta. El Estado, que había sido empleado convenientemente para solventar dificultades momentáneas, contentaba así a los gremios. Con la vuelta de López, aquellos que pudieran tener ciertas confianzas, pronto las perderían. El modelo liberal se consolidaba.

1.3. El segundo gobierno de Alfonso López, 1942-45.

1.3.1. El Estado y los Partidos Políticos.

Llegamos ya a la última de las administraciones que formaron el período descrito. El gobierno de Santos tocó a su fin, y 1942 marca el inicio de un nuevo mandato lopista. Las características de éste, serán diferentes a las adoptadas en los años 30.

La herencia dejada tras las elecciones presidenciales, resultaba preocupante. De una parte, la división interna siguiendo en el liberalismo, afectó también al conservador. De otra, la influencia que ello tendrá en la situación política posterior, ocasionaba un período de difícil concordia.

Los conservadores, y Gómez en concreto deben enfrentarse a una nueva realidad. El apoyo prestado a Carlos Arango, sin olvidar las opiniones sobre la guerra mundial, le acarrearán la pérdida de influencia en el partido. Los que habían sido favorables a la candidatura de López ganaban terreno. Es más, sectores como los de Bogotá, Medellín y Tolima, aparte de distanciarse de sus planteamientos, lo excluyen de las listas para las elecciones a la Cámara de Representantes del 43.

No se detienen aquí los intentos por desplazarle. Así, aquellos conservadores que habían colaborado con los liberales en labores de gobierno, optan por crear una revista semanal, *El Nuevo Tiempo*, buscando romper la hegemonía de *El Siglo* (86).

De igual forma, conocidos líderes locales, que tan importante papel jugaron en la ascensión del partido Conservador en la segunda mitad del decenio, hacen lo mismo. Uno de ellos, Augusto Ramírez Moreno, que por aquel entonces marcaba diferencias con Gómez, manifestaba sus pareceres acerca de los liberales:

" ... Definitivamente declaro que el liberalismo no es un partido de asesinos, sino un partido de compatriotas ... Declaro clausurada la vieja política, la del gomismo, la que enseña cómo la política no es un medio de servir, sino un medio de subsistir,... la del gomismo enemigo de la República y traidor a la democracia ... " (87).

Todos estos acontecimientos, venían a corroborar el sentimiento de polarización, no sólo interpartidaria sino también entre ambos partidos. Tal situación se traducía en el parlamento. Con ella, López no podía mantener la cohesión deseada. Los intentos por tener una política de Estado (distinta a la del mandato anterior), requerían el interesado filtro del partido (88).

Igualmente, las condiciones que desde la política mundial se observaban, resultaban poco propicias para el nuevo gobierno. La recesión económica se haría notar, desde el sector privado se estaban produciendo múltiples ajustes. La salida más factible era la carrera administrativa. Es por ello que López decide abrir las puertas para los miembros del liberalismo sin ocuparse de su origen, ya fuesen leales a su persona o aranguistas.

Ante tan tenso ambiente, aquellos que veían en el regreso de López Pumarejo, un temor para sus intereses, comprobaron que el presidente, lejos de estar dispuesto a cambiar la política emprendida por Santos, deseaba la profundización, y marcar más si cabe la distancia con respecto a sus viejos aliados, los sindicatos.

Conocida la designación del gabinete, donde los puestos clave serían ocupados por destacados miembros de la élite económica Antioqueña-Caldense, cercana a López, las dudas quedaron disipadas. Ya en el año 43 se forma la "Comisión de defensa económica", encargada de reunir las diversas actividades productivas del país, incluyendo sectores que van desde la industria hasta la ganadería.

El objetivo, romper la atomización en que estaban sumidos los sectores industriales, consiguiendo una acción conjunta en defensa de sus intereses, y así contrarrestar las intenciones sindicales. Para lograr tal objetivo habrá que esperar un año. En 1944 se funda la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, teniendo continuidad al año siguiente con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco (89).

Contrastando con la acción de su anterior gobierno, la convulsión socio-política, aparece temprana. Con los grupos de poder situados en el gobierno; desde medios sindicales, comprendieron que el momento de concordia había pasado.

El nombramiento de un banquero como ministro de Trabajo, Arcesio Londoño, crea desconfianza ante las intenciones, en materia laboral, del nuevo gobierno. Estos, conscientes del poder sindical, proponen la regulación del derecho de huelga. Con ella, la intervención estatal resultaba notoria. Los objetivos iban destinados al control del derecho. Así, en caso de querer aprobar una huelga, ésta habría de contar con el acuerdo de al menos dos tercios de los trabajadores. Los servicios mínimos estarían regulados, y si excedía en su duración de treinta días, el arbitraje era obligatorio (90).

Sin embargo, comprueban con alivio que, gracias a las críticas recibidas dentro del propio partido, Gaitán entre ellos, resulta retirada. A pesar de todo, López había demostrado, su intención por hacer ver ante los ojos de los sectores financieros, la separación con respecto a los sindicatos, iniciada ya en los años finales del primer mandato.

Políticamente, el 43 habría de traer varias consecuencias. De una parte, ante la sorpresa de las formaciones tradicionales, el partido Comunista consige en las elecciones a la Cámara, 27.000 votos. Traducido en escaños, suponía diez diputados en diferentes asambleas, tres representantes en la Cámara y un senador. Con este resultado se conciben nuevas esperanzas, que les hacían pensar en la formación de un partido de masas (91). De otra, el bipartidismo, pareció recibir el desgaste sufrido por el liberalismo al frente del gobierno, con especial preocupación.

1.3.1.1. La interinidad de Darío Echandía.

El presidente, vista la situación opta en septiembre por delegar funciones en su ministro de Gobierno, Darío Echandía; en

mayo del 44 recupera el mando. Entre tanto, hechos aparentemente marginales, como el asesinato del boxeador "mamatoco", relacionado con la seguridad presidencial, o el caso "Handel", sobre apropiación indebida de bienes, donde las acusaciones llegan al hijo del presidente, provocarían un gran revuelo.

La prensa y especialmente la conservadora, visto que el caso parecía perderse en el entramado judicial, intenta demostrar la culpabilidad de Alfonso López. Gómez, tampoco permaneció ajeno. Su quebrantada posición en el partido, gracias al empeño puesto en éste, donde erigiéndose como defensor de la transparencia judicial, criticaba directamente al aparato del Estado, proponía como solución, si fuese necesario, el uso de la violencia como elemento de transformación. Es entonces, cuando los ataques laureanistas pasan a ser contra el sistema político en su totalidad (92).

Utilizando como medio su conocida capacidad de oratoria, da mayor virulencia al mensaje. Con ello, buscaba asentarse definitivamente como líder, recurriendo, entre otros temas, a los hechos cotidianos, donde coincidía con Gaitán. En igual medida, concentrando atención sobre su persona, la prensa y en particular la liberal, hicieron de mensajeros gomistas en aquellas zonas donde su presencia apenas era conocida.

El año 44 marcaba un paso más en la crisis iniciada en el anterior. La problemática institucional afectaba fuertemente al funcionamiento del Estado. El liberalismo, como partido en el poder, dividido entre santistas y lopistas, pugnando por el control burocrático, contribuyen a ello. La anunciada candidatura de Gaitán para las presidenciales del 46, aumentó los temores.

Entre tanto, los conservadores liderados por Gómez, aprovechando cualquier aspecto que pusiera en entredicho al débil

gobierno, tomarán al legislativo como centro de sus denuncias. La alternativa estaba planteada: ellos o el caos.

1.3.1.2. Fin de la interinidad de Darío Echandía.

La vuelta de López al frente del gobierno hizo concebir algunas esperanzas. Sin embargo, las contínuas insinuaciones sobre la proximidad de un golpe de estado, contando para ello con el apoyo conservador, enrarecían aún más el cargado ambiente nacional. Así las cosas, los rumores se hicieron reales. En julio y durante unas maniobras militares, que tenían lugar en Pasto, López es retenido. Conocida la noticia, Echandía se hace cargo de la situación. Junto a él, Alberto Lleras, controla los medios de comunicación.

Conocida la liberación, las sospechas recaían sobre Gómez. Su diario es clausurado, y parte con destino al Ecuador. Mientras tanto las reacciones son rápidas. Así, Ramírez Moreno, conocido dirigente conservador, en carta dirigida a Santos le manifestaba: "Al dirigirme a usted respetado y querido amigo, quiero sólo repetir en nombre de nuestro grupo cuál es nuestra política: el partido Conservador, es un partido constitucional; el partido Conservador, es enemigo de la violencia y de la dictadura" (93).

Los liberales, por su parte, tras el fallido golpe, parecieron encontrar un factor de cohesión. El Ejecutivo, recuperaba momentáneamente la importancia. La adhesión sindical, traducida en una declaración de huelga general, al conocer los hechos de Pasto, hicieron concebir ciertas esperanzas entre los liberales. La debilidad del partido, fue olvidada. Ahora, los intentos se cifraban en la renovación liberal al frente del Ejecutivo, ganando las próximas elecciones.

Sin embargo, las diferencias surgieron de nuevo. La falta de autoridad interna, unida a la pasividad del Congreso, eran ejemplo de ello. Así, el Decreto 2350, estableciendo el número de horas de trabajo (ocho para la industria y servicios, por nueve en la agricultura), unido a la regulación del derecho de huelga, junto con el arbitrio en los conflictos laborales, al tiempo que no permitía el paralelismo sindical (94), como único logro del legislador, era buen ejemplo de la situación reinante.

Por otra parte, la crisis se extendía fuera del liberalismo. El hasta entonces partido Comunista, (después del éxito electoral), celebrando su segundo congreso, realiza varios cambios. El primero afecta al nombre, a partir de ahora se llamará, Partido Socialista Democrático (PSD). En cuanto a su programa, el cambio no es menos significativo. Las críticas hacia los financieros, son comedidas.

- ° Gilberto Viera reconoce "que el capitalismo colombiano, aunque naciente, es elástico y comprensivo y facilita el acuerdo entre patronos y obreros" (95). En igual medida, ante la fallida intentona militar, ofrecen su apoyo a las instituciones.

Las líneas personales recuperaron su campo. Ni siquiera la vuelta al liberalismo de antiguos aliados, como la Vanguardia Socialista, denominada ahora Liga de Acción Política, servía de aliento. Las discordias entre los líderes ocupaban buena parte de la acción gubernamental. En septiembre, y teniendo como fondo la censura impuesta por López a raíz del fallido golpe, Santos muestra su oposición. Junto a éste, los sindicatos, erigiéndose en defensores del sistema democrático, organizan milicias populares. El presidente, ordena la disolución inmediata.

Por parte conservadora, la ausencia de Gómez, hizo concebir esperanzas sobre una renovación en su dirección. Al

indicado Ramirez, se le unirá Roberto Urdaneta Arbeláez. Este, liderando por aquel entonces una línea de oposición a Gómez, amparado en el éxito obtenido en las municipales, intenta hacerse con la dirección del partido.

El resultado es pobre, las masas conservadoras, acostumbradas al carisma de Gómez, pese a encontrarse en el Ecuador, impondrán su liderazgo. Una vez que el regreso al país es posible, la unidad del partido ante el líder no ofrece duda. Las disidencias se oscurecen y las posibilidades de enfrentarse al liberalismo en las urnas aparecen más diáfanas.

Llegados al 45, la herencia de los anteriores, en cuanto a crisis de gobernabilidad tocan fondo. Las divisiones del liberalismo, pasando del enfrentamiento personal, se transforman en corriente. Las presidenciales del 46, tomando como ejemplo las del 42, verán cómo la división liberal, con la presentación de dos candidaturas, Gabriel Turbay y Jorge Gaitán, demostraban que el conjunto del aparato gubernamental estaba más afectado de lo requerido.

Alfonso López conocedor del grave deterioro, y desconfiando del apoyo demostrado por ciertos sectores, opta, mediante sesiones extraordinarias del Congreso, llevar a cabo una nueva reforma de la Constitución (96).

Bajo el nombre de Acto Legislativo 1º de 1945, se disponen cambios en relación al legislativo. Así, las elecciones al Senado que anteriormente se hacían indirectamente, por medio de las asambleas departamentales, se realizarán de forma directa. Políticamente la diferencia entre las Cámaras, queda disminuida. Desde la óptica económica, dando prioridad al gasto público, aumentarán la vigilancia fiscal, dotándola de completas competencias

constitucionales que posteriormente concederían al Contralor General de la República (97).

Con estas disposiciones, unidas a las dictadas en materia laboral, que si bien suponían restricciones respecto a la anterior (Decreto 2350), surge la Ley 6 de 1945. Con ella, buscaban más bien retrasar la caída del régimen lopista. Esta, limitaba el pago de indemnizaciones por despido; hacía perder a los trabajadores su presencia en los tribunales de trabajo; al tiempo que socavaba el fuero sindical, pues permitía la injerencia de los trabajadores no sindicalizados en las declaraciones de huelga; ampliaba el criterio de servicio público, y admitía la intervención de la fuerza armada (98).

Así las cosas, al presidente le quedaban escasos recursos que le permitieran continuar las labores de gobierno. Las presiones exteriores, conservadoras principalmente, y en el interior del partido, marcaban el final. El 19 de julio, López presenta renuncia. Alberto Lleras, su ministro de Gobierno, era el nuevo presidente interino. La dimisión restó intensidad a los ataques recibidos. Ahora, los que tanto le combatieron, esperaron con cierto aliento la presidencia transitoria.

1.3.1.3. El intermedio de Alberto Lleras Camargo, 1945-1946.

Llegado Alberto Lleras a la presidencia, los dirigentes políticos confiaban detener la crisis institucional heredada del lopismo, al tiempo que tener las garantías suficientes para celebrar los distintos comicios, municipales y presidenciales, en paz. Junto a ello, la relación con los sindicatos, sufrirá un nuevo cambio, desfavorable para los primeros.

Para Lleras, la fórmula que habría de consolidar tal pensamiento estaba esbozada en una palabra, colaboración. Es así que, aprovechando el discurso de posesión como presidente de la República, manifiesta: "Tengo el convencimiento de que la colaboración nacional preconizada por el Presidente López, había podido realizarse bajo su dirección, en mejores condiciones, pero aún así, encuentro que es indispensable adelantarla" (99). La colaboración no se retrasa, tres miembros del partido Conservador formarán parte del gobierno.

Nombrado éste, las sospechas del ala gomista, según las cuales, los liberales intentarían controlar en exclusiva el aparato del Estado, no tenían consistencia. Gracias al ofrecimiento, no sólo consigue que Gómez se vea obligado a disminuir sus ataques, sino también, ante la creciente desmenbración liberal, ofrecer la cohesión necesaria para la gobernabilidad.

Sin embargo, el presidente será consciente de la confianza que en él han depositado los dirigentes de ambos partidos. Gracias al nombramiento de ministros conservadores, las posibilidades de concordia aumentaban. Los moldeables hábitos democráticos del país, serían profundizados y las denuncias de fraude, aunque continuaban, parecían encontrar respuesta.

Es así como, poco después de la posesión presidencial, y aprovechando el foro ofrecido por jefes del liberalismo, expresaba: "Nuestra democracia no ha llegado a una perfección mayor porque no están bien garantizadas, ni la expresión movible y cambiante de la opinión, ni su registro adecuado y recto. La primera condición han de asegurarla los partidos; la segunda, las instituciones y las costumbres sociales" (100).

Por otra parte, cimentando las muestras de tranquilidad recogidas en los diversos medios políticos del país, socialmente, la nueva orientación llerista, no tardará en llegar. Los temores de una

creciente intervención sindical, en demanda de peticiones salariales, unidas a las desconfianzas que en ambientes industriales y financieros, levantaba la presencia del PSD, en los órganos de dirección de la poderosa CTC, pronto serán puestos de manifiesto. Alberto Lleras, en discurso dirigido ante ANDI, considera: "Hemos luchado, como gobierno desde hace años, contra el abuso del patrón, y sería doloroso y absurdo que cuando apenas empieza a vislumbrarse una situación mejor para nuestro pueblo, tengamos que comenzar a luchar contra los abusos del proletariado" (101).

Políticamente los acontecimientos parecían estar discurriendo de forma fluída. Socialmente, la realidad ante la cual se encontrará Lleras, deberá asumir de forma muy continuada, el enfrentamiento gobierno-sindicatos. A las ya indicadas reticencias que por parte del gobierno e industriales, supone el control que establecen los representantes del PSD en la cúpula sindical, habrá que unir, las disenciones internas que, ante el nuevo problema de huelgas próximas, se producirán entre ellos. Llegado el momento, los representantes sindicales del sector textil de Medellín, deciden mantenerse al margen de la protesta.

Según éstos últimos, la vía elegida es equivocada dado que: " ... Todo intento de amargar y envenenar las relaciones entre empresarios y trabajadores en un país que en 25 años ha llenado su legislación de protección social al grado de la nuestra .. es insensata y no corresponde a los intereses asalariados ... " (102).

Sin embargo, a pesar de la negativa del sector antioqueño, en hacer frente común con el resto de sindicatos, las ciudades de Bogotá y Cali, y en menor medida Medellín, serán escenario de huelgas continuadas. Para el gobierno llerista, la situación no puede

continuar. Las aplicaciones de tipo legal pasarán a tener todo el peso de caracter coactivo sobre los sindicatos (103).

Ahora bien, el momento de mayor tensión llega con la huelga de FEDENAL. Este agrupaba a buena parte de los trabajadores del transporte fluvial. El sector estaba en crisis, el descenso del tráfico; la contratación de mano de obra barata, con el consiguiente descenso salarial que ello traía, formaban la trastienda del conflicto, que tuvo como resultado la pugna gobierno-sindicatos (104).

Ante ello, la protesta presidencial llega. Alberto Lleras cree que la huelga afecta más al Estado que a las compañías de navegación. Así, el gobierno, valiéndose de la Ley 6 de 1945, "La más pródiga en el campo laboral colombiano" (105), según la cual, las huelgas de solidaridad son declaradas ilegales, intenta obligar al arbitraje forzoso, de patronos, sindicatos y gobierno. Los segundos no lo aceptan. Las posturas se extremizan, el gobierno cuenta con el apoyo conservador, ante esta situación no hay distancias políticas. El presidente considera que la huelga debe ser parada. Así, el movimiento sindical perderá, no sólo, actividad sino también, capacidad de maniobra (106).

Mediante la contratación de obreros fuera de las empresas, las compañías consiguen reventar la huelga. El presidente alentará tal postura: " ... Quiero pedir a quienes tengan voluntad de ocupar los puestos de los huelguistas, que lo expresen así, con la certidumbre de que serán protegidos en su sagrado derecho a trabajar ... " (107). El llamamiento surte efecto, la huelga es solucionada y el movimiento sindical gravemente debilitado. Pero hay otros factores que influyen en que esto sea así.

Para que cualquier movimiento logre tener éxito, debía contar con un fuerte grado de cohesión. La huelga de FEDENAL

parecía carecer de éste. Así en el mes de diciembre, uno de sus sindicatos más importantes, Simbranave, levanta la huelga, su presidente reconoce no haber estado de acuerdo, ya desde sus inicios. Igualmente, el resto de sindicatos que en principio habían manifestado su apoyo, la abandonan.

Así, la Federación de Trabajadores del Petróleo, al ver que son satisfechas sus demandas, decide volver al trabajo. En la propia CTC, había falta de unidad. Poco después de declarada la huelga, deciden celebrar votación. En ella, once representantes están de acuerdo, nueve en contra, y 19 no participan. Ya en diciembre, 17 votos contrarios, por sólo nueve a favor. Dado el resultado, el primero de enero, los sindicatos proponen la suspensión (108).

Vistos los resultados, aquellos que abogaban por la separación entre el Estado y los sindicatos, cimentaron su posición de forma más clara. Para *Revista Javeriana*, la situación creada tenía una explicación: "Con este descalabro los trabajadores tendrán menos confianza en sus dirigentes, y escarmentados aprenderán a hacer sus reclamos por las vías que nuestra constitución permite" (109).

En igual medida, las disputas personales, no son extrañas al fracaso. La oposición entre Diego Montaña, líder del sector petrolero, y Antonio Durán entonces presidente del PSD, pudieron resultar determinantes en el final de aquélla. A partir de ahora, dada la debilidad sindical, destacadas personalidades, ya fueran liberales o conservadoras, buscarán ganar las corrientes populares. Jorge Eliécer Gaitán y Laureano Gómez, serán los encargados de atraer las diversas peticiones que en el seno de la sociedad estaban demandando una mayor atención.

1.3.1.4. Los candidatos a las presidenciales del 46.

La proximidad de las elecciones del 46 hacían presagiar una fuerte lucha por el control del Estado. Una vez disipado el problema sindical, había que asentar las bases, cuasi hegemónicas, que pudieran satisfacer tales deseos. El cómo conseguir tal objetivo, era algo que los grupos dominantes no estaban dispuestos a desperdiciar.

Para los liberales, la presentación inicial de tres candidaturas, traslucía de forma diáfana la división interna que en el partido se estaba viviendo. De las indicadas, una de ellas, la presentada por Darío Echadía, que resultaba identificada como del continuismo, hubo de ser retirada al comprobar las escasas posibilidades que presentaba para su elección. Por contra, las dos restantes, con Jorge Eliécer Gaitán, y Gabriel Turbay, lograron concentrar gran parte de los esfuerzos electorales que el liberalismo tenía en aquel momento.

Desde la legación española, la situación que todo ello representaba era vista así, en informe enviado en marzo del 45:

" ... Don Gabriel Turbay, que se presenta como renovador moral del partido liberal y que cuenta con la ayuda de elementos tan poderosos dentro de aquel como el ex-presidente de la República Don Eduardo Santos, propietario de *El Tiempo* el diario más importante de Colombia y de su grupo conocido por el nombre de "Santistas". Si algún reparo suele hacerse al señor Turbay es su origen sirio, lo que no deja de ser una rémora en este país de exaltados xenófobos. El tercer candidato es el señor Jorge Eliécer Gaitán que se presenta con el título de "el candidato del pueblo". Tiene gran ambiente entre las clases populares a quienes halagan sus teorías que en el fondo son una exaltación de las ideas

antidemocráticas pues combate acerbadamente la podredumbre politiquera que impera en el País, aunque cubriéndose con la marca del liberalismo y de la democracia ... " (110).

Respecto a Gabriel Turbay, a las ya indicadas muestras de xenofobia, habrá que unir la distancia que hacia su candidatura mantenían los miembros representativos del liberalismo. Para los diplomáticos españoles, las dificultades estaban en: "El expresidente López odia a Turbay, no ha dudado en usar de la influencia política de que aún dispone para ayudar a Ospina Pérez, a pesar de que ello suponía la derrota del partido Liberal" (111).

Por lo demás, las actividades gubernamentales no le habían sido extrañas. Ocupó el puesto de ministro de Gobierno durante el gobierno Olaya. Allí desplegó buena parte de su trabajo político. Suyas son las ideas de extender los beneficios del seguro social para los empleados públicos. De igual manera, trataba de mantener la independencia ante las corrientes mayoritarias del liberalismo, lopismo y santismo. Con él, perdida la candidatura de Echandía, se intentaba establecer una continuidad en la política liberal de aquel entonces.

En cuanto a Jorge E. Gaitán, a las ya señaladas reticencias por parte de sus copartidarios, había que unir las que llegan desde los sectores sindicales. Para éstos, la política de corte populista representada por el líder liberal, supondrá una nueva y peligrosa orientación que hará peligrar el monopolio que consideraban detentar.

Ya en los años treinta, y en plena "Revolución en Marcha", las acciones del joven abogado, destacaban en favor de aquellos que él mismo llamaba "los sin voz". Igualmente, con la fundación de UNIR, trató sin éxito, de fundar una tercera fuerza. La hegemonía

bipartidista no se rompió. Su vuelta a la política será desde el padrinazgo que el liberalismo le ofrezca.

Las características del movimiento gaitanista, ya en los años treinta, estarán influenciadas por las diversas corrientes populistas que entonces tenían gran raigambre en el continente americano. Sus contactos con Haya de la Torre, junto a la formación recibida en la Italia de Mussolini, habrán de causarle honda impresión. Ya en Colombia, durante los cuarenta (hasta el 48), su incorporación a la política activa es total. Lo demuestra el hecho de haber desempeñado cargos tan dispersos como ministro de Educación Nacional, en la administración Santos; o de Trabajo, Salud e Higiene, con Echandía (112).

Ideológicamente su recorrido será disperso. Así, con motivo de la licenciatura en derecho presentó "Las Ideas Socialistas en Colombia" (1924). Ya en los años treinta, mediante el programa de UNIR, da a conocer de forma más exhaustiva sus intenciones. A continuación, intenta, sin conseguirlo, hacer frente a López para las presidenciales del 42. Con todo, será a partir de 1945, cuando las orientaciones gaitanistas tengan sentido populista.

De éstas habrá que descubrir las que responden a las constantes de la política nacional. Así, tendrán cabida desde los problemas agrarios; pasando por los que afectan a la salud; hasta la creciente problemática laboral (limitación del derecho de huelga, etc). En ellas, estarán configuradas las bases de lo que posteriormente será el punto central de su discurso. La búsqueda de una mayor igualdad, restableciendo con ello, buena parte de la armonía perdida.

Sus deseos por romper las barreras sociales existentes en el país, difícilmente podían ser ajenas a las intenciones que gran parte del naciente proletariado urbano trataba de conseguir. Hacer

ver que el propio pueblo, gracias al proyecto gaitanista podría solventar las crisis existentes y que él sería uno de los protagonistas, presagiaban un medio perfecto para dicho discurso (113).

Para Gaitán, era necesario distinguir dos formas de entender la realidad social del país. Es así, como usando la terminología de Charles Maurras, sobre "país político" y "país nacional" (gracias al grupo de derechas los leopardos), el político liberal, al emplearlos de forma constante, señalando la contradicción, sustenta sobre éstos el discurso populista.

De las diferencias que entre ambos se establecían, en qué medida marcaban sus distancias el uno del otro, y cómo articulaban sus formas de hegemonía; el dirigente liberal, gracias a estos antagonismos, y aprovechando los medios de comunicación a su alcance, crea una corriente de opinión que le permite enlazar con amplios sectores de la sociedad colombiana, principalmente la urbana.

Así, las referencias que hace al "país político", como depositario de influencias oligárquicas, haciendo de éste, un elemento en discordia, carente de preocupación ante la problemática de un pueblo, le llevarán a exclamar: "La oligarquía, el país político, no comprenden que pueda ser candidato a la presidencia de la República uno de vosotros, los del país nacional, sin el permiso o consentimiento de ellos, aún cuando lo sea en nombre de la República y por la autoridad del pueblo" (114).

Por otra parte, y a medida que las elecciones se acercan, las intenciones de Gaitán por establecer distancia con respecto al "país político", se acrecientan. Durante un discurso en 1945 y refiriéndose a la oligarquía, dice: "Cuando en un país la política llega a extremos tales, de espalda a los intereses de nacionalidad, podemos afirmar sin vacilaciones que se ha implantado el régimen oligárquico" (115).

Como contraposición a esta distancia, intentará recuperar la cercanía del pueblo. El recurso a lo más inmediato será ampliamente usado. Con frases como "El hambre no tiene color político" o "Las enfermedades no son ni conservadoras ni liberales", Gaitán está mostrándose ante la sociedad colombiana, como un líder que sabe llegar a lo cotidiano, y lo que es más importante, les indica dónde está la parte contraria que no permite lograr su desarrollo integral (116).

Con tal indicación da un paso hacia la filosofía de acción populista. Mediante la mitificación del otro (la oligarquía), aquel que sufre sus desmanes, indiferencias etc, solamente podrá liberarse a través del conjunto que constituye una realidad llamada pueblo. La ruptura con lo individual, perfectamente enlazado con lo "político", y el resurgir del conjunto, tal y como ocurría en lo "nacional", marcaban una barrera insalvable entre ambas disposiciones. La unión de todos estos elementos tendrá que estar depositada en el "país nacional". Gaitán acudirá a éste, cada vez que quiera marcar la contraposición con el mundo al cual intenta combatir.

Bajo estos dos puntos se encuentran algunas de las claves que el líder liberal plantea en su discurso. Las elecciones presidenciales, eran el medio adecuado para extenderlas. Gracias a ellas y a los medios de comunicación (radio básicamente), el mensaje gaitanista penetraba en el pueblo de forma constante.

Para aquellos que, en los treinta, confiaron en las reformas de López, no quedando satisfechos, el planteamiento populista, les hará concebir esperanzas sobre la realidad perdida. Los años posteriores a la posesión de Mariano Ospina como presidente, serán la muestra de que él estaba dispuesto a intentarlo.

Todas las acciones anteriores, en el caso de establecer una mínima solución, debían pasar por la delimitación del papel del Estado. Según Gaitán, la reordenación habría de ser organizativa y constitucional. El lo cifra: " ... Se trata de que el Estado, pierda la única significación actual de politiquero, burócrata, para adquirir su carácter funcional de Estado económico y de actuación social ... " (117).

Política y socialmente la aceptación del mensaje gaitanista va ganando adeptos. Por contra, los compañeros de filas, comprueban con recelo la subida del nuevo líder. El respeto y prestigio que alcanzaba en la política nacional, resultaba preocupante. Ahora bien, el liberalismo con Gaitán, conseguía recuperar buena parte de los sectores que en los años treinta habían confiado en la política lopista. Sin embargo, los sindicatos (defensores del expresidente), siguen desconfiando de aquél y mantienen las distancias.

Mientras tanto, el partido Conservador, estaba atento a lo que en el otro partido ocurría. Es más, las divisiones liberales tenían su apoyo. La prensa conservadora, con *El Siglo* al frente, mostraba un amplio interés por las actividades de los líderes liberales. Gaitán será el elegido, sus críticas antioligárquicas, tendrán amplio eco. Laureano Gómez, asimismo, elogiaba al político liberal. Algunos temían la unión que ambos pudieran conseguir. Gómez en el campo, y Gaitán en las urbes, hubieran obtenido una mayoría difícil de desbancar (118).

La realidad fue distinta, Gómez abandonó toda política de colaboración con Gaitán. Fiel a los postulados del partido, aunó esfuerzos para la convención conservadora que habría de elegir candidato. Sorprendentemente no se presentó, con ello quería aliviar los temores que ciertos sectores habían manifestado en su contra. Por ello, decide apoyar la candidatura del ingeniero antioqueño Mariano Ospina Pérez.

Este, miembro de una familia con amplia tradición política (descendiente del presidente Mariano Ospina Rodríguez), y económica (vinculados al sector cafetero), al que los cargos públicos no le eran extraños (había sido en 1927 ministro de Obras Públicas); que sabía guardar distancias cuando las discusiones eran doctrinarias (comunismo o Constitución); asume, ya en los treinta, el nombramiento de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, como una fuente de doble utilidad. De una parte, mantiene importantes vínculos con el sector productivo más importante del país, de otra, aprovecha sus contactos para la posterior carrera política (119).

Ya en la campaña electoral, el retraso de la nominación, no logrando recorrer el país, tuvieron como solución la utilización de la radio como medio de propaganda. El punto central del mensaje: la formación y desarrollo de una política de Unión Nacional.

Esta, y según palabras del propio Ospina, era necesaria porque: " ... Los gobiernos de partido están proscritos. El sectarismo no puede seguir ensoñoreando el gobierno de la nación ... Todos los hombres de buena voluntad serán los materiales colaboradores del gobierno de Unión Nacional, que voy a presidir si la victoria nos acompaña ... " (120).

Llegado el momento, las elecciones se realizan con relativa tranquilidad. Los resultados, si atendemos al aspecto distributivo depararon ciertas sorpresas. Así, el que se creía patrimonio urbano-liberal, tendrá que aceptar introducciones conservadoras. Ciudades como Manizales, Cali y Pereira, donde el voto ospinista superó el 30%, son buena muestra de ello (121).

Los liberales, debido a la división, comprueban que si hubieran conseguido la candidatura única, la derrota de Ospina habría sido factible; al no ser así, éste sería el próximo presidente. La

pérdida, traía consigo interrumpir diez y seis años de gobierno liberal. Además, como el ascenso de Gaitán resultaba notorio, aceptar que era algo inevitable, iba a crear tensiones internas. Desde el lado sindical, la sorpresa no era menor, las ayudas prestadas en favor de Turbay no sirvieron. Los núcleos urbanos, tales como Barranquilla o Cartagena, donde su implantación era mayor, en contra de las esperanzas puestas, dan el triunfo a Gaitán (122). Con todo, las expectativas de gubernabilidad estaban cubiertas, la presencia liberal era una garantía.

Con los resultados obtenidos, el triunfo de Ospina, complacía, en cierto modo, a los liberales. Igualmente, sus deudas políticas, exepcto con Gómez, no existían. Así, en principio, no tenía porqué satisfacer los deseos de sus seguidores, por copar puestos burocráticos. Además, la estrenada Unión Nacional, contaba con mayoría liberal en el Congreso; el antagonismo Ejecutivo-Legislativo, sería constante durante la legislatura venidera. Es por ello que, Ramírez Moreno, compañero de partido, expresaba: "Mariano Ospina es un patriota inhábil para la política y para la violencia, apto sólo para la creación en reposo" (123).

1.3.2. Las relaciones Iglesia-Estado, 1942-1946.

El segundo mandato de López Pumerejo, y por extensión el intermedio de Lleras Camargo, si en lo político tuvo sus dificultades, éstas, en cuanto a relaciones con la Iglesia, tampoco le serán extrañas. Primeramente, hubo de preocuparse por no sobresaltar en exceso los ánimos, más cuando la fallida ratificación del Concordato no había tenido lugar. En el sector eclesial, las posiciones mantenidas durante las negociaciones, afectaron al

espíritu de concordia episcopal. Para Perdomo era imprescindible recuperar la unidad perdida. Los enemigos externos servirían como excusa. Apagadas las cenizas del Concordato, surgen los nuevos paradigmas. Los protestantes y comunistas concentrarán buena parte de la atención.

Por lo que a los primeros respecta, la convivencia en un medio mayoritariamente católico, poco proclive a la tolerancia religiosa, traía como resultado, ciertas muestras de hostilidad hacia sus representantes. Es en éste ambiente, cuando en 1943 la Conferencia Episcopal, denuncia al protestantismo. Como consecuencia de ello, tanto en los medios rurales como urbanos, el clero difunde el mensaje condenatorio. Las protestas no tardan en llegar. Desde la embajada norteamericana piden respeto para los misioneros protestantes. Se intentaba proteger a éstos, pues en su mayoría eran de dicha nacionalidad (124).

Respecto a los segundos, la Iglesia veía con temor la introducción, cada vez mayor, de militantes comunistas en los medios sindicales. En este punto acompañaba al partido Conservador. Como hemos señalado, la preocupación episcopal, tenía ya tradición. Los años 36 y 40 son buena muestra de intentos eclesiales por dar a conocer su mensaje sobre la cuestión. Para los obispos, la salida más airosa habría que buscarla en la formación de sindicatos católicos, encargados de poner en práctica las pastorales pontificias sobre el trabajo. Tal proposición tendrá fruto en los mandatos conservadores de la segunda mitad del decenio.

Será en 1944 cuando las críticas con respecto al comunismo, adquieran una renovada consistencia. En abril de éste año, es nombrado rector de la Universidad Nacional Gerardo Molina.

Por tal motivo, el episcopado, en carta dirigida al ministro de educación, hizo público un documento en el cual expresaba:

" ... la extrañeza y honda pena que ha sentido el episcopado, y el escándalo producido en los católicos de todo el país, sin distinción de partidos políticos, por el nombramiento de rector de la Universidad Nacional que el consejo de dicha entidad ha hecho en la persona del señor doctor don Gerardo Molina, cuyas ideas socialistas son un peligro para la juventud ... " (125).

El discutido nombramiento vendrá acompañado de nuevas pastorales sobre el peligro comunista. Tanto Perdomo como Builes, harán referencia a ello (126). Ahora bien, cuando los pronunciamientos eclesiales parecían recobrar intensidad, la fallida intentona golpista, servía de unión. Es por ello que monseñor Perdomo expresa: " ... Es un deber primordial de mi cargo el recordar y reafirmar... la doctrina del Evangelio ... que enseña el respeto y obediencia debidos a la autoridad ... y condena los atentados y la rebeldía contra los poderes constituidos ... " (127)

Toda vez que la intentona resultó sofocada, para los obispos, las advertencias que contra el peligro comunista pudieran decirse, debían ser anunciadas. El conocido obispo Miguel Angel Builes, de Santa Rosa de Osos, en línea con las recomendaciones que habían realizado en anteriores ocasiones, da a conocer, en pastoral publicada en septiembre del 44 su opinión al respecto. Según él:

" ... En cumplimiento de nuestro deber pastoral, declaramos que ningún hijo de la Iglesia puede pertenecer al partido social demócrata o comunismo colombiano. Y mientras la Federación de Trabajadores de Antioquia insista en sostener la absoluta independencia del movimiento sindical frente a las autoridades eclesiástica y civil emanadas de Dios,

prohibimos a los católicos inscribirse en cualquier sindicato de los afiliados a dicha comunidad ... " (128).

Junto a él se manifestaron otros prelados, como fue el caso del arzobispo de Medellín, Joaquín García Benítez; o el obispo de Garzón, Gerardo Martínez, que advertía sobre: "el mayor peligro que amenaza hoy la religión y la patria, cual es el comunismo" (129).

Ya en los momentos finales la confusión vino a acrecentarse. En marzo del 45, fueron encontradas ciertas cantidades de explosivos situadas a un lado del órgano catedralicio. Este hecho, sirvió no solo para denominarla como "conspiración del órgano", sino también para aumentar las sospechas hacia el clero en sus intenciones antiliberales.

El arzobispo reacciona, y el 11 de marzo, publica una nota, donde además de mostrar su pesar por el hecho delictivo, manifiesta: "reiteramos ahora, conforme a la doctrina de la Iglesia, la reprobación de todo movimiento subversivo contra las autoridades constituídas, o de cualquier atentatorio contra el orden público.." (130).

Acercándonos al final del mandato, tuvo lugar un nuevo intercambio de opiniones. Las referidas declaraciones vertidas por ciertos obispos, contrarias al comunismo, sirvieron al presidente como disculpa para entender, que si en los treinta el clero había dado muestras de un amplio discurso, más allá del pastoral, en ésta ocasión, al hilo de las declaraciones anteriores, estaban preparando: " ... la puerta para el reingreso del clero en la política y dió lugar al desconcertante espectáculo de liberales... que se echaban al campo alegremente contra el comunismo y contra el régimen ... " (131).

La respuesta del episcopado, que viene a suponer el fin de las diferencias entre ambas instituciones, distingue actividad pastoral de política. En referencia a ésta: " ... una vez más declaramos

que los prelados de Colombia condenamos cualquier intervención del clero en actividades meramente políticas y no vemos qué fundamento pueda haber para hablar de actividades políticas del clero en general ... " (132).

1.3.3. El Estado y las Fuerzas Armadas, 1942-1946.

Ya en el segundo mandato de López, y en consonancia con el creciente clima de crisis institucional que vivía el país, las Fuerzas Armadas, lejos de permanecer ajenas, serán igualmente copartícipes del crítico momento nacional. El fallido golpe del 44, vendrá a confirmar el deterioro de las relaciones entre ambas instituciones.

La reelección de López, traerá como consecuencia un cierto retroceso en los afanes de autonomía militares. De igual manera, las sospechas mantenidas ya en el primer mandato, tanto por lo referido a la influencia conservadora en los mandos militares, como la utilización de la policía, por parte liberal, se convertirán en una pesada herencia para la nueva administración.

El año 43, coincidiendo con los momentos de mayor crisis institucional, en el seno del Ejército, tienen lugar diversos acontecimientos que traerán una mayor fricción con la autoridad civil. Para la cúpula militar, la anunciada reducción de tropas, (contaban con 8000 aproximadamente), unidas a las intenciones gubernamentales de conceder prioridad al aparato policial, suponen un ingrediente más en el enrarecido medio político (133).

Los hechos posteriores así lo confirmaban. El caso del general Eduardo Bonnito, resulta significativo. Este, crítico con el gobierno, desaprueba, no sólo las intenciones de reducir efectivos, sino también el desvío de fondos militares para impulsar la formación vocacional en la tropa. Sus desavenencias llegan hasta el

extremo de retener al presidente, durante un acto público, ante lo cual es acusado de traición (134).

Con esta situación, el malestar va creciendo. La imprudencia presidencial, acusando de aislamiento social al Ejército, unida a la sensación de no contar con criterio alguno, en materia de ascenso, excepto el partidario, lo afirmaban. Es más, los desplazamientos que la vieja oficialidad sufría, preocupaba igualmente a los jóvenes, dada la forma de selección establecida. El presidente López, con todo, no parecía estar preocupado. El Decreto 2107 de noviembre del 43, por el cual nombraban un civil, jefe de la inteligencia militar, crea fuerte tensión entre la oficialidad. Los intentos por lograr un acuerdo, sin la supresión del Decreto, no conducen a nada. La crisis del Ejecutivo afectaba al Ejército (135).

Así, a la desafortunada proposición gubernamental sobre traslados, que junto al aumento salarial decretado para la policía, en perjuicio de la aviación, hubo de unírsele el conocido caso "mamatoco", donde aparacían implicados policías y familiares del presidente, sirvieron para dar cuenta de la intranquilidad existente. Sin embargo, las desconfianzas militares y policiales fueron superadas. La designación, al mando de éstas, de jefes militares, especialmente en el caso de la primera, con el general Domingo Espinel, como ministro de Guerra, vinieron a garantizar la lealtad militar (136).

El año 44 lejos de traer renovadas muestras de concordia entre ambas instituciones, elevará, más si cabe, las ya turbias relaciones entre éstas. La prensa, con El Siglo al frente, ofrece diversas informaciones. En principio, la comunicación entre el ministro de Guerra y el presidente, atravesaba por momentos difíciles; a

continuación, daba cuenta de los deseos por parte de Gómez, de colaborar antes del 20 de julio, en un golpe de Estado.

Los rumores parecieron ser ciertos. Durante unas maniobras militares, en la ciudad de Pasto, Alfonso López es arrestado. El coronel Diógenes Gil será el máximo responsable. Para éste, la acción emprendida, intentaba manifestar "el malestar del Ejército, por el desprecio y ostracismo social a que se sometía a las Fuerzas Armadas" (137).

La intentona resultó fallida. En principio, las guarniciones de Ibagué y Bucaramanga, dieron su apoyo. Los conservadores no estaban al margen. Si bien en Ibagué no intervienen, en Bucaramanga son los encargados de fomentarla. Por el contrario, las posibilidades de triunfo, rápidamente desaparecen. Los miembros del gobierno, con Darío Echandía asumiendo la presidencia interina y Lleras Camargo, como censor, cerrando *El Siglo* (fuente de difusión), trastocaron los planes golpistas. Tras el intento, la división militar era clara. Lo ocurrido en Pasto, no logra catapultar sus intenciones. La fidelidad de las tropas capitalinas, había sido fundamental.

Con todo, la intentona de Pasto suponía un nuevo paso hacia la politización militar. La intervención de sectores conservadores, así lo hacían presagiar. Si bien el Directorio Nacional Conservador, mostró su respaldo inmediato, lo cierto fue que Laureano Gómez, acusado de haber colaborado en el fallido proyecto, por ciertos miembros de su partido, debió marcharse al Ecuador (138).

Como era de suponer las reacciones no tardaron en producirse. Aquellos miembros de la oficialidad sospechosos de haber participado, en su mayoría con tendencias conservadoras, fueron cesados. Para el ministro de Guerra, general Espinel,

solamente un 10% de la oficialidad, podría ser considerada culpable o sospechosa de haber participado (139).

Meses después, y desde una alocución radiofónica, el propio general Espinel, explicaba algunas de las circunstancias que rodearon dicho golpe. Para él:

" ... Que nos dejen solos, que los políticos no se metan con su propaganda en las filas del Ejército; he aquí todo lo que deseamos ... La facción política que intenta difundir sus doctrinas en el Ejército, esta obrando deslealmente con sus adversarios, y que falta razón en su causa cuando necesita de la corrupción de hombres armados ... " (140).

De ésta forma, enérgica, expresaba cuál era el sentir castrense. Las elecciones, con el triunfo conservador, traían un nuevo gobierno, las relaciones, inevitablemente, serían distintas.

1.3.4. Las Relaciones entre los Gremios y el Estado, 1942-1946.

Al segundo gobierno de Alfonso López, donde los condicionamientos políticos ya son conocidos, habrían de unírsele los económicos. La señalada entrada de EE.UU. en la guerra, unido al cierre europeo, trajeron como resultado una difícil situación para las importaciones. Sectores como el transporte o el textil, los servicios públicos, etc, hubieron de hacer frente, al período recesivo, con el uso extra de la maquinaria importada. Sin embargo, no serían las importaciones las causantes del problema inflacionario. La monetización del superávit cambiario, conseguido durante el conflicto, pasará a ser una de sus máximas preocupaciones (141).

Durante el último año de gobierno santista, donde el indicado crecimiento del PIB, alcanzó un 0.2%; tuvo su continuidad en

el 43 con un 0,4%. Por contra, las tendencias alcistas acompañaban al índice de inflación, 15.9%; o a las reservas, que favorecidas por la caída de las importaciones llegaron hasta 113.4 millones de dólares.

Estas cifras, encontraron respuesta por parte del gobierno lopista. Coincidiendo con el primer año de gobierno, las medidas habilitadas, buscan controlar la inflación. Así, y como primera opción, se impone un impuesto a las ventas de productos, (textiles, azúcar, etc), sin que el resultado sea el apropiado. Seguidamente, y comprobada la poca efectividad de las anteriores, optan por incluir una variación. Las tasas sobre el impuesto de la renta subirían un 35%. Este, estaría acompañado del ahorro forzoso en Bonos de Defensa Económica. Los resultados siguen su ritmo fallido. La bonanza de divisas, desborda las previsiones. Controlarlas, y de paso la inflación, era una obsesión. Para ello, introducen un aumento en el coeficiente de caja e incluso obligan a las empresas a invertir en títulos del banco emisor. Aún así, la situación no varía (142).

Sin embargo, los gremios y en especial el cafetero, asentaba sus bases económicas de forma sólida. Los precios del café, no bajaron. El impuesto que debían pagar, quedaba, primero reducido (junio-noviembre del 43), y posteriormente, al año siguiente eliminado. Como resultado, acumular un patrimonio de 88 millones de pesos, que le permitía realizar inversiones en la Caja Agraria, Instituto Nacional de Abastecimientos o en la futura Grancolombiana (143).

Con este panorama, la realidad socio-política, daba la impresión de no tener reflejo en el mundo económico. Los altos índices de inflación, repetidos durante el 44, 20.3%, enlazados con un nuevo aumento en las reservas internacionales, con 158.2 millones

de dólares; sin olvidar el crecimiento del PIB que saltó hasta 6.8%, resultaban alentadoras en un año de particular conflictividad.

Así las cosas, los capitales buscaban un lugar de inversión. La especulación, se convirtió en algo productivo. Las regulaciones, que obligaban invertir en títulos del Banco de la República, se rebajaron. Gracias a ello, las inversiones irían destinadas a la compra de bonos en deuda pública o en la importación de maquinaria. Con esta situación, mientras el Estado estaba en crisis, los gremios logran romper los pocos elementos reguladores que quedaban.

Por otra parte, las industrias, si bien tenían que hacer frente al problema de las importaciones, o a las dificultades en conseguir nuevos equipos; lo compensaban, de una parte, con la baja conflictividad laboral y de otra, en los bajos salarios impuestos. Así, comparando los ingresos brutos per cápita, teniendo en cuenta el promedio salarial anual, en zonas urbanas, y abarcando sectores que iban desde los textiles, pasando por las obreras (cuyos salarios reales no llegaban al nivel de 1928) o la construcción pública, obtenemos que para los años 39-41 alcanzaron el 2.5%; mientras, el período de gobierno lopista, supuso un descenso hasta el 1.1% (144).

Conocidas son las adversidades que el gobierno lopista atravesó durante el 44. Ahora bien, contrastando con aquellas, y en perfecta consonancia con las intenciones presidenciales de ofrecer una imagen de Estado, como negociador entre los intereses internos y externos, el presidente, poniendo todo el empeño posible, consigue romper las desconfianzas antioqueñas para dar forma a la unión patronal en la industria. Como resultado, se funda en este año la Asociación Nacional de Industriales, ANDI.

Para albergar su sede, es elegida Medellín. Las razones de su elección, no son casuales. La ciudad, aparte de ser la capital

industrial del país, servía para afirmar la independencia política del gremio, frente a la política económica del Estado. Al frente de ésta, un conocido industrial, procedente de familia conservadora, Cipriano Restrepo Jaramillo (145).

Al igual que sus antecesores, la ANDI, no tuvo reparos en recomendar al gobierno López cuáles eran las directrices apropiadas para el sector. Como era de esperar, y por medio de su presidente, la apertura al exterior, sin separarla de una bajada en las tarifas de aduana o tratados comerciales con los países del área, constituyen algunas de las peticiones.

En el camino de la recuperación, el gremio agrícola no podía quedar fuera. La SAC, con una acción clara en contra de la discutida Ley 200, esgrimiendo como argumentos, el estancamiento de la producción, y la baja de los precios agrícolas, que según ellos era consecuencia de la Ley; unidos estos a la cercanía de los diez años que por la anterior se daba para el aprovechamiento de las tierras, emprenden en toda línea, una oposición al proyecto.

Su alternativa, condicionar abiertamente el nuevo marco jurídico por el cual se habrán de regir los contratos, evitando la desaparición de los aparceros, en donde aunaba esfuerzos con los cafeteros. Las presiones obtuvieron fruto, la Ley 100 de 1944, haría las veces de contrarreforma. Los contratos de aparcería, quedaban reglamentados; el plazo inicial, establecido en diez, era retrasado cinco más; y lo que resultaba sintomático, la amenaza de expropiación, exigiendo el precio al contado (si llegara a producirse), no merecía mención (146).

Con ello, buena parte, de la cesión que el Estado iba dejando en beneficio de los sectores privados, unida al control que los gremios estaban adquiriendo en distintas actividades productivas,

finalizaban limitando la autonomía de aquel. Los escándalos pasados, como fue el caso Handel, con implicaciones de la familia presidencial, representaba la antítesis reguladora que el liberalismo había buscado ofrecer. Los intereses privados, perfectamente articulados gracias al Estado, pasaban a ser desarticulados en aras del bien particular (147).

Al acercarse a los últimos momentos de la administración liberal, las variaciones que las pautas tenidas hasta entonces experimentan fueron pocas. La excepción, no obstante, la marcaron, por una parte, el cierre de una fase de industrialización, que tuvo en los textiles, bebidas y alimentos, una apertura inicial (a ella no fue ajena el capital nacional), y de otra, la llegada de una nueva con las industrias químicas o metalmecánicas, apoyadas por el capital foráneo.

Los acontecimientos a los cuales hubo de hacer frente el gobierno lopista, donde la orientación económicamente liberal era ya claramente asumida, recibirá un espaldarazo mayor, cuando en la nombrada reforma de 1945, al Congreso se le plantea fijar "los planes y programas a que deben someterse el fomento de la economía nacional y los planes y programas de todas las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse" (148).

Estas normas serán ampliadas posteriormente. Aún así, y a pesar de la reforma, la idea de planeación, tardó algún tiempo en materializarse. Por lo demás, el año terminaba con un P.I.B. cercano al 5%, mientras que la inflación, con 11.3%, lo que suponía un descenso importante, respecto al anterior. Con ello, el panorama económico, parecía conseguir una nueva forma. La consolidación liberal, seguía su curso. El nuevo gobierno, acompañado de los

gremios, imponiendo su criterio, despejarían cualquier duda. Los sindicatos, poco podrían hacer para impedirlo.

NOTAS.

1) Leal Buitrago, Francisco. "Análisis Histórico del Desarrollo Político Nacional 1930-1970", Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1973, p. 35.

2) Pecaut, Daniel. "Orden y Violencia: Colombia 1930-1954", Bogotá, CEREC-Siglo XXI, 1987, 2 Volúmenes, Volumen I, p. 108.

3) Gaitán, Jorge E. "El Manifiesto del Unirismo, octubre de 1933", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, pp. 129-155.

4) Abel, Christopher. "Política, Iglesia y Partidos en Colombia: 1886-1953", Bogotá, Universidad Nacional, 1987, p. 116.

5) Uribe Vargas, Diego. "Las Constituciones de Colombia", 3 Volúmenes, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1985, Volumen 3, pp. 1223-1232.

6) Hartlyn, Jonathan. "The Politics of Coalition Rule in Colombia", Cambridge, University Press, 1988, p. 31.

7) Medina, Medófilo. "Los terceros partidos en Colombia 1900-1960" en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Vol. II, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, p. 285.

8) Bejarano A, Jesús Antonio. "Economía y Poder. La SAC y el Desarrollo Agropecuario Colombiano 1871-1984", Bogotá, CEREC, 1985, p. 198.

9) Medina, Medófilo. "Los terceros ... ", p. 278.

10) Gilhodes, Pierre. "La cuestión agraria en Colombia (1900-1946)" en Relaciones Internacionales. Movimientos Sociales, en *Nueva Historia de Colombia* Vol. III, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, p. 328.

11) Molina, Gerardo. "Las Ideas Liberales en Colombia de 1935 a la iniciación del Frente Nacional", 3 Volúmenes, Bogotá, Ed. Colección Manuales Universitarios Tercer Mundo, 1977, Tomo III, p. 53.

12) Medina, Medófilo. "La Protesta Urbana en Colombia en el siglo XX", Bogotá, Ed. Aurora, 1984, p. 47.

13) Moncayo C, Víctor M. "Política Agraria y Desarrollo Capitalista", en Problemas Agrarios Colombianos, (Coordinador) Machado, Absalón., Bogotá, Ed. Siglo XXI, 1986, p. 90.

14) Tirado Mejía, Alvaro., "Siglo y Medio de Bipartidismo", en Colombia Hoy, Bogotá, Siglo XXI, 1978, págs 144-5.

15) Cf en *El Bolchevique*, 25 de mayo de 1935, en Pecaut, D., op. cit., Vol I, p. 204.

16) Pecaut, D. op. cit., Vol I, p. 224.

17) Arrubla, Mario. Urritia, Miguel. "Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia", Bogotá, 1970, pp. 76 y 80.

18) Pecaut, Daniel. "Política y Sindicalismo en Colombia", Bogotá, Ed. La Carreta, 1973, p. 148.

19) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 42.

20) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 245.

21) Abel, C. op. cit., p. 121.

22) Pecaut, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 161.

23) Garcés, J. E. "Desarrollo Político y Desarrollo Económico: los casos de Chile y Colombia", Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1972, p. 132.

24) Abel, C. op. cit., p. 122.

25) López Pumarejo, Alfonso. "La Iglesia y El Clero", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, p. 127

26) De Roux, Ramón Rodolfo. "La Iglesia Colombiana en el período 1930-1962" en Dussel, Enrique. "Historia General de la Iglesia en América Latina". Volúmen VIII, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1981, pp. 526.

27) Uribe Vargas, Diego. op. cit., p.1223.

28) *Revista Javeriana* 3, N° 13 (abril 1935), "Vida Nacional", p. 184.

29) Abel, C. op. cit, p. 183.

30) *Revista Javeriana* 3, N° 14 (mayo 1935), "Vida Nacional", p. 241.

31) De Roux, Ramón Rodolfo. op. cit., p. 525.

32) González, Fernán. "La Iglesia Católica y el Estado colombiano (1930-1985)", en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Volúmen II., Bogotá, Ed Planeta, 1989, p. 375.

33) Maullin, R. "Soldiers, guerrillas and politics in Colombia", Lexington, Lexington Books, 1973, p. 55.

34) Gilhodés, Pierre. "El Ejército Colombiano analiza la Violencia", en Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, Compiladores Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda., Bogotá, Cerec, 1986, p. 308.

35) Ramsey, Russell W. "Guerrilleros y Soldados", Ed. Tercer Mundo, 1981, p. 98.

36) Gilhodés, P. op. cit., p. 308.

37) López, Alfonso. "El Ejército y las armas de la República", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, p. 302.

38) Abel, C. op. cit., p. 236.

39) Bermúdez Rossi, Gonzalo. "El poder militar en Colombia, de la Colonia al Frente Nacional", Bogotá, Ed. Expresión, 1982, p. 51.

40) Santos, E. op. cit., págs 55-56.

41) Maullin, R. op. cit., p. 137.

42) Pecaú, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 140.

43) Tirado Mejía, Alvaro. "Introducción a la Historia Económica de Colombia", Bogotá, Ed. Universidad Nacional, 1971, p. 391.

44) Echeverri Uruburu, Alvaro. "Elites y Proceso Político en Colombia 1950-1978", Bogotá, Ed. Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, 1986, p. 26.

45) Ramírez Bernal, Joaquín. "Las finanzas del sector público central en los años veinte y treinta en Colombia", en Coyuntura Económica, Vol XIV, junio 1984, Bogotá, FEDESARROLLO, p. 157.

46) Kalmanovitz, Salomón. "Economía y Nación" Bogotá, Siglo XXI, 1986, p. 348.

47) CEPAL "El desarrollo económico de Colombia", Anexo Estadístico, Bogotá, Dane 1970, Cuadro 47.

48) Machado, Absalón. "Política Cafetera, 1920-1962", en Desarrollo y Sociedad, N° 8 Mayo 1982, Bogotá, Fedesarrollo, p. 180.

49) Pecaú, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 163.

50) Kalmanovitz, S. op. cit., p. 336.

51) Palacios, Marco. "Coffee in Colombia 1850-1970, An economic, social and political history", Londres, Cambridge University Press, 1980, p. 221.

52) Kalmanovitz, S. op. cit., p. 343.

53) Echavarría, Juan J., "Los factores determinantes de la industrialización colombiana entre 1920 y 1950", en Coyuntura Económica, Vol XIV, marzo 1984, Bogotá, Fedesarrollo, p. 214. (completo 213-253).

54) Ocampo, José A. "Historia Económica de Colombia" Bogotá, Siglo XXI, 1987, p. 237.

55) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 176.

56) Ocampo, José A. op. cit., p. 220.

57) CEPAL. op. cit., Cuadro 18.

58) Pecaut, Daniel. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 285.

59) Santos, Eduardo, "Discurso pronunciado en el Teatro Municipal de Bogotá, 3 de mayo 1937" en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacioanal, 1982, p. 91.

60) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 56.

61) Santos, E. op. cit., p. 165.

62) OEA. "La Administración Pública como instrumento del Desarrollo, Colombia", Washintong, 1967, p. 51.

63) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 307.

64) Revéiz, Edgar., "Evolución de las formas de intervención del Estado en la Economía de América Latina: el caso colombiano" en El Estado y El Desarrollo, CEDE, Bogotá, Ed. Dintel, 1981, p. 41.

65) Gómez, Laureano. "Discursos Parlamentarios 1939-1942" en Obras Completas, IV Volúmenes, Tomo IV, Volúmen 3, Bogotá, Imprenta Nacional, 1989, p. 32.

66) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 57.

67) Abel, C. op. cit., p. 133.

68) Bushnell, David. "Eduardo Santos y la Política del Buen Vecino 1938-1942". Bogotá, Ed. El Ancora, 1984, p. 183.

- 69) Hartlyn, Jonathan. op. cit., p. 150.
- 70) Santos, E. op. cit., p. 340.
- 71) Ibid. 103.
- 72) González, F. op. cit. p. 378.
- 73) Abel, C., op. cit., p. 190.
- 74) González, F. op. cit., p. 379.
- 75) De Roux, Ramón Rodolfo. op. cit., p. 529.
- 76) Uribe Vargas, Diego. op. cit., Volúmen I, p. 233..
- 77) Bushnell, D. op. cit., p. 19.
- 78) Leal Buitrago, Francisco. "Política e Intervención Militar en Colombia", en Revista Mexicana de Sociología, Mayo-Junio, N° 3,.1970, p. 503.
- 79) Gilhodés, P. op. cit., p. 309.
- 80) Ramsey, Russell W. op. cit., p. 99.
- 81) Machado, Absalón. op. cit., p. 190.
- 82) Palacios, Marco. op. cit., p. 220.
- 83) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 290.
- 84) Ocampo, José A. op. cit., p. 237.
- 85) Molina, Gerardo. "Las Ideas Liberales en Colombia de 1935 a la iniciación del Frente Nacional", 3 Volúmenes, Bogotá, Ed. Colección Manuales Universitarios Tercer Mundo, 1977, Tomo III, p. 130-134.
- 86) Abel, C. op. cit., p. 136.
- 87) Ramírez Moreno, Augusto. "Contra Laureano Gómez y su política (10 de febrero de 1943)", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1984, p. 219.
- 88) Molina, G. op. cit., p. 162.
- 89) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 50.
- 90) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vólumen I, p. 314.

- 91) Arrubla, Mario. "Colombia Hoy", Bogotá, Siglo XXI, 1978, p. 161.
- 92) Abel, C. op. cit., p. 137.
- 93) Ramírez Moreno, A., "Carta a Eduardo Santos con ocasión del Golpe militar de 10 de julio de 1944", op. cit., p. 226.
- 94) Pecaute, D. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 319.
- 95) Pecaute, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 199.
- 96) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 60.
- 97) SÁCHICA, Luis Carlos. "La Constitución Colombiana Cien Años Haciéndose", México, Ed UNAM, 1982, p. 74.
- 98) Pecaute, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 197.
- 99) Lleras C, Alberto. "Discurso de Posesión de la Presidencia (7 de agosto 1945)", en Escritos Selectos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1976, p 17
- 100) Lleras C, Alberto. "Un año de Gobierno" 1945-46", (Bogotá 11 de agosto/45), Bogotá, Imprenta Nacional, 1946.
- 101) Ibid, p. 54, 31 de agosto del 45.
- 102) Ibid, p 129, 28 de noviembre 45.
- 103) Pecaute, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 204.
- 104) Pecaute, D. "Orden y Violencia ... ", Vol II, p. 419.
- 105) Molina, G. op. cit., Tomo III, p. 171.
- 106) Oquist, Paul. "Violencia, Conflicto y Política en Colombia", Bogotá, Ed. Banco de la República, 1976, p. 228
- 107) Lleras, A., op. cit., p. 137
- 108) Pecaute, D., "Política y Sindicalismo ... ", p. 207.
- 109) *Revista Javeriana* 25, N° 121, (febrero 1946), p. 16.
- 110) De Gonzalo de Ojeda a José Félix de Lequerica (Bogotá 4 de marzo/45), en *Registro 3196, Expediente 5*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

111) De Gonzalo de Ojeda a José Félix de Lequerica (Bogotá, 8 de mayo/46), en *Registro 1752, Expediente 8*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

112) Sharpless, Richard E. "Gaitán of Colombia, A Political Biography", Pittsburgh, Ed. University of Pittsburgh Press, 1978, pp. 85-100.

113) Ibid., pp. 112-119.

114) Gaitán, Jorge Elíecer. "El País Político y el País Nacional", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979. p.165.

115) Ibid. 163.

116) Villaveces, J. "Los mejores discursos 1919-1948", Bogotá, Ed. Jorvί, 1968, 1º de marzo de 46 Ibid p 473

117) Gaitán, Jorge E. "El Manifiesto del Unirismo, octubre de 1933", op. cit., p. 150.

118) Abel, C. op. cit., p. 143.

119) Ibid, p. 146.

120) Ospina Pérez, Mariano. "Discurso de Aceptación a la Candidatura Presidencial, 25 de marzo de 1946", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1982, p. 208.

121) Abel, C. op. cit., p. 146.

122) Pecaute, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 210

123) Ramírez Moreno, A. "La Patria Nueva. Discurso Pronunciado en el Ciclo de Conferencias Radiales del Movimiento de Unión Nacional, 29 de abril de 1946", op. cit., p. 315.

124) Abel, C. op. cit., p. 196.

125) *Revista Javeriana* 21, N° 105 (junio 1944), "Vida Nacional", p. 226.

126) Bidegain de Urán, Ana María. "Iglesia, Pueblo, y Política. Un estudio de conflicto de intereses, 1930-1955". Bogotá, Universidad Javeriana, 1985. p. 169.

127) *Revista Javeriana* 22, N° 107 (agosto 1944), "Vida Nacional", p. 68.

128) *Revista Javeriana* 22, N° 109 (octubre 1944), "Vida Nacional", p. 220.

129) Ibid., p. 220.

130) *Revista Javeriana* 23, N° 113 (abril 1945), "Vida Nacional", pp. 114-116.

131) *Revista Javeriana* 24, N° 117 (agosto 1945), "Vida Nacional", p. 62.

132) Ibid., p. 62.

133) Abel, C. op. cit., p. 239.

134) Bermúdez Rossi, Gonzalo. op. cit. p. 53.

135) Ibid., p. 55.

136) Abel, C. op. cit., p. 241.

137) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol. I. p. 347.

138) Leal Buitrago, F. op. cit., p. 525.

139) Gilhodés, P. op. cit., p. 309.

140) Espinel, Domingo. "El Gobierno, El Ejército y las Medidas del Estado de Sitio", Bogotá, Imprenta Nacional, 1944, p. 17.

141) Cif, en *Kalmanovitz, Salomón. "Economía y Nación"* Bogotá, Siglo XXI, 1986, p. 363.

142) Ocampo, José A. op. cit., p. 224.

143) Machado, A. op. cit., p. 193.

144) Kalmanovitz, S. op. cit., 367.

145) Pecaut, Daniel. "Política y Sindicalismo ... ", p. 182.

146) Bejarano A, Jesús Antonio. "Economía y Poder. La SAC y el Desarrollo Agropecuario Colombiano, 1871-1984", Bogotá, CEREC, 1985, p. 212.

147) Pecaut, Daniel. "Orden y Violencia ... ", Vol I, p. 302.

148) Uribe Vargas, Diego. "Las Constituciones de Colombia", 3 Volúmenes, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1985, Volúmen 3, p. 1244.

CAPITULO II
LAS ADMINISTRACIONES CONSERVADORAS
(1946-1953)

CAPITULO II: LAS ADMINISTRACIONES CONSERVADORAS (1946-1953).

2.1 El gobierno de Mariano Ospina Pérez, 1946-1950.

2.1.1. El Estado y los Partidos Políticos.

Una vez que Ospina Pérez inicia su administración, los acontecimientos políticos nacionales, aún habiendo contado con una campaña presidencial en calma, plantean al presidente como reto principal, conseguir la gobernabilidad del país.

Desde el punto de vista social, Colombia, al igual que los países vecinos del continente, estaba asistiendo a un creciente y desordenado grado de urbanización. Este, traía consigo la inevitable transformación en los patrones, no sólo de tipo social, sino también político. Los partidos, y particularmente el liberal, estarán interesados en controlar esta nueva realidad.

Entre tanto, una vez que Ospina se hace cargo de la presidencia, y en perfecta consonancia con el mensaje difundido durante la campaña electoral, forma un gabinete de Unión Nacional. En él estarán conservadores y liberales. Los primeros, serán hombres, que desafiando las consignas recibidas, principalmente de Gómez, habían colaborado con los liberales en sus administraciones. Los segundos, procedían de los sectores minoritarios, desligados del santismo o del gaitanismo, al ser, estos últimos, contrarios al gobierno de coalición. En realidad, la Unión Nacional, escondía la repartición de todo el aparato del Estado entre los partidos hegemónicos.

Los puntos cardinales, exceptuando el anterior, sobre los que podría asentarse el recién estrenado gobierno, resultaban confusos. La división interna de los partidos, más profunda en el liberalismo, favorecía esta situación. Además, con el cambio de gobierno, era previsible una renovación en la administración. La dirección del aparato estatal, que los liberales habían tenido durante diez y seis años, creaba múltiples expectativas.

Para los liberales, cuya sujeción al clientelismo, toda vez que el intento de Santos, por crear una carrera administrativa, son fallidos, reciben con temor al gobierno conservador. Por su parte, los conservadores, sabedores de las rentas que el poder traía consigo, presionan con el fin de conseguir la realización del reparto burocrático (1).

Las pugnas por formar parte de la administración, no tardarían en llegar. Ser uno de sus miembros, resultaba ventajoso. Los beneficios, entre los que se contaba la extensión del seguro social (creado en este mismo año el Instituto Colombiano de Seguros Sociales), no eran desdeñables. Los intereses partidarios, no estaban fuera. Algunos conservadores creían ver en la naciente coalición, algo pasajero. Sus objetivos están puestos en la consecución del gobierno hegemónico, pues en esta ocasión era conservador y favorecería a sus defensores.

Las expectativas que todo ello traía, sin embargo, parecían crear descontentos. La unión conservadora, mantenida durante las elecciones presidenciales, se debilitaba. Por una parte, el presidente, debe responder a las críticas lanzadas desde sectores cuasi fascistas, que durante la República Liberal (1939), habían formado junto a Gilberto Alzate Avendaño y Silvio Villegas, la Acción Nacional Populista. De otra, aquellos que, como Guillermo León

Valencia, cuestionaban abiertamente el gobierno de coalición. Según él, ya que ellos ganaron las elecciones, debían gobernar en exclusiva.

El liberalismo, mientras, recibía la noticia de la muerte en París del que fuera candidato a la presidencia, Gabriel Turbay. El vacío dejado por éste, constituía una fuente de disputas, entre los miembros del viejo y nuevo liberalismo. Eduardo Santos y Jorge Gaitán, intentarán ganarse a los partidarios del fallecido. Finalmente Gaitán consigue, no sólo hacerse con los seguidores de Turbay, sino también, con este triunfo, ganarse mayores reticencias entre los notables del partido hacia su persona.

Antes de terminar el año 46 el gobierno de Mariano Ospina, se ve sorprendido por momentos de creciente tensión. El que fuera candidato presidencial por el liberalismo, durante el último mandato de Alfonso López, Carlos Arango Vélez, declara sobre la existencia de un complot liberal. Con éste, y al amparo de la mayoría liberal en el Congreso, se buscaba la sustitución del presidente. Pasado el estupor inicial, Ospina renueva la confianza en el gobierno de coalición (2)

Al anterior, no obstante, habrá de unírsele la dimisión de los ministros liberales, presentes en aquél. Como causa, la crítica que congresistas de este partido, realizan en contra de sus compañeros. Con este acto, los comentarios de reprobación que tanto Lleras Restrepo como Gaitán, los de éste más vehementes, dedicaban al mencionado gobierno, pudieron estar en el fondo de la renuncia.

Todos estos hechos, en informe enviado en diciembre del mismo año, vistos desde la legación española se expresaban así:

" ... El país ha estado oficialmente sin gobierno durante un mes, ha sido una crisis larguísima, que no ha producido ni la menor perturbación en la marcha de los negocios públicos ... Tampoco los mismos partidos

políticos mostraban grandes impaciencias por la resolución de la crisis. De una parte los liberales, no han liquidado definitivamente la cuestión de la colaboración gubernamental ... Tampoco los conservadores se muestran unánimes en la cooperación. Achacan a Ospina que va muy lejos en sus concesiones a los liberales. Estas concesiones se refieren no a lo político, sino a los cargos remunerados por el presupuesto que ellos quisieran acaparar y de este modo, sostener a Ospina ... " (3).

Paralelamente a la situación anterior, los cambios que el gobierno conservador establezca respecto a los sindicatos, serán mínimos. Siguiendo las pautas recibidas del gabinete liberal, Ospina, en igual medida, intenta mantenerlos bajo control. La ciudad de Cali, donde una huelga de transportes provoca el enfrentamiento con el gobernador, es solucionada mediante la declaración del estado de sitio. Pese a ello, había sectores que desconfiaban del buen hacer presidencial. Según éstos, era necesario prever tales actos, la experiencia del 45 permanecía fresca (4).

Es por ello, que en cierto modo, desde el gobierno, se favorezca la creación de un sindicato, destinado a romper la hegemonía de la CTC. El apoyo patronal y eclesial estaba garantizado. Las acusaciones, en el sentido que el PSD dominaba la ejecutiva de la anterior, parecían indicarlo. Asimismo, la dinámica interna seguida por la central, después del enfrentamiento con el gobierno, varían. Dadas las condiciones existentes, preveían una escasa paz social. Con ellas, los líderes sindicales buscarían demostrar a las élites del país, que la capacidad de convocatoria, seguía intacta. Sin embargo, su dependencia política, principalmente del gaitanismo, impedía que fuese así (5).

Para llevar adelante este cambio, una vez más, el marco legal que la Ley 6 de 1945 ofrece -permitiendo la creación de un

sindicato orientado hacia las negociaciones colectivas-, trajo como resultado las bases de un nuevo sindicato. Este, reunidos en Bogotá durante junio del 46, y con ayudas del sector privado, la Acción Católica, o los jesuitas, fundan la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. Como puntos a destacar, el apoliticismo; colaboración amistosa entre capital y empresa; y respeto de la propiedad privada (6).

Ante la fundación de la UTC, se vislumbran varias perspectivas. Para los liberales, por ejemplo, la pérdida del control y uso político del sindicalismo tenido en los treinta. Para los conservadores, en cambio, aún evitando su utilización como brazo político, no pierden la oportunidad de colaborar con él. La jerarquía eclesial y parte del clero metropolitano, serán buenos puntos de apoyo (7).

Con todo, para la élite colombiana, conservadora o liberal, la creación del indicado sindicato era provechoso. De esta manera, el control directo sobre el mundo obrero, evitando al Estado y a los interlocutores sociales que desearan utilizarles, podía resultar efectivo. Con todo, Ospina actuará con prudencia, la personería jurídica de la UTC debe esperar hasta 1949 (8).

Mientras las directivas políticas asumían la formación del mencionado sindicato, la controntación que éstas tendrían, ya desde la cúpula como la base, experimenta en 1947 un preocupante ascenso. El afán por copar la administración, no exento de criterios dispares entre Ejecutivo y Legislativo, adquiere especial relevancia. La celebración de elecciones a la Cámara, en marzo, sirvió para mostrar el grado de ruptura que existía al interior del Estado. Este, en vez de ofrecer una cohesión como tal, pasa a convertirse en el campo de disputas preferido por los partidos hegemónicos.

La expresión palpable del enfrentamiento, del cual no quedan fuera una serie de criterios económicos, sociales, y políticos, vienen a conformar la Violencia (9). Esta, cuya presencia en la misma administración pública no es extraña, ocasiona que una difícil coalición, como fue la Unión Nacional, no pueda ejercer su control, e impedir el desborde de las instituciones.

Social y políticamente, esta situación puede explicarse, en buena medida, por el desplazamiento que las actividades públicas tienen del medio urbano al rural. Si atendemos a la distribución de la población colombiana según censos alternativos, observaremos que para el año 1938 la población urbana alcanza sólo un 29,1%. Siete años más tarde representaba el 34,0% (10). De igual manera habrá que indicar que, aún manteniendo la primacía porcentual el medio rural, desde la perspectiva del crecimiento vegetativo, dadas las condiciones de salubridad, las urbes alcanzaban el 5.2% anual, mientras las rurales apenas un 0,4%.(11)

Todo ello pone de manifiesto, que a pesar del creciente grado de urbanización alcanzado durante los años treinta, la preponderancia del sector rural, cuando de potencial fuerza electoral se trataba, era clara. Es más, los patrones de tipo político que estos lugares poseían eran motivo añadido de disputa. Que la filiación por afinidad personal o el clientelismo, siguieran presentes, aún con los intentos por atajarlos, difícilmente podían colaborar a introducir otros patrones.

Ante ellos, las posibilidades, no sólo de celebrar elecciones sin temor al fraude, sino de exigir cualquier base de legitimidad, eran prácticamente nulas. Las vías de reclamación, obtenido el control de la autoridad administrativa de forma casi absoluta por aquellos que

resultasen vencedores, sumado al beneficio que el desarrollo de éstos les confería, provoca desde los excluidos, la violencia como respuesta.

Los inmigrantes de igual manera, incluidos los desplazados por la Violencia, habitantes de las cada vez más pobladas urbes del país, reclaman mayores cotas de atención. Si de una parte, estaban prestos a escuchar el discurso gaitanista y su recrudecida crítica hacia la "oligarquía", de otra comprobaban, la insuficiencia de los servicios establecidos por cuenta del Estado.

Estas carencias, interpretadas como una muestra del contraste urbano-rural, servían para enrarecer el discurso político. La cercanía de las mencionadas elecciones a la Cámara, salpicada tanto por acusaciones mutuas de fraude -tema estrella de la campaña-, como de enfrentamientos armados entre militantes rivales, policía incluida, venían a explicarlo (12).

En medio de todo ello, los dirigentes políticos tratan de conseguir un amplio seguimiento electoral. Gaitán, ya desde enero dará a conocer la "Plataforma del Teatro Colón". En ella, intenta responder al conjunto de propuestas planteadas por la sociedad de su tiempo. Las alternativas dadas estarán en la estricta línea liberal. Así al hablar del tema agrícola, si bien persigue una remodelación de la Ley 200, dejará claro no tener intenciones intervencionistas, por lo que la tranquilidad de los grandes propietarios estaba garantizada (13).

La campaña, mientras tanto, sigue. Los que, en principio, eran brotes de Violencia, van adquiriendo cotas preocupantes. Departamentos como Boyacá y los Santanderes, lugares de habitual enfrentamiento, recuperan su intensidad. Además, y al contrario de los años treinta, la prensa se unió a la exacerbación de ánimos entre partidos políticos (14).

La celebración de las elecciones en marzo del 47, servirán para hacer ver la evolución que los acontecimientos políticos nacionales adquieren. Para el observador foráneo esta campaña se desarrollará con no pocos problemas:

" ... Los partidos en lucha se quejan de falta de protección por parte de las autoridades departamentales para la libre exposición de sus programas y acusan a los gobernadores liberales de violentar la voluntad de los electores conservadores, y a los gobernadores conservadores de atropellar los derechos de los liberales. La distribución de cédulas electorales es otro motivo de protesta, acusando a los funcionarios tanto liberales como conservadores de favorecer a sus respectivos partidarios ... Los programas políticos brillan por su ausencia, no hay uno sólo de los partidos en lucha que haya expuesto ni siquiera en líneas generales, cuál ha de ser su obra legislativa en caso de alcanzar el poder ... Todos esperan que si el triunfo les acompaña, la política seguirá las líneas generales de sus respectivas ideologías, pero sin señalar leyes o reformas a implantar ... " (15).

Finalizada la votación, los resultados siguen dando al partido Liberal la mayoría. Sin embargo, en relación de votos, el ascenso es menor. Así, mientras en las presidenciales conseguían 800.156, en éstas llegaban a 805.732. Por parte conservadora, aún siendo menores en votos, la subida es clara, de 565.939 en las presidenciales, ahora alcanzan 653.987. Con ello, los escaños ocupados por ambos partidos quedaban así: para el Senado, 28 conservadores y 35 liberales; mientras que en la Cámara, 58 para los primeros y 73 para los segundos. Por otra parte, una de las constantes políticas características, la abstención, en esta ocasión, estaba en retroceso, del 59.0% del 46, al 35.7 (16).

Así las cosas, y considerando los resultados desde la perspectiva liberal, el partido debía aceptar de forma clara el ascenso que la corriente gaitanista tenía en éste. Asumir la nueva situación, superando las desconfianzas que en él se escondían, asumiendo lo acontecido tras la votación, era cuando menos una incógnita. Para la legación española en Bogotá, el estrenado Parlamento y las consecuencias que ello traería en las relaciones entre partidos, era visto de la siguiente forma:

" ... Parecía natural que a la mayoría liberal correspondiese mayoría de puestos en el parlamento, sin embargo no es así. La Ley de cociente electoral y especialmente la denominada de "arrastre", esto es la adjudicación del residuo del cociente electoral ... ha dado como resultado que el Partido Conservador obtuviera más puestos que los que le corresponden por votos obtenidos ... Es evidente que si el presidente insiste, en continuar con un gabinete de Unión Nacional, tiene que apoyarse forzosamente en la fracción liberal más numerosa, dentro del Parlamento, que es la gaitanista. ¿Pero querrá el gaitanismo la colaboración?. Repetidas veces se ha opuesto a ello censurando violentamente a las llamadas oligarquías políticas ... " (17).

Si para el partido Conservador, el avance era claro y hacía que sus dirigentes lo observaran con complacencia; desde el liberalismo, y en particular para los gaitanistas, el triunfo conseguido sobre los santistas, supondrá mostrar ante el partido que la candidatura aceptada con distancia para las elecciones del 46, contaba con un respaldo mayor del imaginado.

El logro de la victoria, con los conservadores en el gobierno, da esperanzas al líder liberal. Para Gaitán:

" ... Si algún significado tiene la jornada popular que estamos celebrando es el que en Colombia, existe una vigorosa colectividad

incapaz de rendirse al primer golpe de adversa fortuna... Ello explica porqué resulta para mí evidente que la victoria del 16 de marzo no es patrimonio personal... Antes bien los comicios ... tienen desde el punto de vista un significado más importante que el volúmen numérico o la distribución de curules en los cuerpos colegiados ... Es el propósito de democratizar el país, sus instituciones y sus métodos ... Lo que importa es que la organización del Estado traduzca en su contenido las aspiraciones de esas mayorías ... " (18).

Del discurso anterior, se desprende tanto la preocupación que Gaitán tiene por ofrecer una nueva forma de entender las relaciones políticas desde el Estado, como la inseparable identificación que éste debe tener con los anhelos del pueblo. Escuchar tales intenciones, dando respuesta a todos los sectores que no desean quedar fuera del tutelaje ofrecido por aquél, decidirán que Gaitán incluya miembros liberal-gaitanistas en el gobierno de coalición.

Al hacerlo, el dirigente da un cambio de actitud notable. Cuando Ospina nombra al gabinete de coalición, el líder liberal expresa su disconformidad. En aquel momento, estaba a disgusto con la presencia de ministros liberales, pues no los consideraba representativos del partido. Posteriormente, no sólo dispensará de las críticas oligárquicas al presidente, sino que dado el extremismo laureanista, ofrecerá colaboración, al tiempo que trataba de proteger su imagen ante los incondicionales (19).

Igualmente, la indicada preponderancia gaitanista en el seno del liberalismo, tendrá una explicación mayor. Reconocida de forma tácita por el resto de dirigentes liberales, gracias a las elecciones de marzo, resultará manifiesta. Con la muerte de Turbay, el expresidente Lleras en la Organización de Estados Americanos,

Alfonso López, como embajador en Naciones Unidas, y Carlos Lleras Restrepo, ocupando la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, muestra claramente el desplazamiento de los notables por parte de Gaitán.

Entre tanto, las actividades en los distintos aparatos del Estado, seguían desarrollandose con no pocas dificultades. El gobierno ospinista se encontraba dubitativo. Si por una parte, deseaba reducir el gasto público, algo que para el Legislativo de mayoría liberal era conveniente, de otra, habría de atender a los militantes de ambos partidos, especialmente conservadores, que buscaban un sitio entre la burocracia (20).

A estas dificultades, en cualquier caso, hubo que sumarle, no sólo las denuncias que el 11 de abril hace Jorge E. Gaitán en contra de la Violencia policial, sino también los conflictos labores de mayo. Así, el primero, denominado "Memorial de Agravios", detalla la implicación del aparato del Estado en hechos como:

" ... En Villa Rosario (Santander), el 6 de abril fue muerto el señor Jesús Pulido, liberal, a manos de un exagente de la Policía Nacional, de nombre Pedro Vega. No se tiene noticia de que el alcalde Antonio José Carvajal haya iniciado ninguna investigación... De Quibdó informan, que el señor Valois Arce, a la cabeza de un grupo de conservadores, se sustrajo del Jurado Electoral los registros correspondientes al municipio de Aguacalara, habiendo obligado a huir al presidente... En Túquerres, el ciudadano liberal Félix Bárcenas fue atropellado por el Alcalde y la policía, autoridades que no han sido destituidas y siguen constituyendo grave amenaza pública y social ... " (21).

2.1.1.1. La huelga de mayo

El segundo, igualmente, acompañando al anterior, volvía a constituir un factor de preocupación para la administración. Aún así, en esta esta ocasión, el enfrentamiento no hará peligrar la autoridad gubernamental. Al contrario, siguiendo la tradición marcada por Lleras, el gobierno conservador, podrá comprobar claramente la pérdida del poder de convocatoria y seguimiento esgrimido por los sindicatos. La ocasión será la huelga convocada por la CTC en mayo del 47.

Para el presidente, el control sindical, no tenía por qué estar exento de ciertas medidas tendentes a relajar los posibles enfrentamientos. Ya en el 46, en el congreso celebrado por la CTC, utilizando como portavoz al ministro de Trabajo, tranquiliza a los sindicalistas por la creación del nuevo sindicato. Para él, la UTC, no suponía reconocer el sindicalismo confesional. Es más, cuando los trabajadores del sector petrolero entran en conflicto con las concesiones estadounidenses, en vez de declararlas ilegales, se opta por la negociación (22).

La anunciada huelga de mayo, sin embargo, marca el cambio en estas actitudes. Ya meses antes, Gaitán había realizado continuas advertencias. En febrero del 47, por ejemplo, hablaba de las facilidades que los partidos tenían para paralizar un país. Al mes siguiente la atención inicial, se concreta. Desde el diario *Jornada*, el paro se daba por hecho, e indicaban que se celebraría "si se desconoce la victoria del liberalismo" (23).

La celebración de la mencionada huelga, vino precedida por protestas en algunas ciudades. En abril, por ejemplo, diversos sindicatos (empleados departamentales, chóferes, etc), uniendo a las

demandas laborales las políticas, realizan una para responder a la sustitución de trabajadores liberales por conservadores (24).

El 13 de mayo, toda vez que las reivindicaciones anteriores son respaldadas por la CTC, distintos medios de transporte, se suman al paro. Los ferrocarriles, correos, numerosas administraciones públicas quedan total o parcialmente paralizadas. Por ciudades la influencia es distinta. Bogotá, con la intervención del Ejército para que el transporte público funcione, y Cali, tendrán un seguimiento mayoritario. Medellín se mantiene al margen.

Mientras tanto, la deseada intervención de apoyo por parte de Gaitán, no se produce. Dos días después, en el Teatro Municipal, declara haberse entrevistado con el presidente de la CTC. Gaitán califica la huelga de "ilegal" y "justa". La contestación se hace más explícita. Como "jurista" no la acepta, como vocero del pueblo, aprueba la táctica (25).

Sin su presencia y respaldo, las consecuencias que se advierten son diversas. De una parte, marcará la separación de los factores de acción populista. Por otra, mostraba claramente la disociación existente entre la actividad política y la social. Con su negativa, el líder liberal elige moverse en la escena política, constituyéndose en parte activa del enfrentamiento entre partidos.

Dado el fracaso, los resultados mediatos serán duros para el movimiento sindical. Así, la respuesta del otrora conciliador Ospina, se torna en contundencia. El mencionado día 13 son detenidos 1500 sindicalistas. No serán los únicos, en Bogotá, quinientos más son expulsados. A éstos habrá que sumarles cien trabajadores del ferrocarril en Antioquia, sin olvidar aquellas que tuvieron como escenario al sector público. Aquí, Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, realiza una depuración sistemática del departamento,

partidarios conservadores ocuparán las vacantes. La respuesta había sido más dura de lo imaginado. Legalmente, la personería jurídica de la CTC, queda suspendida por espacio de tres meses. Los despidos que en ella se produjeron, eran legales, no en vano la huelga era ilegal. Incluso la capacidad de respuesta sindical está perdida, antes del 9 de abril del 48, solamente el sector petrolero se movilizará (26).

2.1.1.2. Los comicios de octubre.

Superados los ecos del paro, una nueva consulta electoral se prepara. En esta ocasión serán las municipales. Los argumentos esgrimidos durante las campañas anteriores adquirirán mayor virulencia. El fraude, como ruptura de la legalidad, y factor de pugna entre ambas formaciones, constituye un elemento más por el cual los problemas de Violencia parecen renovarse.

Los discursos expresan tal actitud. Si bien Gómez durante la consulta de marzo hará votos por hacer un alto en la lucha fratricida, meses después, los dirigentes conservadores, dado el curso que tomaba la realidad nacional dirán que el país se convertiría en: "próximo campo eventual de batalla del universal cataclismo". Junto a éste, la política, será definida como una "batalla salvaje y dura, marcada por los sepulcros, los incendios y las ruinas". En contraposición con el profetismo que hace gala Gaitán, encontramos que el laureanismo resulta ser "promesa sectaria de un cataclismo renovador" (27).

Con ellas, tratan de hacer ver el grado de separación existente entre el país nacional y el político. La intransigencia que se desprende desde sus discursos, y la posterior invasión que el país

político ha hecho en las actividades públicas, traerá como resultante un práctico bloqueo del aparato estatal.

Julio será un mes especialmente intenso. Gómez ofrecerá la imagen de guardián contra el fraude. Por eso, visitará las oficinas de identificación del Gran Jurado Electoral. Una vez más dirá que el "sistema electoral es una farsa" (28). Sus acusaciones no se detienen. Ahora llega a cuantificar el número de cédulas falsas, según él alcanzan a 1.800.000 cédulas. Si esto fuera así, la del propio presidente lo sería, pues con este número queda cubierto el conjunto del cuerpo electoral.

Detrás de estas afirmaciones, se escondían en ambos partidos, los deseos de ciertos grupos, por terminar con la participación liberal en el gobierno. Para los laureanistas, ésta, provocaba que la reconquista de la administración fuera dolorosamente lenta. Igualmente los gaitanistas, si bien pasarían a tener miembros en el gobierno, la contemplaban como un alto coste para las bases debido a la competición política (29). De igual manera, durante las elecciones, pudo comprobarse una vez más las influencias que los sectores urbanos querían transmitir a los rurales. Como ejemplo la inclusión de Gaitán como cabeza de lista.

Por ello, dado el caríz que tomaban los acontecimientos, al mes siguiente, Ospina decide reunir a Jorge Gaitán y Laureano Gómez. Ambos llegarán a un acuerdo, que esbozado en trece puntos venía a marcar las líneas programáticas de un mediano plan de pacificación. En él se contemplaban acciones, que partiendo de la creación del Tribunal de Garantías, con representatividad paritaria de liberales y conservadores, seguía por las sanciones a funcionarios implicados en irregularidades electorales, y finalizaba con el envío de alcaldes militares a zonas castigadas por la Violencia (30).

Los planteamientos anteriores, sin embargo, pronto son cuestionados. A juicio del partido Conservador, si bien Gómez firmaba los acuerdos con el dirigente liberal, y dado que el problema fundamental estaba en el fraude, la solución pasaba por la indicada repartición paritaria de las corporaciones electorales. Es más, el control de los caciques "encargados de estimular, y consumir las inmolaciones y de recoger entre los torrentes de generosa sangre vertida, el maldito fruto de los sacrificios" (31), y del partido opositor resultaría básico. En opinión de los gomistas, el país "va a observar con atención vigilante, la conducta de los hombres dirigentes y representativos del partido liberal que tienen la palabra definitiva sobre la pacificación del país" (32).

Por su parte Gaitán, estimaba que la proporción habría de atender a criterios de representatividad parlamentaria. De igual manera desde los medios gaitanistas como *Jornada*, continuarán sumando argumentos al exarcebado medio político. Para ellos: "no habrá garantías para el liberalismo si no se somete a las condiciones del conservatismo sobre reforma electoral...son las de que el liberalismo renuncie a ser mayoría en las corporaciones electorales" (33).

Paralelamente a estas valoraciones, el curso de la actividad política vino a sumar mayor virulencia al debate parlamentario. La importación de gases lacrimógenos a cargo de Roberto Urdaneta, ministro de Gobierno, fueron la causa. En opinión de Jorge E. Gaitán, aparte de estar destinados a combatir a los liberales, habían entrado al país sin seguir los cauces exigidos. Ante ello, el ministro renuncia.

Como sustituto de Urdaneta, Ospina nombra a José Antonio Montalvo. Este, al contrario que el anterior, resultará menos conciliador. El pretendido cambio en la forma de proceder, buscado por Gaitán, no resultó. Meses después desde *El Tiempo*, dirán: "...Surgió

el endeble debate de los gases, edificado sobre naderías, e inverosímil para haber sido adelantado por el jefe de una colectividad histórica.." (34).

Días antes de la consulta electoral, la casa Liberal de Cali es asaltada. Las acusaciones señalan a la policía. Carlos Lleras culpa a la intransigencia conservadora:

" ... La política conservadora en la oposición, ni buscó la Unión Nacional, ni propugnó la concordía, ni supo tener para criticar a nuestros gobiernos, el mínimo de honestidad intelectual que es necesario contar para que la lucha política se desarrolle sobre bases civilizadas y limpias ... " (35).

En medio de tan encendido ambiente *El Siglo*, el 1 de octubre, lanzaba la siguiente acusación:

" ... El cincuenta por ciento de la cedulaación total del país está falseada. No se necesita demostrar que el millón ochocientas mil cédulas falsas se hallan en poder del partido liberal, porque la manera como la cedulaación ha sido hecha en el anterior tiempo excluye a los conservadores de toda responsabilidad en el fraude ... " (36).

El día 3, el propio presidente, abogará por la independencia de los jueces de instrucción. Si ésta resulta cuestionada, el fraude y la Violencia se constituían en fallidas bases del comportamiento democrático nacional. (37).

Por su parte, los medios de expresión liberales, un día antes de la votación, no tendrán reparos en manifestar:

" ... En la actualidad hay millares de liberales que sufren cruda persecución, a quienes las autoridades niegan protección ... El fracaso de la oligarquía conservadora- de la cual, naturalmente, han sido excluidas las corrientes jóvenes y las fuerzas populares del conservatismo- en la solución de los más urgentes problemas públicos, resulta de la oposición

entre sus métodos e ideas frente a los hechos de la actualidad colombiana ... " (38).

El día 5 se celebran los comicios. En ellos, había que proceder a la elección de 801 consejos municipales. La votación no quedó exenta de actos violentos. Los conservadores experimentaron un ascenso de 194 a 329. Por contra, si lo comparamos proporcionalmente con los conseguidos en las legislativas, llegando al 44, 4% de los votos; en las municipales tendrán que asumir el cambio, donde logran un 43,5%. Los liberales, a pesar de mantener la mayoría de los municipios bajo su autoridad, con un 56,5% de votos, se verán expuestos a soportar la pugna que los conservadores estaban lanzando con creciente intensidad.

Pasadas las elecciones, el debate parlamentario vuelve a adquirir renovada intensidad. Las propuestas que ambos partidos realizan sobre reforma policial, esgrimida por cada uno de ellos pero con diferentes motivos, habrá de establecer la clara diferencia, no sólo por la posición que tome ante el aparato del Estado, sino también por el control de un medio tanpreciado.

Parlamentarios liberales, que buscaban eximir a la policía de la tutela del Ejecutivo, presentan un proyecto. En igual medida, querían establecer mayor control sobre las policías locales, de conocido signo conservador. La respuesta que el gabinete da es clara. El ministro Montalvo, amparándose en la autoridad gubernamental sobre el instituto armado, manifiesta: " ... si el instrumento por excelencia que dispone el gobierno y el Presidente de la República para lograr esos fines constitucionales es la policía, el gobierno tiene que defender a sagre y fuego las instituciones democráticas ... " (39).

Con estas propuestas, que no sólo habían de ocasionar fuerte polémica en el interior del liberalismo, por considerar que el

empleo de la policía sería directo en contra de ellos; se encontraba otra, ésta de carácter interno, entre aquellos grupos enfrentados entre sí. Al ser gaitanistas, sus defensores, el sector santista del partido, aprovechó la ocasión para descalificarlas. Desde *El Tiempo*, propiedad de Eduardo Santos, y en referencia al fracaso de las actividades del Congreso, se encontraba la siguiente explicación: " ... A esas mayorías no sólo se las dejó marchar a la deriva, sino que se las desconcertó ... y se las anuló por el vanidoso prurito personalista, de asumir en cada instante, un sólo ciudadano (Dr Gaitán), la totalidad de cuanto se presentaba, se sucedía o se proyectaba ... " (40).

Así las cosas, el Congreso continuó siendo escenario de duros debates. Los puntos defendidos por el Ejecutivo resultaban atacados por sistema. El resultado de sus actividades durante aquel período, lejos de resultar provechosos, habían sufrido fuertes estancamientos. De igual manera, en su interior, hubo intentos de agresión armada. Lo político había penetrado de tal manera en cada uno de los estamentos parlamentarios que hacía difícil su diferenciación. Los actos de Violencia vividos en Santander Norte, provocaban fuertes tensiones. Durante el conjunto del año que terminaba, las cifras muertos por tal motivo llegaban a 14.000 personas.

Uniéndose al desconcertante medio político nacional, el partido Socialista Democrático, no escapa a la división. El V Congreso celebrado en Bucaramanga, marca el inicio de la separación. De una parte, los defensores de Durán, tildados de "brawderista"; de otra, Gilberto Viera, orientado hacia las líneas más independientes y con concepciones leninistas. Los primeros son expulsados, vista la división ya reflejada con motivo de la huelga de mayo. Viera, como

nuevo presidente del partido, intentará la reconstrucción al amparo de la guerra fría y de La Violencia (41).

Enero del 48 será el preludio de un año con especiales significados para el conjunto de las actividades públicas. La intransigencia, de la cual harán gala ambas formaciones, adquirirá cotas difícilmente alcanzadas con anterioridad. Las expulsiones de trabajadores liberales, al igual que ocurrió en mayo, levantaban airadas protestas. Su intención, más allá de transformar la carrera administrativa, perseguía frenar el acaparador deseo conservador en la ocupación de puestos. Igualmente, la colaboración esgrimida por el gobierno de Unión Nacional, debía superar un nuevo obstáculo. Gaitán, impone a los miembros de su partido, tanto en asambleas departamentales como en concejos municipales, practicar la "resistencia civil". Es decir, negarse a votar cualquier presupuesto que se presentara, contribuyendo al entorpecimiento de las labores de gobierno (42).

Los acontecimientos, vistos desde la legación española eran así :

" ... El hecho de detentar el poder Ejecutivo el partido Conservador, mientras que la mayoría parlamentaria se encuentra en manos liberales, hace que los dos grandes partidos- y únicos en realidad-, vivan una tensión que hace imposible toda acción política de algún empeño y continuidad. De la tensión se ha pasado a la violencia y hay zonas de Colombia que viven realmente en estado de guerra. Los jefes de los dos partidos han declarado explícitamente que la guerra civil ha estallado, el gobierno ha declarado el Estado de Sitio en el departamento de Santander Norte ... " (43).

Los sucesos descritos desde la legación, tendrán respuesta por parte del gobierno. Además de la declaración del estado de sitio,

miembros del Ejército pasarán a ocupar, por orden presidencial, las gobernaciones de algunas zonas. Santander Norte será una de ellas. Empleando al Ejército, el presidente, da un paso más en la utilización de militares en actividades anteriormente reservadas a civiles.

Preocupados por los enfrentamientos que diversas zonas del país estaban soportando, y de los cuales eran destinatarios en mayor medida representantes liberales; Gaitán decide encabezar una marcha, que con el nombre de "manifestación del silencio", se celebra el 7 de febrero en Bogotá, junto con otras ciudades del país. La intención, expresar su descontento ante tales atropellos.

Tal y como el título indica, será en silencio. Con este gesto, Gaitán, querrá demostrar a quienes le acusaban de provocar desordenes, qué tipo de disciplina y solidaridad son capaces de tener los gaitanistas.

Bajo el nombre de "Plegaria por la Paz", Jorge E. Gaitán, transmite el sentir del hombre que es pueblo, pidiendo a Ospina ser escuchado. Expondrá un balance entre la vida y la muerte, buscando como solución "¡hechos de paz y de civilización!". Aprovechando el medio, donde la marcha se desarrolla en completo silencio, dirá: "Hay un gran partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan" (44).

Si estos eran los hechos que tenían lugar en Bogotá, el mismo día, ciudades como Manizales y Pereira, cambiarán silencio por llanto. Miembros del liberalismo que participaban en marchas similares, son asesinados por fuerzas policiales. Al entierro acude Gaitán.

El 15 de febrero, en un homenaje a los copartidarios muertos, Gaitán expondrá la distancia entre lo político y lo social. Para la colectividad liberal, las muestras de paciencia contenida

llegan al límite: " ... El silencio de nuestras gargantas es ahora grito de justicia en nuestras gargantas; el desaparecido ritmo de nuestros corazones, es ahora indomable raudal de energía para nuestra fiera voluntad de lucha ... " (45).

En contraste con la "marcha del silencio", la barbarie gana distancia a la civilidad: "Compañeros de lucha: al pie de vuestras tumbas juramos vengaros, restableciendo con la victoria del pueblo los fueros de la paz y de la justicia en Colombia ... Compañeros: ¡Vuestro silencio es grito! ¡Vuestra muerte es vida de nuestro destino final!" (46).

Tras los actos de Manizales, el distanciamiento es total. La barbarie social será imputada al Estado conservador. La ruptura entre ambos países, el político y el nacional, provocará el enfrentamiento abierto en la sociedad. Participar en el gabinete de coalición, carece ya de sentido.

Días después de lo acontecido, el día 25, los conservadores, defensores de Ospina, manifestarán en carta dirigida al presidente, las muestras de solidaridad hacia el gobierno de Unión Nacional, deseando con ello: " ... una completa eliminación de las causas que cada una de las colectividades le atribuye al fenómeno de la violencia ... " (47).

Por su parte, los representantes liberales deciden abandonar el gabinete. Desde su perspectiva, los hechos imputados a la Violencia tienen una explicación:

" ... Los estrategas del partido conservador, bien aleccionados en los textos de antidemocracia, concentran la violencia en aquellas comarcas del país que, por sus menores defensas sociales, parecían más susceptibles de rendirse al terror. Se producen las atroces matanzas de Nariño y Boyacá ... Sin la perspectiva de un debate electoral inmediato ... el conservatismo proclama por boca de su jefe que el origen de la

violencia no es otro que el fraude electoral, representado por un millón ochocientas mil cédulas falsas. Con esta tesis subversiva se pretendía ... cohonestar el terrorismo y sentar las bases para el posterior desconocimiento de nuestro régimen jurídico como ya lo habían anunciado escritores del partido conservador ... " (48).

Así las cosas, Bogotá, se prepara para la IX Conferencia Panamericana, a celebrar en abril. Por tal motivo, se realizaron diversas obras necesarias para la infraestructura capitalina. El contraste con las necesidades de sus habitantes, resulta más patente. Para éstos, que ven cómo los servicios de la ciudad tienen mayor deterioro, las obras, serán consideradas como una provocación.

Politicamente, la renuncia liberal servirá para que los conservadores formen un gobierno homogéneo. De éste, Gómez pasará a ser ministro de Relaciones Exteriores. Como tal será el encargado de extender las invitaciones a los representantes políticos nacionales para la Conferencia. Gaitán, a pesar de ser el jefe del partido opositor, no es invitado. Con esta medida, la preponderancia interna del gaitanismo no queda reflejada a nivel externo. Los resentimientos de los seguidores gaitanistas pronto tendrán expresión.

Mientras, el presidente en el discurso de apertura, entendía así el significado de ésta: " ... Las democracias del Hemisferio Occidental están dispuestas a defender su total independencia espiritual y política y reafirmar su unidad, que es su fuerza, ante todas las amenazas y ante todos los peligros ... " (49). Con ello, daba a entender que las barreras, ante el aireado peligro comunista, estarían preparadas en América.

El desarrollo posterior de la Conferencia, estuvo marcado por distintos acontecimientos, que harían de ella un foco de atención mundial. De una parte, el habitante bogotano, hubo de soportar

diversos cortes en servicios tan esenciales como luz y agua. La ira popular aumentaba mayormente si cabe. De otra, la prensa, sea del signo que fuera, no abandonaba las acusaciones en contra de los líderes nacionales participantes. Lo que para los gaitanistas eran acciones inscritas en el más puro espíritu falangista, desde la prensa conservadora, eran conexiones inequívocas del gaitanismo con el comunismo internacional (50).

2.1.1.3. El nueve de Abril.

Sin embargo, el día 9 de abril, habría de romper la tensa paz del evento. Gaitán era asesinado en plena vía pública. Con esta noticia, acaecida en el centro de Bogotá, aquellos que habían presagiado la separación entre país político y país nacional, comprobarán tal disociación. Los movimientos que en la capital del país se producen, denominados el "Bogotazo", serán perfecta muestra.

Poco después de difundida ésta, una fuerte convulsión envuelve aquella ciudad. Como expresión más mediata, habrá saqueos a establecimientos tales como ferreterías, comercios etc. Igualmente, unidades de la policía bogotana colaboran en la insurrección. Desde distintas emisoras radiofónicas se lanzan proclamas, todas ellas tendentes a la revuelta. Para las masas, aquello que pueda identificarse con el partido opositor era motivo de asalto. Es por ello que el palacio Arzobispal, Nunciatura, colegios y seminarios religiosos son atacados. Los ministerios e institutos oficiales tampoco escapan. El edificio de *El Siglo* y la residencia de Gómez, resultan dañadas. Posteriormente, intentarán asaltar el palacio presidencial. Sin embargo, la pequeña guarnición que en él se encontraba (diez y seis hombres), resultará suficiente para detener la

intentona. Esa misma noche llegan los primeros contingentes militares de apoyo. En aquel momento, el destino de la revuelta está sellado. La respuesta dada por parte del Ejército, días después, ocasionará sólo en Bogotá, cientos de muertos (51).

En el resto del país, las confrontaciones no dejaron de ser intensas. Hubo enfrentamientos entre miembros de ambas colectividades en Barranquilla, Montería y Bucaramanga. Intentos de golpe de Estado en Barrancabermeja, al igual que en otras ciudades del occidente colombiano. En Tolima, los conservadores alegaban que el gobernador y la policía habían dirigido a los revolucionarios en Ibagué. La ciudad de Cali, igualmente, sufrirá la violencia. La intervención del entonces jefe militar de la ciudad, coronel Gustavo Rojas Pinilla, impide que los rebeldes se hagan con el control de ésta (52).

Durante los días de revuelta, los deseos de canalizarla son fallidos. Las denominadas "juntas revolucionarias" intentarán dar una imagen de control. En ellas tendrán cabida, desde antiguos políticos liberales, que como Adán Arriaga habían actuado duramente contra los sindicatos en el intermedio llerista, hasta el antiguo rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina (53).

Los distintos estamentos del Estado quedaron sobrepasados. Ni Congreso, ni gobierno, hubieran imaginado la magnitud alcanzada, la respuesta dada desde las directivas partidarias, (particularmente la liberal), no deja de ser destacable. En principio, pedirán a Ospina que renuncie. Mientras, Lauerano Gómez intentaba convencerle para que ofreciera el gobierno a los militares. El presidente, entre tanto, se mantiene firme, sigue en Palacio. A él acudirán los líderes liberales con intención de dar una salida

conjunta. De ésta forma, el gobierno de coalición, como recuperación de la autonomía política, tenía continuidad (54).

Allí estarán Darío Echandía y Carlos Lleras Restrepo. Ellos, que habían soportado el desplazamiento gaitanista, pero que al contrario de otros colaboradores, no habían quedado sin autoridad propia, pasaban a ser los naturales depositarios de los valores liberales. Recuperada su ascensión política, el cambio en el partido resultó claro. Las ideas de Gaitán comenzaron a ser olvidadas (55).

Con su presencia, los representantes de lo político harán todo lo posible por ofrecer una imagen, aunque momentánea, de cohesión. Los liberales que a ello se prestan recibirán las críticas internas del gaitanismo. Estos, perdida buena parte de su argumentación, al no haber podido superar la vorágine populista, sin conseguir su transformación en un movimiento permanente, desaparecido el líder, verán cómo se produce la inevitable dispersión de sus efectivos.

Los caminos elegidos serán variados. Por un lado, la fidelidad al liberalismo, se mantiene. Por otro, el paso primero al debilitado partido Comunista, y posteriormente a movimientos guerrilleros, serán el refugio de los inconformes. Para éstos, el dominio que tanto políticos como militares establecerán en sus zonas de asentamiento, ocasionará una fuerte mella (56).

Será por ello, que el nueve de abril, lejos de ser un hecho revolucionario, en sí, dado que no buscaban reemplazar unas clases por otras, en la conducción del Estado, trajo como pensamiento más mediano, la intención de sustituir la presencia conservadora, al frente de éste, por los liberales (57). Con el fin de evitar su repetición, el gobierno decide, mediante el Artículo 121, declarar el estado de sitio.

Su utilización pasará a ser una constante en la vida política colombiana.

2.1.1.4. Después del 9 de abril.

Establecidas las bases de la renovada Unión Nacional, la civilidad entenderá que, para el país político, resultará difícil abandonar aquellas formas de gobierno que marcan su continuidad. Es más, al garantizar la presencia del liberalismo, las que en principio eran voces discordantes por ella, se transformarán en alivio. Primero, al comprobar que Laureano Gómez no figuraba en él. Segundo, de alegría, por la presencia al frente del ministerio de Gobierno de Darío Echandía, antiguo colaborador gaitanista.

Recuperada la presencia liberal en el gobierno, ciertas zonas que permanecían en conflicto, previas gestiones de sus representantes, aceptarán nuevamente la autoridad gubernamental. Así mismo, los llamamientos realizados por Lleras Restrepo, como nuevo jefe del Directorio Nacional Liberal, pidiendo el fin de la huelga general, son una muestra más de este clima de colaboración (58).

Es por ello que, Lleras analizando las decisiones tomadas por su partido en aquel momento, manifestará:

" ... Los directorios de los dos partidos se hallan de acuerdo en la necesidad de establecer la calma y normalidad, no sólo para salvar al país de esos gravísimos peligros, sino para poder encauzar el esfuerzo unido de todos los colombianos hacia la reconstrucción moral y material ... garantizar la paz sobre sólidas bases de justicia ... " (59).

Desde la legación española, días después y en referencia a los momentos que precedieron al nuevo gobierno, se decía:

"La constitución del nuevo gobierno con la participación de los dos partidos históricos, puede atribuirse únicamente a la tenáz resistencia del Sr Presidente de la República, quien se negó a admitir la pretensión del partido Liberal.-al parecer lanzada en forma de ultimatum y queriendo hechar al presidente la responsabilidad total del no restablecimiento del orden público ... " (60).

Una vez pasada la revuelta, las culpas que se viertan sobre los participantes serán variadas. Dado el clima político existente, antes y después de la Conferencia, los acusadores señalarán a los comunistas, amparados por el liberalismo, como mentores premeditados de la acción. Para sustentar tal teoría, no exenta del ambiente de guerra fría de la época, servirán los argumentos lanzados por la prensa. Así desde *El Tiempo*, que en esta ocasión mantendrá la misma opinión que los medios conservadores, los culpables serán múltiples. La Embajada Rusa (no en vano, un mes después, el gobierno conservador romperá relaciones con la URSS), el comunismo internacional y Acción Democrática de Venezuela, estaban entre los sospechosos (61).

Para confirmar tal teoría, los informes diplomáticos, enviados por la legación española en Buenos Aires, dirán:

" ... La participación comunista en todos los tristísimos y luctuosos acontecimientos de Colombia, fue palpable, aunque procuró que pasara desapercibida... La explicación más racional que puede darse al asesinato de Gaitán, hay que buscarla en el hecho de que se pretendió dar una excusa a los hechos que siguieron a su muerte ... " (62).

En cualquier caso, aquellos que hablaron de implicaciones comunistas, detalladas al máximo durante la época, olvidaron indicar la falta de poder que éste tenía, por aquel entonces, en Colombia. Las

causas, entre otras, las corrientes divisorias, acrecentadas tras el Congreso del 47, debilitaron al ya de por sí tambaleante partido.

Contrastando con las inevitables muestras de reprobación vertidas por diversos sectores sociales del país, tal y como ocurrió con la pastoral condenatoria de la Iglesia; para los miembros de los gremios económicos, si bien se unían a ellas, la asimilación de ésta, fue lograndose paulatinamente.

Las zonas cafeteras, no resultaron afectadas. El centro y los comercios de Bogotá, que habían tenido desperfectos, serían reconstruidos mediante ayuda crediticia gubernamental. Los anunciados aumentos presupuestarios, aún incidiendo particularmente en el capítulo militar, gracias a los impuestos, no levantaron reticencias por parte de los sectores económicos. Es más, dado el carácter de insurrectos que tuvieron los participantes, resultaba comprensible por parte de los dirigentes políticos, el establecer tribunales militares que juzgarían severa y eficazmente a los culpables (63).

Mientras, la normalidad de la actividad política, en consonancia a los objetivos de la Unión Nacional, fue lográndose. Los nombramientos realizados, con miembros de ambos partidos, habían excluido a aquellos sectores que hubieran supuesto un retroceso en la deseada concordia. Solamente Andrade, en la cartera de Obras Públicas, representaba la posición considerada como intransigente. De igual manera, el conflictivo ministerio de Guerra, recayó sobre un general del agrado liberal, Germán Ocampo " ... cuya absoluta imparcialidad hizo posible el fortalecimiento de la disciplina interna del Ejército, cuya unánime reacción frente a la revuelta, debe el país, la paulatina vuelta a la normalidad, actuación que ha sido reconocida y elogiada unánimemente ... " (64).

Ahora bien, las dificultades no tardaron en llegar. Mantener la cohesión en el seno de los partidos, y así poder desempeñar las labores de gobierno, será el gran obstáculo que deban afrontar Ospina y Echandía. No lograrlo, era dar espacio a las posturas intransigentes que en ambos se vislumbraban.

En el caso liberal, las desconfianzas tenían una base profunda. Perdida la fuerza catalizadora de Gaitán, solamente Echandía, podía contar con apoyo de sus bases. Con todo, él también estará expuesto a la calificación de "traidor". Aceptar la coalición sin haber escuchado las sugerencias, no sólo internas, sino también las realizadas por la CTC, tenía ese precio (65). De igual manera, la presencia al frente del Directorio Nacional Liberal, de Carlos Lleras Restrepo, persona que para buena parte de los gaitanistas representaba las fuerzas "oligárquicas", marcarían un poco más las reticencias liberales.

Doctrinalmente, la situación no dejaba de ser preocupante. Las energías estuvieron puestas, más en el mantenimiento del statu quo, traducido en lograr la reunión del Congreso, (aún estando vigente el estado de sitio), que en la realización de propuestas dirigidas a romper, no sólo con el vacío dejado en el interior del partido y que podría provocar una escisión interna; sino también, para habilitar cauces de sincero diálogo, evitando el enfrentamiento.

Los conservadores, por su parte, no estaban menos sorprendidos. Los sucesos de abril, aumentaron las reticencias hacia cualquier acuerdo político. Si bien es cierto, que externamente manifestaban un decidido apoyo al presidente Ospina, no menos cierto, eran las sospechas que entre los miembros del partido, levantaba la presencia de algunos de los nuevos líderes, que ante la ausencia de Gómez, se situaban en la dirección.

Tal era el caso del entonces ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Zuleta Angel. Hacia él iban dirigidas buena parte de las críticas acusándolo de colaboracionista. Desde la legación española, no dudaban en manifestar: " ... la no muy cómoda situación del Canciller Zuleta Angel en el seno del conservatismo, ya que amplios sectores del mismo le atacan como "vacilante" e incluso llegan a afirmar que el Canciller es el "séptimo Ministro liberal" ... " (66).

No menos importante, resultaba la ascensión lograda por personas ligadas a los departamentos conservadores. Así Gilberto Alzate Avendaño, desde Caldas, (que ya había realizado un intento al margen del partido); Guillermo León Valencia, en Popayán, que habiendo sido un antiguo opositor intransigente, pasados los hechos de abril "se convirtió decididamente al campo de la "colaboración" (67); o de Augusto Ramirez Moreno, en Tolima; constituían los nuevos puntos de apoyo, que demandaban su cota de poder en el partido.

Tras estas posiciones, no había sino un claro síntoma de crisis interna, que pasados los sucesos de abril, tuvieron ambas formaciones. Las expresiones posteriores, en forma de enfrentamientos internos, falta de coherencia entre las directivas, dificultades por parte de Ospina y Echandía en hacer valer la autoridad, dentro y fuera de sus partidos, trajeron el recrudecimiento de la Violencia por diversas zonas del territorio.

Lograr el equilibrio, entre radicales y moderados, parecía cada vez más lejano. Los intentos por hacer válida una forma de convivencia, quedaban empeñados desde el momento en que buena parte de los líderes locales, desconfiaban de las autoridades centrales. En un intento por clarificar ideas, mayo será el mes elegido por ambos para exponer sus puntos de acción.

Los conservadores, después de expresar su desencanto por lo sucedido en el país, un mes antes, ofrecerán respaldo a Ospina. Junto a ello, pedirán castigo para los culpables y estableciendo, que cualquier base de acuerdo político se cimentaría sobre criterios tendentes a conseguir un Frente Nacional anticomunista. Por contra los liberales, hacían votos de renovado apoyo al gobierno de coalición, cifrando sus esperanzas en la necesaria vuelta a la normalidad constitucional, que trajera la apertura del Congreso para julio.

Será en este último apartado, cuando la discusión lleque a su punto álgido. Los conservadores, dada la vigencia del estado de sitio, negaban cualquier validez a la reunión del Congreso para el 20 de julio. Los liberales, en cambio, al contar con mayoría en ellas, buscaban por todos los medios, la apertura de éste, sin olvidar el ofrecimiento de una tregua política.

Ahora bien, los signos de buena voluntad de parte y parte, parecían no tener respuesta. La argumentación esgrimida buscaba preservar el ya señalado statu quo. Esto se traducía, desde la óptica liberal, en mantener la reunión del Congreso, confiando que en el año 50 pudieran conseguir recuperar el Ejecutivo. Es más, ante la negativa conservadora, estaban dispuestos a romper cualquier acuerdo. Lleras Restrepo expresaba así su contrariedad: " ... Sobrevino después, la oposición del conservatismo a la reunión ordinaria del Congreso. Fue otro ataque indudable a la política de Unión Nacional, por que cómo ya se indicó, una de las finalidades esenciales de esa política era el mantenimiento moral de las instituciones ... "(68).

El principio de acuerdo pareció lograrse cuando, a propuesta del presidente y siguiendo las máximas de la Unión Nacional, bajo el nombre de "gobierno de cruce", decidieron que,

ministerios, secretarías, gobernaciones, alcaldías, jueces de instrucción y sus secretarios; fuesen repartidos, a partes iguales, entre liberales y conservadores.

La realidad, no obstante, era distinta. Las acusaciones vertidas por su incumplimiento, servirán para aumentar la Violencia en los medios rural y urbano. El aliento que las directivas políticas daban, contribuía a ello. Es así como, los conservadores, manifestándose contra el gobierno de coalición, entorpecen las labores de gobierno en departamentos como Tolima, Atlántico y Valle del Cauca, conocidos por su particular enfrentamiento político (69).

En igual medida, los hechos que siguieron al nueve de abril, habrán de afectar duramente al movimiento sindical. Aprovechando el estado de sitio, el gobierno establece el control sobre las reuniones que los sindicatos quieran realizar. Para celebrarlas, habrán de notificarlo a las autoridades laborales y militares, en caso contrario serán ilegales. Los intentos por quebrantar tal situación resultaron infructuosos. Es más, la intervención directa, consentida desde el Estado, aún a costa del desmantelamiento de los sindicatos que pudieran resultar críticos, se hizo sin contemplaciones.

Como ejemplos, la ocupación sufrida por la Federación de Trabajadores de Cundinamarca, realizada por el Ejército. De igual manera, en el Atlántico, (Barranquilla), las directivas sindicales fueron destituidas. El ministro de Trabajo, el conservador Evaristo Sourdís, estaba conforme. Las autoridades locales consiguen sustituirlos por dirigentes de su conveniencia (70).

Con ello, había que entender que, no solo era la repartición del Estado la que estaba en juego. Necesitaban mostrar ante el resto de la sociedad, que el control efectivo y real, se extendía

a los sectores discordantes. Las consecuencias serán traumáticas. Mediatizados los canales de expresión, perdida la independencia del Estado, la pugna por el control comenzó a extenderse de forma preocupante. En este caso, La Violencia, adquirió sus expresiones más duras.

Mientras, el debate político continúa. La proximidad del mes de julio resulta significativa. Para entonces, estaba programada la apertura del Congreso. Antes que ésta tenga lugar, los líderes políticos no desaprovecharán la oportunidad de expresar, conformidad o disgusto a tal hecho.

Los conservadores, como es sabido, aducían que la vigencia del estado de sitio, impedía la reunión. Para el liberalismo, resultaba necesaria, como garantía del hacer político nacional. Una vez más, con intención de clarificar ideas, los Directorios de ambas formaciones, celebrarán reuniones generales.

Si para el liberalismo, la pérdida de Gaitán había supuesto la recuperación del poder interno por parte de la "oligarquía" desplazada; los resquicios de su ya acéfalo movimiento, habrían de seguir el mismo camino. Las reuniones que la Dirección Liberal realiza, expresan esta nueva situación. Para la legación española la maniobra se desarrolló así:

" ... La designación de la nueva Directiva Liberal constituye una nueva derrota del sector extremista ... Dos típicos representantes del movimiento juvenil dentro del liberalismo -movimiento caracterizado por su repulsa del liberalismo económico- han sido derrotados en la elección de miembros de la Directiva Nacional: el Dr Palacio Rudas y el Representante Ordoñez Quintero ... El primero de los citados, no pertenecía abiertamente al "gaitanismo", siendo más bien "lopista de izquierda", había alcanzado

un prestigio de "hombre internacional" y a la vez desarrollaba una violenta campaña de oposición al Gobierno del presidente Ospina Pérez ..." (71).

Igualmente, sorprende que en la reunión, las referencias al debatido tema del Congreso no aparezcan. La prensa conservadora, lo reflejará de la siguiente manera: " ... No dicen los jefes liberales si estiman compatible la reunión del Congreso con el estado de sitio, ni si sus declaraciones se han discutido sobre la base de que el orden público pueda ser restablecido con autoridad al veinte de julio ... " (72).

Si los liberales, daban muestras de contrariedad, los conservadores no les iban a la zaga. El día 11 de julio, dado el caríz que tomaban los hechos, con disputas internas cada vez mayores, optan por programar su reunión. Las ya indicadas corrientes, encabezadas por Guillermo Valencia y Gilberto Alzate, serán las que marquen preferencias.

El primero, toda vez que realiza la referida conversión, y recuperado su afán unionista, defiende la opción presidencial, es decir, apoyar la apertura del Congreso. Para el segundo, fijando sus preferencias en la renovación del partido, abandonando los obsoletos patrones de dirección, mantendrá una posición dispersa. En principio, estará de acuerdo con los sectores gomistas, posteriormente, intentará distanciarse de ellos, al comprender las intenciones cuasi intransigentes de éstos.

Pero la polémica, no por ello es abandonada. Las posturas que desde los sectores favorables, al igual que los contrarios a la apertura, dibujando un ambiente de carácter variable, hacían presagiar una situación de crispación, cercana a la ruptura interna.

Con tal motivo, días después de celebrada la reunión, la legación española daba cuenta del hecho:

" ... El Dr.Ospina Pérez, anunció su decidido propósito de no oponerse a la reunión del Parlamento el día 20 de julio, asestando con ello un golpe decisivo al grupo mayoritario del conservatismo que era adversario irreductible de dicha reunión. La reacción primera entre los dirigentes conservadores fue la de afirmar que el presidente había invalidado la Convención. Sin embargo, las tesis presidenciales fueron ganando paulatinamente terreno y si bien no se llegó a la proclamación apoteósica del Dr.Ospina ... si se impuso una actitud expectante, que se traducirá indudablemente, en la asistencia colectiva del conservatismo al Parlamento ... " (73).

Superada, en cierto modo, la primera dificultad, hubo de prestársele atención a la unidad de criterios ante la Unidad Nacional. En igual medida, las candidaturas internas del partido, traían consigo un ambiente de cierta intranquilidad. La reunión celebrada colaboró en su recuperación.

En esta ocasión, una vez que pasó el intento abierto de escisión, debilitando con ello, no sólo al partido, sino a la ya de por sí ténue composición del Estado, la salvación llega gracias al nombramiento de un nuevo Directorio. De éste, se podían extraer dos opciones. Primera, la continuidad en las labores de gobierno, que venía dada por la designación de Laureano Gómez como miembro nato del mismo. Segunda, la palpable ascensión conseguida por Guillermo Valencia, Gilberto Alzate, y Augusto Ramírez Moreno, en un intento de ofrecer esperanzas de nuevos rumbos, que se transformarían dependiendo de las conveniencias, sobre apoyo o distancia con Gómez.

Por su parte Ospina, intentaba mediante limitadas concesiones, atraer a los sectores radicales del partido. La apertura del Congreso estaba conseguida, ahora, libradas las diferencias

internas al respecto, las intenciones se cifraban en que, los dos Directorios consiguieran una base de acuerdo que pusiera fin al enfrentamiento político.

Es así, como por parte de liberales y conservadores se acepta una tregua política. Para ello, y como muestra de buena voluntad, los primeros deciden aceptar la propuesta de los segundos, consistente en elaborar una reforma electoral. Con ella, confiaban terminar las sospechas que cada consulta electoral levantaba en ambos bandos.

Llegado el momento, tal y como Ospina había garantizado, la apertura del Congreso tiene lugar el 20 de julio. En el discurso, después de congratularse con la actitud del Ejército tras los hechos de abril; dar explicaciones sobre la declaración de estado vigente, no sin antes recalcar que tales disposiciones "habían sido dictados en total y completo acuerdo entre los dos partidos históricos" (74), propone como punto previo a la reforma electoral, la revisión de los registros electorales.

Una vez lanzada la propuesta, que en cierto modo fue aceptada, traía como consecuencia, el replantear las reglas del juego electoral establecidas. Por una parte, los liberales, que hasta entonces venían estableciendo el control en los jurados electorales, deberán abandonarlo. De otra, si la reforma era aprobada, tendrán que dar paso a los registradores municipales, donde los conservadores también entrarían, dado el sistema de rotación y repartición entre partidos (75).

Donde si hubo coincidencia, fue en la creación de un nuevo registro de votantes, para lo cual, creían necesario que (tras el acuerdo), la renovada Oficina Nacional del Registro, debería ser

imparcial. Para su control, debían atenerse a los dictados de la Corte Electoral Nacional.

Hasta llegar a la aprobación efectiva de tales acuerdos, las directivas de ambos partidos, adoptaron un comportamiento esquivo. Así, toda vez que la prioridad estaba en la reforma electoral, el primer problema no tarda en surgir. Los liberales, no conformes con la propuesta conservadora, sobre la paridad del tribunal electoral, deciden oponerse a ella. Ante tal actitud, éstos, amenazan con abandonar la Unión Nacional (76). Lo que pudo ser el primer amago de ruptura, gracias a la intervención de Echandía, queda contenida.

Los decretos de contenido social, en cambio, no encontraban iguales impedimentos para ser aprobados. Si por una parte se procedía a la creación del Instituto de Seguro Social, de otra se daban las bases -entraría en vigor en 1950- para que los trabajadores tuviesen participación en los beneficios de las empresas. Además, el campesinado, también se beneficiaría, mediante bonificación, con la construcción de viviendas.

Ahora bien, la prioridad seguía siendo la reforma. En algunos casos, las dificultades por lograr el acuerdo, no eran ajenas a las declaraciones vertidas por sus dirigentes. Lauerano Gómez, que por aquel entonces se encontraba en España, opinaba así sobre la situación política colombiana: "Yo comparo este momento de Colombia con el de España, luego de la revolución del 34. Creo que como aquí, la guerra sería inevitable. Quiera Dios que la ganemos nosotros" (77).

Mientras tanto, dada la cada vez menor confianza en las labores de gobierno, cuestionadas desde los propios partidos, hacía preveer la ruptura del gobierno unionista. Así, en declaraciones atribuídas al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuleta, considerando como candidato más idóneo para el próximo

mandato presidencial, a Darío Echandía, estuvieron a punto de provocar otra crisis de gobierno (78).

A pesar de todo, los momentos de tensión fueron superados. El gobierno siguió su curso. Los acuerdos que lograron salvarlo, no estuvieron exentos de problemáticas internas en la formación conservadora. Para el representante español, los hechos tenían una explicación:

" ... Parece ser que el doctor Gilberto Alzate Avendaño, preguntó al Presidente si éste conocía las conversaciones que el doctor Zuleta Angel mantenía con los dirigentes liberales sobre materia electoral y si, en caso de conocerlas las respaldaba ya que según lo convenido en ellas prácticamente se entregaba la decisión electoral en manos de los liberales ... " (79).

Pasados, al menos externamente los momentos de crisis, las actividades parlamentarias, recuperan su actividad. Para empezar, será discutida la posibilidad de conceder la amnistía a los acusados por los sucesos de abril. Ante este punto, la oposición conservadora estaba garantizada. A continuación, y no por ello exento de diversas disputas, se planteó el nombramiento de Contralor General de la República. Más adelante, y dada la conocida oposición liberal al estado de sitio, uno de sus representantes, el presidente del Senado, aboga por la derogación. Echandía reacciona, pedirá coherencia política y abandono de maniobras electoreras (80).

El grueso del debate, con todo, seguía sin plantearse. Las dificultades externas, al igual que en las declaraciones de Gómez, contribuían a ello. Si Ospina había encontrado en los gobiernos de cruce, la disposición válida para aplacar las iras políticas, los representantes locales, parecían no estar dispuestos a ello. Como

ejemplo el gobernador de Antioquia. Al negarse a cumplir lo acordado, deberá dimitir.

Los últimos meses hicieron albergar algunas esperanzas. En octubre, son puestos en libertad "los delincuentes políticos" (los detenidos tras el nueve de abril); algo que disgustará a los conservadores. Al mes siguiente, ante el Congreso, Ospina, defenderá las necesarias reformas electoral y policial, al igual que el estatuto de la paz (81).

La primera, sin embargo, dado el desacuerdo existente sobre la Corte Electoral, no exento de poca disposición al diálogo, queda sin firmarse. Que ambos quisieran mantener, ante la proximidad de las elecciones, sus prerrogativas -los conservadores paridad absoluta, los liberales contar con jurado electoral-, impedía un posible acuerdo.

Ante tanta insistencia, el representante español, no podía menos que exclamar:

" ... La táctica de enervar la acción parlamentaria ha tenido, hasta este instante, el efecto de desacreditar los principios básicos de las Instituciones en algunos núcleos del país. Lo que el presidente y su gobierno han planeado, como simple táctica de circunstancias, amenaza en convertirse en piedra de toque del posible descrédito institucional ... "

(82).

Igualmente, como ya había manifestado el presidente, la renovación, no tendría que estar absorbida en el apartado constitucional. Dada la actitud que tuvo la Policía Nacional durante los sucesos de abril, el Ejecutivo, por boca de Ospina, aboga por la renovación. Para ellos, era necesario contar con un cuerpo eminentemente técnico, que estuviera ajeno a la lucha de partidos e "integrado por individuos de especiales condiciones de moralidad, cultura y

preparación". Por todo ello, previa petición al Congreso, intentarán dotar al presidente de facultades extraordinarias, para proceder a la reorganización (83).

Como era de esperar, las quejas no faltaron. El liberalismo, veía en la nueva policía, no solo la pérdida de uno de los sectores más mimados por ellos, temía, que tal y como se estaban desarrollando los hechos en el país, el Estado, por medio de ésta, continuaría, con mayor impunidad si cabe, las acciones en contra suya. Si todo estaba preparado, informe de juristas incluido, la policía, bautizada como política por los liberales, según los deseos gubernamentales, comenzaría sus actividades en diciembre.

Ahora bien, toda vez que la situación parecía convertirse en un callejón sin salida, y dado que no daban muestras de acuerdo, Ospina interviene. Los partidos, superadas sus disputas, acceden a aprobar los miembros de la Corte Suprema Electoral. En ella, siguiendo los criterios unionistas, quedarán representados los intereses de ambas formaciones.

Sus miembros, irán desde el ex presidente Alfonso López, pasando por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (uno por cada partido), hasta el Gerente del Banco de la República, y terminando con el rector de la Universidad Nacional, Luis López de Mesa.

Junto a éste, resultó aprobado un nuevo calendario electoral. Así, las elecciones, ya fueran presidenciales, legislativas o departamentales, quedarán retrasadas a julio de 1950. Ello obedece a conseguir el plazo suficiente para la nueva cedulação. Igualmente, se establecerá que, cualquier decisión, será unánime, preocupándose los partidos por contar con igual número de registradores.

El acuerdo, aunque celebrado no tardó en tener detractores. Días después, grupos conservadores, quejosos por la permanencia de leyes como la del arrastre, dudaban de su efectividad (84).

Las actividades parlamentarias llegaban al cierre. Los observadores de la época, se mostraban escépticos ante la falta de legislar siguiendo los cauces parlamentarios. Dado el parón que trajo consigo la reforma electoral, el Ejecutivo, amparado en el estado de sitio, decidió hacer uso de decretos, tratando de convertirlos en legislación permanente (85).

Así, las críticas que desde diversos sectores, tenían como destinatario el Congreso, expresaban claramente el desánimo que reinaba en la sociedad. Para la prensa, independientemente del signo, los resultados obtenidos eran pobres. Ni siquiera el levantamiento del estado de sitio, (tan defendido desde el liberalismo), con el consiguiente cambio que para algunas zonas supuso el paso de gobernadores civiles a militares, era motivo de esperanza. El año del "bogotazo", la Violencia, había tenido especial incidencia sobre el país, 43.557 muertos eran su fruto (86).

Llegado el nuevo año, las disputas se mantenían. Los acuerdos logrados, más por obligación que por convicción, tendrían tanto valor como la palabra de las cambiantes directivas políticas. Para el Ejecutivo, el papel de mediador le estaba quedando grande. Las líneas radicales, existentes en ambos partidos, que ya habían expresado posiciones en el año anterior, durante el que iniciaba, no perderán la ocasión para hacer más constantes sus demandas.

Los cambios que el país estaba sufriendo también colaboraban. A pesar de la creciente urbanización, los sectores rurales, seguían siendo mayoritarios. Los conflictos, no solo de tipo

político, sino también, de orden económico, compondrán un especial binomio en el que la Violencia, será su triste resultado.

Sin embargo, aún existiendo una fuerte disputa política, el nuevo año, no estará acompañado de un triste balance económico. Los gremios, como representantes de la "oligarquía económica" no se sentirán insatisfechos. Es más, si desde los partidos había pugna, ellos, tomando como ejemplo el sector cafetero, darán cumplida respuesta sobre cómo compartir las labores de gobierno, en los medios de producción.

Ahora bien, las aparentes muestras de concordia vividas desde estos sectores, nada tendrán que ver con los hechos que el país político tiene ante sí. Los acuerdos logrados, pronto serán cuestionados. Cualquier disculpa era válida. En este caso fue la puesta en práctica, por parte del registrador nacional, de la reforma electoral.

Desde la óptica conservadora, la decisión de dotar a cada región de un registrador departamental, era cuando menos "estúpida". Por su parte el registrador nacional, intentaba ofrecer todo tipo de garantías sobre la imparcialidad de la elección, indicando que serían escogidas para el cargo "personas de los más limpios antecedentes, de reconocida autoridad ... " (87).

Las próximas consultas electorales, traerán una mayor intensidad. La celebración de elecciones para Asambleas, Cámara de Representantes y Presidencia, tuvieron un doble efecto. De una parte aunar, las que anteriormente habían sido corrientes dispersas. De otra, rotas éstas, la pugna entre las formaciones tomaría renovados rumbos.

Así, llegado el momento, los conservadores, dejaron las diferencias que tanto les ocupaban. Gómez, a pesar de permanecer en

España, lograba mantener vivas las esperanzas de sus seguidores. Para ello, todos los medios eran válidos. La prensa, incluso aquellos que se distinguían por su pasada moderación, hacían causa común. Desde Antioquia, *El Colombiano*, unirá sus esfuerzos a los realizados por *El Siglo*.

Entre tanto, el curso de los acontecimientos seguía su rumbo. Tal y como se indicó, cumplir lo firmado, resultaba difícil. Los ejemplos no faltaron. Boyacá será uno de ellos. Para el gobernador, la aplicación en esta zona, sobre gobiernos de cruce, no tendría por qué ser igual que en el resto del país. Según él: "A cada partido le daré lo que le corresponda en razón de los efectivos humanos ... El liberalismo en Boyacá es una minoría, así como en el Tolima el conservatismo es minoría ..." (88). En parecidas circunstancias aparecían los departamentos de Tolima y los Santanderes.

Si ésta era la situación a nivel departamental, los municipios, también eran partícipes. El concejo de Medellín, hubo de afrontar la polémica desatada por la pugna de los puestos municipales. La prensa conservadora culpaba al liberalismo de estar tras ello (89).

En vista de esto, las directrices partidarias fueron radicalizándose. La virulencia verbal aumentaba. Desde los partidos, las facciones llamadas de "guerra", asentaban sus criterios, (prácticamente intransigentes), en oposición a las de "paz" (90). La temática empleada resultaba poco variable. Para los conservadores, la unión liberal-comunista, no tenía dudas. Los liberales, por su parte, entendían que los conservadores y falangistas, en nada se diferenciaban. Así las cosas, la crisis de gobierno se fue agudizando, la presencia de Echandía pareció hacerse incómoda, los representantes conservadores tratarán de agudizarla.

Inicialmente, *El Colombiano* daba su explicación sobre las dificultades que el país atravesaba. Para ellos: " El señor Echandía, como ministro de gobierno encargado por la ley y por la costumbre de vigilar el orden público, tiene no escasa culpa en la actual zozobra que experimenta el país ... " (91).

La respuesta liberal la dió Lleras Restrepo. A su juicio "el conservatismo quiere extremar la violencia para conquistar un triunfo electoral al que no tiene derecho porque es minoría" (92). Entre tanto, la propia dinámica del momento ofrecía hechos propicios para la disputa.

El nombramiento de nuevos gobernadores, para los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santanderes y Tolima, trajo renovadas discordias. Las críticas por no cumplir lo estipulado en materia de renovación policial, como por ejemplo en Cundinamarca, habría de traer consigo agrias diferencias entre el gobernador y el jefe de las fuerzas policiales (93).

Los comunistas, tampoco escapaban del encrespado ambiente. Conocidas las acusaciones conservadoras sobre ellos; no sólo por sus afinidades con el liberalismo, sino por el ambiente del momento, responden a las críticas y señalan como inductores a todos aquellos "que traicionan los intereses nacionales" (94).

Sorprendentemente, la respuesta recibida no admite discusión. La prensa liberal y conservadora, separada por otros temas, responde unánime. Es más, advertirán de los peligros que, para ellos, constituía la presencia en los sindicatos de militantes comunistas. Lo que en tiempos pasados era conocido, se tornó en algo incómodo (95).

Ahora bien, la intransigencia, actitud que difícilmente parecían estar dispuestos a abandonar ambos partidos mayoritarios, volvió a dar un nuevo aviso. En este caso, el entorpecimiento de las

labores gubernativas era claro. Dos gobernadores, los conservadores de Boyacá y Nariño, se niegan a dar respuesta a la carta enviada por Echandía (96). Ospina nada responde. La fidelidad a Gómez, en cuanto a enfrentamiento con el liberalismo, parece tener respuesta (97).

Sus partidarios, no satisfechos con haber evitado la correspondencia, dudan de la vigencia del gobierno de Unión Nacional y la política de cruce. En el Cauca, declararán: "El actual sistema de gobierno de Unión Nacional y de cruce solo ha servido para acrecentar el caos que vive Colombia, que reclama la revisión activa" (98).

Vistos los hechos, el presidente trata de salvar la situación con la defensa de su propuesta de gobierno. Para demostrarlo, sabidas las dificultades del registrador en el desarrollo de la labor encomendada, le ofrece apoyo, y de paso pide a "Los registradores electorales, cualquiera que sea su filiación política, no pueden obrar como miembros de una facción sino depositarios de la República" (99).

Por parte liberal, mientras, comprobada la rentabilidad que la utilización del difunto dirigente les podía dar, pasan, con los renovados responsables del partido ahora convertidos en defensores del mensaje gaitanista, a plantear también las exigencias que consideraban oportunas.

Quejosos por las actuaciones parciales que ciertos gobernadores tomaban sobre política de cruce, e inquietos ante la Violencia detectada en municipios de Boyacá, Nariño, etc, piden a Ospina tener el control, donde el indicado cruce no se cumpliera, para la selección de secretarios departamentales. Es más, como única forma de evitar lo anterior, exigían la supervisión del Ejército en las zonas de votación, sin olvidar, la renuncia del coronel Rojas Pinilla, al considerar que el entonces jefe de la guarnición de Cali, no cumplía las órdenes gubernativas en materia de libertad de expresión (100).

Entre tanto, las denuncias de asaltos violentos a poblaciones de Boyacá, donde los liberales pedirán medidas especiales, Santanderes etc, proseguían. Ante tal continuidad, las directivas de ambos partidos deciden, en abril, ofrecer una imagen de paz. Desde el partido Liberal, por ejemplo, haciendo mención al cercano debate electoral, y entendiendo que de celebrarse habrían de evitar: " ... un triunfo obtenido con violación de los derechos de sus adversarios ... " (101), harán votos para lograr el necesario perfeccionamiento democrático que el país necesita.

Los buenos propósitos, no obstante, pronto desaparecieron. Que las reseñadas exigencias, planteadas desde las dos formaciones, y en concreto la liberal, resultasen desestimadas por Ospina, fueron la causa. La no aceptación, ya por considerarlas carentes de sentido, o de difícil cumplimiento al creer que las bases conservadoras las boicotearían -deseosas de deshacerse de los circunstanciales compañeros de gabinete-, traen el definitivo abandono de los liberales del gobierno.

La renuncia es firme, las posibilidades de diálogo, que parecían descubrirse en el fallido acuerdo de abril, habían fracasado. Por primera vez, los militares, a excepción del ministro de Guerra, entraban a formar parte del gobierno conservador. Las nuevas incorporaciones serán en los ministerios de Gobierno y Justicia. En los medios de prensa afines, el reto que planteaba un gobierno homogéneo, se traduciría en la consolidación o no de la paz nacional (102). Por contra lo que para ellos era tranquilidad, en el partido contrario, la falta de apoyo al gobierno de Unión Nacional por parte de alguno de sus miembros, sospechaban de Andrade, mantenía las distancias.

Pero, serán las preocupaciones electorales y en concreto los comicios de mayo, los que, pasada la situación anterior, constituyan un importante reto ante el cual las formaciones políticas debían responder.

Para los liberales, donde el indicado recurso a la figura de Gaitán y del siglo pasado eran una constante, era importante también trabajar con el electorado urbano. Este, en opinión de aquéllos, que estaba formado en algunos casos por desplazados de la Violencia, aumentaban a su juicio, las posibilidades de voto.

Los conservadores, por su parte, incidían en las conexiones comunistas del liberalismo, fundamentados para ellos de forma inequívoca tras el nueve de abril, y en los enfrentamientos, para explicar la situación de entonces, que los partidos tuvieron durante el siglo pasado.

Otros sectores, que como el eclesial tenían peso específico en la realidad nacional, no quedaron ajenos. Así, tal y como ocurrió en los 40, con motivo del Concordato, el obispo Builes, daba cuenta de las incompatibilidades existentes entre cristianismo y liberalismo. En tono conciliador el arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, pidió moderación en los consejos sobre el voto. Si bien recordaba: " ... no olvidar la distinción entre errores condenados por la Iglesia en el liberalismo y distinción entre liberalismo doctrinario y el liberalismo puramente político ..." (103). La reacción liberal fue rápida. La intromisión eclesial no gustó.

Mientras, las elecciones venideras presentaban renovadas esperanzas para los candidatos. Cada partido pensaba, cuando menos, mantener la mayoría, o romper la superioridad del contrario en aquellos estamentos no controlados. Sabían que, si lograban conseguirlo, todo el aparato del Estado iría a pasar a manos del ganador. La exclusión, aunque pensable, resultaba difícil de asumir.

Las ventajas que se deribaban de tal privilegio, profesionales o simplemente de relación, hacían apetecible el esfuerzo. Las pugnas, que por tal motivo, tenían como preludio toda elección, dejaban entrever de forma diáfana, la falta de un sistema político, que guardaba el formulismo democrático, pero que no estaba acostumbrado a soportar los resultados de la competencia.

Al igual que en ocasiones anteriores, la legación española en Bogotá, enviaría un informe sobre los comicios. Desde ella, las bases sobre las cuales tenía que plantearse la pugna electoral eran:

" -Planteamiento de lucha- Sabe muy bien que el conservadurismo, que es muy difícil, -aunque se diera conjuntamente el mayor número de circunstancias favorables-, que la diferencia de 15 representantes, que hoy ostenta la Cámara en favor del partido Liberal, pudiera saldarse en las próximas elecciones en su beneficio ... Todo el interés de la contienda estriba, en la posibilidad de que, el partido Conservador arranque al liberal de cinco a ocho puestos en la Cámara de Representantes ... Según los cálculos conservadores, los cinco representantes, más a su favor son de fácil logro, por el incremento de votos que piensan alcanzar en los Departamentos de Boyacá, Caldas, Antioquia y Santander ... " (104).

La opinión del diplomático, no parecía equivocada. Antes de las elecciones, dado el continuo enfrentamiento vivido en el campo colombiano, se llegó a plantear, como solución, un golpe de Estado. Ospina, tratando de mantener el equilibrio, no sólo manifestaba, el decidido empeño en respetar los resultados, sino también, la vocación civilista del Ejército (105).

Como era de esperar, las elecciones tuvieron lugar el 5 de junio. Los intentos conservadores por desplazar la mayoría liberal en Asambleas Departamentales y Cámara de Representantes, fallaron

por poco. En votos totales, 914.005 fueron liberales; por 791.914 conservadores. La participación fue alta. Para el Congreso, los liberales consiguieron 69 escaños, por 63 conservadores. En el Senado, 34 escaños para el primero, 29 los segundos.

Finalizados los comicios, las directivas partidarias se apresuran a manifestar su satisfacción por los resultados obtenidos. Así, Laureano Gómez, contento por el avance obtenido, manifiesta desde España que:

" ... Colombia no tiene más que un camino y ese es el nuestro ... El partido Conservador encarna todo lo que hay de futuro y de historia en la política colombiana. A nuestro propósito de restaurar la grandeza nacional sólo se oponen las fuerzas de la disolución. Nuestro deber es convencerlas o vencerlas ... " (106).

Por contra, Lleras como representante liberal, no menos contento que el anterior, decía:

" ... Es interesante observar cómo el partido Liberal a pesar de haber perdido algunos curules .. considera haber logrado un gran triunfo ... Y el conservatismo que trata de consolar a sus parciales con la decepción del avance que obtuvo, no puede ocultar su convicción profunda de que los comicios pasados señalaron el límite máximo de su esfuerzo ... " (107).

Pasadas las elecciones, los acontecimientos venideros traerán nuevas discordias. Las acusaciones de fraude, en un sentido o en otro continúan. En Boyacá, el gobernador, se quejaba ante el Directorio conservador por no haber evitado el triunfo liberal (108). Días después, Laureano Gómez regresa al país. Como fecha de llegada, el 25 de junio, Sagrado Corazón, patrón de Colombia. El mensaje, acorde con el momento dirá: "En tiempos misioneros como los que vivimos ahora, la responsabilidad individual renace ante la historia" (109). Los comicios presidenciales, fechados para el 50, hacían que los partidos

se apresurasen a nombrar sus candidatos. La elección estaba prácticamente decidida. Laureano Gómez, y Darío Echandía, serán los escogidos.

Las actividades políticas, entre tanto, seguían como cada año. La apertura de las Cámaras sería en julio. Realizados los correspondientes nombramientos, habría que asistir a un año más de mayoría liberal. Estos, conocedores de ello, preparaban el camino para recuperar su presencia al frente del Ejecutivo. Por contra los conservadores, contentos con el empuje logrado, esperaban romper la mayoría contraria, y así ver realizadas sus propuestas gubernamentales.

Las primeras sesiones, servirían de termómetro político. Primeramente, se dicta el decreto 2135 de 18 de julio, por el cual reorganizaban la policía. Los conservadores estaban contentos. Dicho estamento estaría bajo control presidencial. A continuación, aprobaron la creación de jueces de Instrucción Criminal, no aceptando las objeciones planteadas por el Ejecutivo. Finalmente, como punto de discordia, los parlamentarios liberales, anteriormente condescendientes con la Ley 89 de 1948 -según la cual las elecciones presidenciales serían en 1950-, rectifican sus palabras y deciden proponer al Congreso la celebración de éstas en noviembre del presente año. Igualmente, por tal motivo, las actividades de cedulação, y elaboración del nuevo censo electoral quedarían retrasadas.

Realizada la propuesta, ambas formaciones plantean sus argumentos. Los conservadores, que la llamaban "contrarreforma", exigen que en caso de ser aprobada, se haga con los votos de las dos terceras partes del Congreso. Según ellos, se trataba de un Código y no de una Ley, para lo cual resultaba imprescindible tal votación. Por

contra los liberales, al defender que era una Ley, esgrimían que la mayoría simple bastaba.

Hasta llegar a la aprobación final, hubo de superar distintos pasos. Primeramente, fue tildada de inconstitucional por el conservador Ramírez Moreno. A continuación, sus defensores tuvieron que soportar una sonora pita en el hemiciclo. Posteriormente, el entonces ministro de Gobierno, Coronel Régulo Gaitán, sugirió a los congresistas "un patriótico llamamiento ... para que en atención a las razones expuestas, mediten la conveniencia de revisar la aceptación de ésta última ..." (110).

Con todo, la reforma es aceptada. Ospina vetó tal disposición. Los tribunales de justicia tenían la palabra. Entre tanto la virulencia verbal seguía incrementándose. Los conservadores, reacios a cualquier proposición liberal, hacen un llamamiento para la defensa de las instituciones, en contraste con la "conducta subversiva de la Cámara de representantes" (111). La Corte Suprema, meses después emite fallo. Este resulta favorable a la propuesta liberal.

Mientras tanto, las noticias de enfrentamientos armados, acaecidas en distintas zonas del país, que tenían como destinatarios sectores campesinos, más allá de la identificación política de cada uno, preocuparon a los responsables de ambas formaciones. Estos, como ya era pauta habitual, decidieron lanzar una nueva campaña pro paz. Las intenciones, pronto se vieron empeñadas, el Congreso, iba a ser escenario de un enfrentamiento armado. En éste, resultará muerto un representante liberal. Dando muestras de sorprendente tranquilidad, las directivas políticas, deciden con todo, pedir calma al país, y proseguir con el diálogo.

Para Lleras, como presidente del Directorio Liberal, la gravedad del hecho, no había por qué ocultarla. Aún así, desde su

punto de vista: " ... Tan decidida era nuestra voluntad de trabajar por la concordia nacional, que ni siquiera el trágico suceso a que he hecho referencia, fue invocado por nosotros para suspender o declarar rotas las negociaciones ... " (112).

Politicamente, el enfrentamiento estaba fuera de dudas. La extensión de éste, al resto del espectro nacional no tardaría en llegar. El sindicalismo, y en concreto la CTC, sería la afectada. Para el gobierno Ospina, las actuaciones pasadas por parte del sindicato, pese a su actual debilidad, no eran agradables. La legislación, les impedía hacer cualquier tipo de declaración sobre temas considerados como políticos. Con todo, la central, visto el curso que tomaban los acontecimientos, decide dar su opinión sobre éstos. El comunicado sirve como disculpa. Desde el gobierno piden la suspensión jurídica para la central (113).

Los medios de prensa, según el signo mantendrán opiniones dispares. Para *El Siglo*, la decisión es motivo de alegría. Tildará a la central como: " organización cripto-comunista en ella, se originan las más graves perturbaciones sociales y políticas porque ha estado permanentemente atenta a las consignas internacionales de los enemigos de la patria.". (114). Por su parte, *El Tiempo*, una vez rechazada la decisión, considera: "terriblemente injusto señalar a la organización de los trabajadores como un centro peligroso de agitación destructora" (115).

Perdida la personería de la CTC, la que hasta ahora no había contado con ella, UTC, logrará desarrollar sus actividades sindicales. La declarada apoliticidad serviría como garantía. El apoyo que recibía desde medios empresariales y eclesiales, hacían recobrar la tranquilidad en los sectores oficiales.

Si estos eran los hechos que se debatían en el ambiente político, desde el gabinete, toda vez que logran apartar al sindicato

molesto, consideran necesario profundizar sus líneas de acción. La primera oportunidad, presentada la renuncia de los ministros militares, es aprovechada. El nombramiento del laureanista Andrade para la cartera de Gobierno, viene a corroborarlo.

El ministro, que como primera medida procede a la sustitución de seis gobernadores, provoca las iras de los liberales. Para éstos los recién llegados, no sólo serán "seis nuevos perturbadores departamentales" (116), sino que también, visto el comportamiento de aquél, y sabida la mayoría que disponían en el Congreso, optan por forzar la maquinaria legislativa.

La presentación de diversos proyectos, que bajo el nombre de "heroícos" abarcarán a la policía, cedulação electoral, radiodifusión y universidad, será la forma (117). Con éstos, que buscaban mantener abierta la beligerancia del Congreso hacia el Ejecutivo, los dos partidos corrían, dadas las continuas dudas sobre su legitimidad para hacer la mencionada presentación, el peligro de llegar a la ruptura del sistema. Los primeros síntomas, anunciada la sentencia que aprobaba el adelantamiento de las elecciones, parecían asomar.

Al conocer el fallo, octubre del 49, las críticas procedentes del partido Conservador, no se hicieron esperar. Según ellos la Corte Suprema "había caído en la órbita de la política" (118). La propia composición de ésta, seis magistrados liberales y cuatro conservadores, hizo pensar que la sentencia había sido realizada sobre criterios partidistas y no legales.

Con todo, los comicios presidenciales de noviembre estaban cercanos. Darío Echandía y Laureano Gómez serían los candidatos. La elección de éstos, resultaba altamente significativa. Pues, si en el bando conservador, la figura carismática de Gómez

superaba cualquier duda, en el liberal, Echandía era medianamente aceptado. Desde la legación española, días antes de producirse el cierre del Congreso, la opinión que éstos les merecían era:

" ... Por una parte Laureano Gómez, a quien su estancia en España le ha arrancado casi los últimos rescoldos de sus fervores demo-liberales, es un convencido partidario de la dictadura, que ha aconsejado, tanto privada como públicamente, como único medio para cortar la anarquización colombiana .. Por la otra, Darío Echandía, es el clásico intelectual a quien el liberalismo presenta como candidato para aparecer como un partido de orden, pero al que una vez triunfante no le sería fácil contener el embate del ala izquierda de sus electores ... " (119).

Así las cosas, los mensajes electorales pasaron a un primer plano. Los liberales, por ejemplo, padeciendo un síndrome cuasi persecutorio, acusaban al gobierno de usar, no sólo el fraude y la Violencia, como instrumentos para romper su mayoría, sino también de retomar el problema religioso. Este, creían, fruto de la barbarie conservadora, debería ser combatido con la razón y la libertad, no desestimando, si los hechos así lo exigían, al igual que en el XIX, el uso de la fuerza (120).

En cambio, los conservadores, con un lenguaje cercano al de cruzados que utilizaba la identificación católica, incidían, de una parte, en la unión liberal-comunista, y de otra decían estar dispuestos a "Salvar la patria de la rutina que la extingue", pues una reglamentación social fuerte solucionaría el caos (121).

Si las argumentaciones políticas eran contundentes, en no menor medida fueron los actos que habrán de suceder. Las directivas, empleando términos como "sabotaje" o "batalla definitiva" para referirse a la situación de entonces, contribuían a aumentar la tensión. Los seguidores de aquéllas, aparte de ser los primeros

afectados por la Violencia, veían cómo cualquier intento por alcanzar un punto de encuentro se perdía. El plan de Echandía, que contemplaba el retraso de las elecciones y un gobierno compartido durante el mandato 50-54, es desestimado por Gómez. Su confianza en el triunfo conservador, le impedía aceptarlo (122).

A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan. El 21 de octubre con la policía como principal sospechosa de ser la causante, hay 24 muertos y 70 heridos. Dos días después, el Registrador General de la República, expresaba que, dado el clima de Violencia y la falta de independencia en la cedulación, creía que "En estas condiciones yo no puedo declararle al país que el proceso electoral haya sido normal y dudo que las elecciones de 27 de noviembre sean la expresión auténtica de la voluntad popular" (123). El 24, el gobierno, dirige una consulta al Consejo de Estado sobre declaración de estado de sitio. El Consejo la niega, al entender que la Violencia procede de las autoridades (124).

Sin embargo, será el 28 cuando Lleras Restrepo como jefe del partido, con la retirada de Alfonso López y demás representantes liberales de la Corte Electoral, haga un llamamiento "a todos los liberales que forman parte de los organismos electorales ... que abandonen inmediatamente sus puestos. Ningún liberal digno de ese nombre puede cohonestar con su presencia la farsa criminal del 27 de noviembre" (125).

La separación esta consumada. A pesar de todo, los liberales, buscando una última oportunidad, deseaban que Ospina compareciera ante el Congreso. La razón, exigirle responsabilidades penales, por los hechos cometidos. La reacción presidencial será rápida.

El 9 de noviembre, el presidente, al considerar turbado el orden público, dicta el decreto 3518. En él, queda establecido el

estado de sitio, cerrado el Congreso, impuesta la censura de prensa, modificada la Corte Suprema de Justicia y por último, la concesión, a los gobernadores, de poderes extraordinarios en materia de orden público.

Con esta medida, el autogolpe de estado, estaba dado. A él se había llegado tras una larga confusión entre lo jurídico y lo político. La crisis del sistema político, defendido desde ambos partidos, tocaba fondo. Ospina, y su estrategia de reconciliación, estaban superadas. Tras este día, los laureanistas estarán ampliamente agradecidos al presidente.

Este, desde sus primeros momentos, perseguía lo imposible. Unir en un mismo gobierno a dos partidos, que en la práctica interna estaban separados. Los liberales, esperando la recuperación de los frentes populares de tiempos lopistas, aparecían enfrentados al sector oligárquico del partido. Los oponentes, intentando conjuntar las teorías decimonónicas en materia económica, de otra parte, ofrecían una revolución nacional mediante la transformación del Estado.

Como resultado, la práctica guerra civil. El número de personas afectado por ella, llegaba a 18.519 (126). Las bases de concordia, no existían. Los frágiles principios de pluralismo político, no contaban. La pugna por el poder, incluyendo al enfrentamiento institucional, había sido intensa. Cualquier posibilidad de acuerdo, si alguna vez la hubo, dado el grado de desconfianza reinante, parecían carecer ya de sentido.

Algunos esperaron, sin conseguirlo, respuesta desde el interior del Estado. En algún momento se pensó en el Ejército. Este dividido por la dinámica partidista, fiel por imperativo, a la orientación civilista, asistía expectante a lo que ocurría. La

intervención será posterior. Mientras, el orden dictado desde el partido Conservador imponía sus pautas.

Lograda la retirada de los liberales, la realización del programa conservador, quedaba más libre. Los anunciados comicios, dieron la pauta. Con el voto exclusivamente conservador Gómez, al igual que López en los 30, conseguirá la presidencia sin opositor alguno. Los anhelos conservadores, haciendo del Estado un órgano a conveniencia, iban a ser logrados. Las acciones emprendidas en ese sentido, intentarían ponerlo en práctica.

2.1.2. Las relaciones Iglesia-Estado.

Respondiendo a la confianza depositada por distintos sectores eclesiásticos, el nombramiento de Mariano Ospina, hizo concebir nuevas esperanzas sobre la forma y el contenido que las relaciones Iglesia-Estado habrían de tener.

La procedencia del nuevo presidente, al contrario que sus predecesores, presagiaba nuevos rumbos. Para este antioqueño de formación jesuítica, comentar en la *Revista Javeriana* de las Encíclicas papales sobre el trabajo, conservador por herencia y vida, las indicadas relaciones habrían de ser cordiales con la cúpula eclesial.

Esta, habrá de afrontar la existencia de criterios diversos cuando era necesario tratar con los liberales. Por una parte, el obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel A. Builes, fiel a sus opiniones pasadas, no dudaba en condenarlo. De otra, Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, deseaba la línea de concordia. Ambas posiciones tendrán oportunidad de expresarse durante la presidencia de Ospina.

Así, aquello que en mandatos anteriores resultaba enfrentamiento, ahora traía aires de recuperación. En algunos

sectores conservadores, si bien eran conscientes de la identificación con los ideales eclesiásticos, en igual medida existían miembros que deseaban desprenderse de ésta. Sin embargo, la realidad política les hizo desistir. La población colombiana, todavía mayoritariamente rural, donde el sacerdote era una valiosa autoridad local, hizo pensar en la importancia de la cooperación con la Iglesia, teniendo como añadidura un activo medio de movilización popular (127).

Desde el clero, y aprovechando el momento, ciertos sectores eclesiales, volvieron a tratar temas que con anterioridad habían sido tildados como interferencias. Es por ello que Builes, en 1947, atacando la pedagogía liberal, centrará sus acusaciones sobre puntos que irán desde los centros mixtos hasta la existencia de colegios protestantes (128).

En el mismo año, y desde los distintos medios de prensa católica, uniéndose al ambiente favorable, recuperando la temática anterior, aparecerán artículos sobre la Iglesia Católica en Colombia y su comparación con el mundo cristiano. La identificación de los enemigos será la misma. El protestantismo, que con sus sectas, "encuentra sus adeptos entre las masas populares y menos cultivadas" y el comunismo "que no ha podido prender en Colombia" (129).

El enrarecido medio político, con la Violencia como fruto, afectará con igual intensidad a la Iglesia durante el 48. Desde su interior, las proclamas en contra del comunismo, constituían el eje de los mensajes. La proximidad de éstos, con los esgrimidos desde la formación conservadora, establecieron una fatal co-identificación en el venidero 9 de abril.

2.1.2.1. La Iglesia y el 9 de abril.

Así pues, la señalada concordancia con el orden, representada no sólo por el conservadurismo, sino también, desde la Iglesia como defensora de aquél, fue tomada como provocación el día del máximo desorden. Diversos centros religiosos, nunciatura, palacio arzobispal, miembros del clero, etc, sufrieron los efectos del día.

Afectados por el hecho, los obispos redactan una pastoral colectiva. En ella, y coincidiendo sus argumentos con los conservadores, señalarán al ateísmo como causante del mismo, siendo los autores materiales los comunistas. Según los obispos, la causas serán dispersas. Aquello no fue con intención única de herir al pueblo colombiano; la propoganda anticatólica, unida a una inmoderada exaltación de las pasiones en forma de lucha política, configuraron las bases que tuvieron como fruto tan fatal acontecimiento (130).

El 9 de abril, marcó las posiciones que el episcopado tomaría ante la política nacional. Por ello, dos meses después, la pastoral colectiva de 29 de junio, analizando lo ocurrido, tendrá tres recomendaciones. La primera y en referencia al comunismo, hablará de él como "intrínsecamente perverso", advirtiendo del antagonismo entre éste y el cristianismo. A continuación, y en oposición a tales enseñanzas, la doctrina social de la Iglesia Católica "única que puede resolver los problemas sociales y conflictos entre el capital y el trabajo". Y tercera, el liberalismo, cuyos errores doctrinales, como son la educación laica y su aprobación de la libertad de cultos, eran criticadas por las enseñanzas de la Iglesia (131).

Sin embargo, algunos obispos como Crisanto Luque, de Tunja; Gerardo Martínez, de Garzón, y Builes, de Santa Rosa de Osos,

creyendo que las advertencias sobre el último punto, no eran suficientes, deciden hacerlas más explícitas. Así para este último, lo acontecido en abril, lejos de ser obra del comunismo, algo difícil dado su tamaño, tuvo como autores materiales e intelectuales a los liberales (132).

Igualmente, los artículos de prensa católica, reflejarán este cambio. Una vez que la pastoral es difundida, *Revista Javeriana*, publicará artículos que irán desde "La Iglesia Católica y la nacionalidad colombiana" (133), pasando por "Estudio del liberalismo" de Monseñor Rafael Maria Carrasquilla, (cuya primera edición era de 1913), del cual se obtienen puntos tan significativos como "Del liberalismo condenado por la Iglesia" o "Errores acerca de la Iglesia y sus Relaciones con el Estado" etc (134), hasta llegar al último número del año, en el que Eduardo Ospina escribe sobre "Diez años de vida católica en Colombia" (135).

La continuidad de éstos llega hasta el año 49. Como si de un deseo se tratara, la publicación jesuítica, hablará de "Un Estado católico moderno" en una referencia al régimen español del momento, destacando la "Legislación Religiosa del Nuevo Estado Español" (136). Junto a éste, el encarcelamiento sufrido por Mindsentzy, fue seguido puntualmente a lo largo del año. Con ellos buscaban resaltar, de un lado la identidad de estado católico, y de otra las atrocidades del comunismo (137).

Así las cosas, las oportunidades que se ofrecían para identificar, gobierno católico con el conservadurismo eran ampliamente aprovechadas. La celebración del Congreso Eucarístico de Cali, fue empleado por los líderes conservadores en este sentido. Con todo la situación de Violencia, ante la cual la Iglesia sólo había reaccionado de forma oficial en el nueve de abril, continuaba.

Conocida la ofensiva clerical, los liberales decidieron no quedarse atrás. Sus mensajes irán, desde acusar a los dominicos de Boyacá por distribuir retratos de Franco, hasta que determinados clérigos habían ofrecido la salvación eterna a todos aquellos que mataran liberales (138).

El caso fue, que dado el creciente ambiente de acusación política-religiosa, despertado con mucho agrado por la corriente laureanista, los liberales, sabedores de la estrategia, aprovecharon a Lleras para hacerle frente. Este, conocedor de la utilización del "problema religioso" tan usual para los conservadores, decide mostrar abiertamente la postura liberal. Según Lleras, el partido Conservador ante la proximidad de las elecciones de junio, quería " ... sacrificar las conveniencias de la religión y del país en aras de intereses políticos, que querían como quieren ahora, tener en el clero un aliado para sus campañas electorales ... " (139).

La referida campaña, volvió a desatar pasiones y no sólo políticas. Ante los ejemplos señalados, Perdomo decide prohibir a los sacerdotes la participación en reuniones conservadoras. El Espiscopado, que estaba dividido por las acciones de algunos de sus miembros, creyó necesario tomar posición clara con respecto a la Violencia.

Será en octubre del 49, cuando mediante una pastoral colectiva, en una exortación a la paz, pidieran "deponer odios y cancelar resentimientos y propósitos de venganza; a emprender una cruzada persistente en favor de la paz y la armonía entre todos los ciudadanos" (140).

La declaración de intenciones fue acogida, sin embargo, su influencia resultó mínima. Las razones no eran ajenas a la propia Iglesia. Ciertos prelados, con Builes al frente, fieles a los patrones del siglo pasado, identificaban conservador con católico. Ante ello, pese a

la aceptación tácita por parte de los liberales, demostrada en la candidatura de Echandía, el cual no cuestionaba la posición de la Iglesia en la sociedad colombiana (141), traía en contrapartida, los síntomas de anticlericalismo resultantes de la señalada identificación. Así las cosas, la retirada del liberalismo ante las elecciones de noviembre, trajo no sólo, la disminución de la propaganda político religiosa, sino también de la eclesiástica.

2.1.2. El Estado y las Fuerzas Armadas.

El nuevo gobierno trajo consigo un cambio en la forma de actuar respecto a este punto. El presidente, consciente de la importancia de mantener relaciones fluidas con los militares, buscará atender sus necesidades. Los incrementos salariales y la extensión del seguro social, sin olvidar una propuesta de mejorar las pensiones a las viudas, incluyendo un plan de viviendas, serán algunos de los aspectos que preocupen al gobierno Ospina (142).

Por contra, la policía, como elemento armado, adscrito al ministerio de Guerra, se convertirá en escenario de fuertes pugnas. De una parte, los liberales, dominadores de ésta desde el inicio del mandato liberal, acusaban a los conservadores de utilizarla en su contra. De otra, éstos, deseosos de poder contar con un aparato, que debido a la pujante urbanización del país adquiriría mayor importancia, acusaban a los primeros de utilizarla a su antojo, rechazando plenamente las acusaciones.

Los acontecimientos políticos, con la indicada virulencia que los caracterizaron, propiciaron el empleo del Ejército para labores de orden público. Así a finales del 46, doscientos dos alcaldes militares, fueron destinados a distintos lugares del país. Eran

prácticamente un cuarto del total. Las poblaciones elegidas iban desde Boyacá, con 46 alcaldes, hasta los Santanderes, con 31 alcaldes (143).

Con el empleo de éstos, Ospina creía encontrar un camino intermedio mediante el cual el traspaso de poder, al estar ahora regentado por un militar, sirviera de tregua al encrespado ambiente. Junto a ello, la lealtad militar, aparecía reforzada. Ocupar cargos de responsabilidad, tenía sus ventajas. Los ascensos se hicieron efectivos, el fantasma de tiempos lopistas y sus arbitrariedades desaparecían; la tan nombrada neutralidad parecía cuestionarse, ahora eran vistos como pro-conservadores.

Al año siguiente, y debido al clima de tensión social que vivió el país, el gobierno creyó necesaria la utilización del Ejército. En mayo, con ocasión de la huelga que afectó al transporte, las tropas se hacen cargo de éste. Meses después, sirviendo como marco la apertura del Congreso, Ospina anunciará aumentos presupuestarios al ministerio de Guerra. Las asignaciones pasan del 10,4% en 1946, al 13,5% del 47. Asimismo, primero mediante la Ley 82 referida a educación, y después la Ley 100 sobre vivienda, junto con la llegada de una misión estadounidense, serán un punto más de interés (144).

Llegados al 48, lo que en años anteriores fueron pequeñas muestras de utilización, a partir de éste, se convertirán en constante. Ya en el mes de enero, es nombrado como gobernador (civil y militar), de Santander Norte, el general Gustavo Matamoros. Con ello, Ospina confiaba apaciguar los ánimos en tan conflictiva zona.

2.1.3.1. Las Fuerzas Armadas durante y después del 9 de abril.

Los hechos que siguieron al asesinato de Gaitán, resultaron esclarecedores. Los conservadores, máximos críticos de la policía por considerarla liberal, comprueban cómo grupos de ésta entregan armas a los rebeldes. Las peticiones de aquéllos, amparadas en la presencia comunista, presionan para conseguir una reforma policial.

Como resultado, los cambios fueron rápidos. La policía bogotana fue disuelta. Para reemplazarla se utilizan antiguos miembros de la policía militar y detectives vestidos de civil. El reclutamiento, efectuado en diversos departamentos resultó sectario. Zonas como Boyacá, donde la Violencia afectaba particularmente a los liberales, escogieron campesinos de poblaciones conservadoras. Para darle un aire de profesionalidad, emplearon misiones británicas y chilenas. Los informes elaborados por éstas no fueron conocidos. Las acusaciones de emplear policías en contra de los liberales aumentaron. Posteriormente, en noviembre, mediante la Ley 93 de 1948, se aprueban, ante la oposición liberal, facultades extraordinarias para que el presidente pueda reorganizar la Policía Nacional (145).

Tales eran los hechos que afectaban a la policía. Las Fuerzas Armadas, una vez demostrada su lealtad, donde en la discutida apertura del Congreso de julio, Ospina hablaba de "gloriosa actuación de las Fuerzas Militares" (146), debe superar las proposiciones de Gómez, que "en la noche del 9 de abril quien habiéndose refugiado en el Ministerio de la Guerra, trató de convencer al Presidente y a los Generales de la necesidad de un golpe militar" (147).

El presidente, contando con la ayuda liberal, recupera de una parte, el gobierno de coalición y de otra despeja las dudas sobre una junta militar. Nombrando al general Germán Ocampo, como ministro de Guerra, para quien en memoria presentada al Congreso, definía escuetamente como "nefastos hechos" lo ocurrido en abril (148), satisfizo, no sólo a las autoridades civiles, sino también a las militares. Igualmente los detenidos durante la revuelta serán juzgados por tribunales militares. Para el nuevo ministro, dado que el prestigio militar podría verse afectado, resultaba desagradable.

Junto a éste, otros militares acompañarán al anterior en labores de gobierno. Los departamentos de Tolima, Santander y Boyacá, tendrán gobernadores militares; un coronel Régulo Gaitán, será el encargado de la nueva policía (149) Con ello, buscaban dar paso al señalado punto intermedio. Sin embargo, la falta de apoyo social, junto al enrarecido medio político del país, ofrecía más distancias que cohesión. En algunos casos, los nuevos gobernadores se envolvieron del virulento ambiente. Acuerdos políticos, como el firmado sobre gobiernos de cruce, en Boyacá, no fueron respetados. El gobernador tuvo que dimitir.

Así las cosas, los rumores sobre un posible golpe de estado, como había pasado en Venezuela y Perú, parecían tomar consistencia. Es por ello, que desde la legación española comentasen:

" ... A partir de ese momento (9 de abril), no se ha descartado nunca del todo -por unos o por otros- la posibilidad de este evento. Pero es cierto que parece poco probable, ya que no pocos generales que inspiren confianza total a los conservadores, acaso de modo completo tan sólo el General Sánchez Amaya, buen amigo de España y gran admirador del Generalísimo Franco, que propugnan el Golpe. Por su parte, los liberales -

a los que deben la mayoría de los generales su carrera- hacen lo posible por aquietar estos vientos ... " (150).

En igual forma, las relaciones, que ya de por sí parecían seguir tranquilos derroteros, el presidente se ocupará de seguir cultivándolas. La información era confirmada por los diplomáticos españoles:

" ... tanto los políticos como los grupos dirigentes del País en general, han iniciado una verdadera carrera de complacencias frente al Ejército. No hay un acto militar al que falte el Presidente de la República; los jefes del Ejército se hallan presentes en todos los sitios y antes de ayer mismo fue acordado una subida de sueldos a los jefes y oficiales del Ejército y a la Marina nacionales ... " (151).

Ya en el 49, la situación del gobierno Ospina vino a aumentar su complejidad. La Violencia, pese a los intentos realizados por detenerla, no disminuía. Los militares sabedores que una intervención directa, con la presumible división entre partidarios de uno y otro signo, traerían como consecuencia una guerra civil, observaban que, aún habiendo pasado de 10.820 hombres en 1946, a 15.060 en éste año, con el consiguiente aumento del presupuesto que llegaba al 17.7%, la situación se desbordaba (152).

La convulsión que afectaba al país, no resultaba ajena al interior del estamento militar. La forzada dimisión de Ocampo, reemplazado por Sánchez Amaya, inicia la politización del Ejército. Los oficiales sospechosos de ser liberales, son relegados (153). A todo esto, se unen las quejas que tienen al entonces jefe militar de Cali, coronel Gustavo Rojas Pinilla, como destinatario. Los liberales le acusan de impedir la difusión de su propaganda electoral. Además, las calladas diferencias debido a la contundencia policial en cómo

perseguían cualquier oposición, dibujaban un panorama difícilmente ajeno a una división (154).

Ante la retirada liberal, que afectó a todos los estamentos, el presidente, intentando dar una imagen de gobernabilidad, visto lo erosionadas que estaban las instituciones, justicia principalmente, opta por incluir militares en el gobierno. Las carteras asignadas resultan significativas. Al ministro de Guerra, general Rafael Sánchez, se unirán el coronel Régulo Gaitán en Gobierno, y el general Miguel Sanjuán en Justicia.

Estos al igual que los gobernadores, habrán de enfrentarse a la falta de apoyo popular, convirtiéndose en personas vulnerables. Los políticos, principalmente liberales, no dudaban en criticar la politización militar. Lleras Restrepo, durante un discurso pronunciado en precampaña presidencial hablará de " ... la importancia de la apoliticidad del Ejército ... donde la vida de los cuerpos armados, las promociones y los ascensos, no pueden ni deben estar influídos por razones de partido ... " (155).

Las indicadas presiones políticas sobre mandos militares, si atrás eran contenidas, ahora se hacían efectivas. A la señalada renuncia de Ocampo, provocada por los conservadores de Cundinamarca, se unirá la de Gaitán. Igualmente, la desconfianza liberal por los actos del Ejecutivo aumentaba. Para aquéllos, pese a todo, el Ejército podía ser un garante. El viaje de Amaya a los Estados Unidos, para concretar un acuerdo en materia militar, resultaba suficiente para extender el temor entre los liberales, pues Andrade ocuparía el puesto en su ausencia (156).

Acercándonos al final del mandato, previo al cierre del Congreso, las acusaciones de arbitrariedad policial (a pesar de la reorganización), continuaban. En Cartagena, ésta, hubo de ser

disuelta. El Ejército, debía sustituirla. Ante tales hechos, la división militar aumentaba. De una parte, los partidarios del colaboracionismo, veían así posibilidades de ascenso. De otra, exceptuando aquellos que en unión de componentes comunistas darían naciente forma a las guerrillas, recibían con desagrado las críticas que cuestionaban su papel como garantes de la paz interna.

Por todo ello, vistos los beneficios que la legislación ofrecía en materia de retiro, como es el Decreto N° 761 de 1949, muchos oficiales, optaban por acogerse a ella. Con la declaración del estado de sitio, cumplida buena parte de la profesionalización, observarán cómo las ingerencias políticas les impedirán jugar un papel autónomo durante el resto del mandato (157).

2.1.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.

El nuevo gobierno, superados los momentos de fuerte crisis económica, no por ello los de índole social y política, afronta la posguerra con una perspectiva esperanzadora. Al ya indicado cambio en la distribución de población, que con un pausado ritmo de urbanización, debía seguir conviviendo con el preponderante sector agrícola, pues según censo de 1945 alcanzaban el 59.9%, habrá de unírsele la deseable potenciación de la industria en su conjunto (158).

Para hacer frente a esta situación, la decisión gubernamental se cifra en conseguir una efectiva sustitución de importaciones. Al hacerlo, el Estado deberá asumir una doble perspectiva. De una parte, tendrá que aceptar la mayoritaria participación del café y del sector agrícola en general. De otra, dar salida al indicado sector industrial.

Este, que según censo de 1945, basaba su producción en los bienes de consumo, 80.7%, aparecía acompañado, a gran distancia y sujetos a la inversión externa -100 millones de dólares durante el período 1945-1950-, de los bienes intermedios, y de capital. Así, mientras para los primeros el grupo alimenticio 53,7%, venía seguido de textiles y bebidas 17.3% y 10.3% respectivamente, a los restantes, condicionados, entre otros, por la existencia de un 10.9% de maquinaria mecánica, y sólo un 2.1% eléctrica, les correspondía entre el 16% de los segundos, farmacéuticos y caucho, y el 3.3% de los últimos (159).

Si esa era la distribución de la industria nacional, la que afecta a su situación regional, polos de desarrollo en especial, también comenzaría a variar. La presencia de éstas en cuatro poblaciones Medellín, Cali, Cundinamarca y Barranquilla, junto a las zonas cafeteras de Caldas, tendría ciertos cambios. Algunas de ellas como Medellín y Barranquilla, dejarán paso a otras, que si ya estaban entre las primeras, como Cundinamarca, llegarán a concentrar mayores actividades. A esta recuperación industrial, no es extraña la agricultura. La modernización del agro, fijada en las regiones cafeteras, Tolima, Caldas, o ganaderas, Costa Atlántica, le seguían conflictos sociales, Violencia, que marcan la realidad nacional (160).

La contrapartida, sin embargo, estaría marcada por las duras condiciones salariales. El salario mínimo por ejemplo en pesos de 1953, iba de los 4,95 pesos en 1946 a 5,18 un año después, bajaba a 5, 06 en 1948 y se recuperaba en el 49 con 5,48 pesos (161). La pérdida de cohesión sindical, con los enfrentamientos entre gaitanistas, y miembros de la CTC, favoreciendo la diversidad de propuestas, ofreció a los gremios la posibilidad de imponer condiciones tan provechosas para sus intereses.

Así las cosas, gobierno y gremios, tratarán de hacer efectiva la señalada sustitución. Los bienes de consumo, de una parte, y los de carácter intermedio, de otro, constituirán una primera fase. Los primeros, con empresas de alimentación, bebidas, etc, tiene un desarrollo más dinámico. Los segundos, ante la necesidad de contar con equipos apropiados, como en la fabricación de llantas, habrá de esperar hasta mediados de los cincuenta con la fundación de Icollantas, parte con capital estadounidense, para conseguir resultados aceptables. Sin embargo, y continuando con la dependencia anterior, los bienes de capital y de consumo duradero, en el período 45-53 llegaron a descender en un 2.6%, respecto al anterior (162).

Mientras tanto, al reiterado proceso de sustitución, no le era extraña la consiguiente modernización. Los bienes industriales, al igual que el sector agrícola, donde la transformación también llegó, con el algodón, sirvieron para una doble función. De una parte, impulsaban la exportación, de otra, permitían obtener las divisas necesarias con vistas a la importación y renovación del material existente.

Paralelamente a estos cambios, el agro no permanece ajeno, ya sea por los efectos de tipo social, o económico. Así en el caso de los primeros, toda vez que la introducción de maquinaria trae la reducción de mano de obra, y la conflictividad del medio lo recomienda, el mencionado cambio se hace efectivo a través de la emigración a zonas cafeteras no afectadas o urbanas.

Los segundos, igualmente, mantenida la importancia del café como principal producto de exportación, 76.2%, quedaban respaldados por el 40.5% que el sector agropecuario suponía para el conjunto de las actividades económicas del país (163).

Ahora bien, las cifras macroeconómicas, difícilmente podían esconder ciertos contrastes. Si bien es cierto que la acumulación monetaria resultaba favorecida por el alza de los precios cafeteros, que pasaron, a excepción de un pequeño descenso en el 48, de los 24 centavos en 1946 a 45 centavos tres años después, no menos claro resultó el efecto que tuvo sobre el déficit comercial y la inflación.

La aparición del mencionado déficit, que a excepción del 49 con 70.6 millones de dólares de superavit, en el resto de los años de mandato estuvo presente, venía dado por el uso coyuntural de la bonanza (164). Esta, incrementada por la llegada masiva de divisas, y empleada en canales de inversión que buscaban un rápido beneficio -propiedad raíz-, descuidando otros como los bienes intermedios, que debían ser importados, explicaban el saldo comercial negativo (165).

En igual medida, al problema anterior habría que sumarle la inflación. La rápida acumulación de capital privado, extendible al aumento del gasto público, sin olvidar la falta de respuesta que el sector alimentario tenía ante las crecientes demandas internas, tuvo como resultado, en los años 47 y 48, fuertes tendencias alcistas. Es así como, para el sector obrero de Bogotá, el índice de precios al consumo variaba entre el 9.2% de 1946; subiendo en los dos años posteriores a 18.3% y 16.4% respectivamente, (siendo uno de los detonantes, entre otros del 9 de abril), para llegar a 1949 con un tranquilizador 6.7% (166).

La situación anterior, donde a fases de contracción, le seguían otras de expansión, con la particularidad que en estas últimas, el déficit generado provocaba desajustes en la balanza comercial, llevó a establecer un control. Este, ya fuera por decisión interna, o externa, con el Fondo Monetario Internacional al frente,

recomendaban como salidas la devaluación y la restricción de las importaciones. En cuanto a la primera, si bien había mantenido una tasa de cambio, desde 1934, en 1.75 pesos por dólar; a partir de junio del 48, aún contando con reservas en divisas suficientes, baja hasta 1.95 pesos por dólar (167).

Respecto al indicado control de importaciones, toda vez que los años 45 y 47 trajeron consigo una expansión, al terminar esta etapa; se produce desde éste, hasta el último trimestre de 1949, una reducción. Los efectos posteriores estarían marcados por la disminución en la capacidad de importación, a la cual no serían ajenas las disposiciones legales, que como la Ley 90 dictada en 1948, protegía las cuotas de absorción que debían tener los productos nacionales, al tiempo que reservaba al gobierno la capacidad de celebrar convenios con aquellos interesados en obtener licencias de importación (168).

Los controles como era de suponer levantaron críticas. Para los gremios había que respetar la cuota de interés que a cada uno le correspondía. Ante esta situación, llegó a temerse un enfrentamiento entre negociantes e importadores. Sin embargo, las críticas son medidas. Para la Federación de Comerciantes (FENALCO), las intenciones proteccionistas eran la consecuencia de una defensa destinada a nuevos sectores, privilegiados, que no respondían a la capacidad de consumo interno. A pesar de las diferencias, los industriales, no dudaban en opinar a favor de tal disposición (169).

Acercándonos a finales del mandato, la recuperación pareció llegar. Los deseos por dar salida a proyectos de tipo industrial, bajo control estatal, se cumplían. La empresa siderúrgica Paz del Río, era un ejemplo. Para llevarla a cabo hubo de superar la oposición del Banco Mundial, por no compartir la opinión de

progreso, con base en fundición de acero. Quienes sí dieron su apoyo fueron los bancos privados foráneos y los interesados industriales nacionales. Estos, estaban dispuestos a colaborar siempre y cuando, una vez que la empresa fuera rentable, pasara al sector privado (170).

La anterior no será la única. El sector petrolero, por medio de ECOPETROL pasará a formar de las empresas bajo control estatal. Hasta llegar a ello, el sindicato de la empresa, prácticamente el único activo después de la huelga de mayo del 47, conociendo que la concesión a la compañía estadounidense Tropical Oil, llegaba a su fin, presiona al gobierno para obtener la nacionalización. Esta tiene efecto. Los gremios estarán atentos. Apoyan la decisión después de haber intentado vanamente, reunir capitales privados con vistas a controlar el negocio. Los comerciantes creían necesario exigir que la nueva fuente de ingresos no se perdiera en la gestión política (171).

2.2. El gobierno de Laureano Gómez, 1950-1953.

2.2.1. El Estado y los Partidos Políticos.

La segunda administración conservadora, una vez que los liberales abandonaron cualquier participación en las labores de gobierno, comienza a funcionar según los exclusivos dictados del partido Conservador. Este, concentrará todos los poderes en el Ejecutivo. Las ramas legislativa, cerrada después del 9 de noviembre,

y la judicial, con nula presencia liberal, dibujaban un panorama uniforme en el conjunto del aparato del Estado.

Entre tanto, Laureano Gómez, que si bien en principio había expresado su intención de lograr una amplia concordia entre adversarios y partidarios, afronta, no sólo, la formación del nuevo gobierno, sino también, la conjunción de aquellos factores internos que lo hicieran posible. Para ello, deberá antes abandonar la dirección del partido, siendo elegido Gilberto Alzate Avendaño.

Así las cosas, Gómez, que ahora tenía la oportunidad de llevar adelante su proyecto, no podía, por ello, descuidar diversos aspectos. Por una parte, y al igual que ocurría en las nuevas administraciones, deberá atender a los que, con su llegada, confiaban verse favorecidos por el reparto burocrático. De otra, y no menos importante, complacer a ciertos sectores, que como los caciques locales, y el clero, mantenían un peso político nada desdeñable. A éstas, sería necesario añadir, el aumento que el enfrentamiento interpartidario -con todas y cada una de las implicaciones de orden socio-económico-, existente durante su administración; y la reorientación del discurso laureanista con respecto a los Estados Unidos.

Mientras tanto las actividades gubernamentales, con el nombramiento del nuevo gabinete por parte de Gómez, parecieron, pese a la ausencia liberal, recuperar la vitalidad. Para el presidente, con la formación de este primer gobierno, era necesario dar una imagen, aún siendo monocolor, de conciliación. Con ello, intentaba cuidar sus relaciones no sólo desde la perspectiva política, sino también, con respecto a los grupos económicos, dada su interrelación, más allá de la uniformidad política.

Será por ello que, al hacer la asignación de las carteras ministeriales, evite en principio, cualquier concesión al sector radical del partido. Ministros como Domingo Sarasty en el ministerio de Gobierno o Jorge Leyva en Obras Públicas, parecían indicar esta dirección. Fuera del gabinete, Alvaro Gómez Hurtado, hijo de Lauerano, sería el jefe lauranista en el Congreso.

La normalidad, sin embargo, que transmitía la nueva dirección conservadora, encontraba en el resto del país diversas contestaciones. Políticamente, la indicada ausencia liberal, que si en los primeros momentos del mandato gomista daba la impresión que iba a ser firme, sufre, antes de terminar el año 50, una ruptura. Ahora, no sólo era la imposición externa, sino también la división interna, la que dificulte las posibilidades de concordia.

No menos importantes, resultaban los renovados actos de Violencia que el país vivía, particularmente en zonas como Tolima, Boyacá y los Llanos orientales. En ellos, la presencia de liberales alzados en armas, junto a la de nacientes núcleos guerrilleros, venían a configurar un panorama de enfrentamiento armado de amplias dimensiones.

Así las cosas, Gómez, que si durante los meses finales del gobierno anterior había criticado abiertamente cualquier acción de los aparatos del Estado, por considerar que estaban viciados políticamente, emprende, una vez que asume todas las funciones del Ejecutivo, la "reordenación" de aquéllos.

La base sobre la cual se asientan los nuevos principios, trae consigo la recuperación de la Carta del 86. Con ello, no sólo había que poner el nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución, sino también hacer de la carrera judicial algo digno y limpio de "intrigas políticas", donde la burocracia se preocupase más por el

"engrandecimiento nacional" en vez de "participar en los recaudos fiscales" (172). A ello, iba unido el cambio en la Corte Suprema, con el nombramiento de nuevos magistrados.

El control sobre el medio laboral tampoco escaparía al nuevo gobierno. Aprovechando los beneficios que el uso exclusivo del Ejecutivo traía consigo, dan un paso más en contra de los ya de por sí debilitados sindicatos. La promulgación del Nuevo Código de Trabajo -el cual se venía elaborando desde 1948-, será buena muestra de ello (173). En él, aparte de contemplar la ampliación que el Ejecutivo tenía para declarar ilegales las huelgas que afectasen al servicio público, establecían la obligatoriedad del arbitrio. Igualmente, la libertad sindical, en contra de la posición mantenida desde la CTC, era reconocida. El beneficio para la UTC estaba garantizado (174).

Paralelamente a esta situación, el partido Liberal, cargado de líderes -algunos de ellos expresidentes- con sus respectivas corrientes, no pudo evitar que surgieran en su interior movimientos de división.

A la anunciada oposición frontal, respecto a todo lo que fuera mantener contactos con los conservadores, le surgieron diversos críticos. El expresidente López fue el primero en anunciarlo. Para él, conocida la composición del nuevo gobierno, las posibilidades de colaboración estaban abiertas (175).

Los hechos posteriores, sin embargo, como fue la promulgación de un decreto, por el cual, se consideraba caducada la sucesión vía designado, levantó las iras del expresidente Santos, principal afectado por la medida. En su opinión, la decisión podía calificarse de "golpe de estado" (176). Con ello, no sólo se ponía de manifiesto la distancia entre liberales y conservadores, sino también,

se conseguía por parte conservadora, hacer valer sus prerrogativas de forma incuestionable.

A pesar de ello, los conservadores acompañarían a los liberales en sus divisiones. Las elecciones que a nivel de dirigentes locales, tenían lugar en octubre del 50, provocan en Medellín y Cali, encontradas diferencias.

En esta última, los Lloreda destacados líderes del partido en aquella ciudad y a su vez propietarios de *El País*, acusan a los Borrero Olano -dueños del *Diario del Pacífico*-, de haber visto con simpatías los actos del 9 de abril de 1948 (177).

Tras esta acusación, de gran peso al tratarse entre conservadores, estaban entre otras, las quejas de los Borrero Olano, sobre la vigencia de la censura, que había sido impuesta a partir de dicho día (178). Además, con ella, no hacían más que descubrirse las corrientes antagónicas, que si en principio habían quedado eclipsadas por Gómez, dado que Ospina guardaba silencio y distancia, estaba en Estados Unidos, comienzan, al igual que le ocurrió al expresidente, a hacer valer sus prerrogativas.

Gilberto Alzate, en Caldas; Guillermo Valencia en el Cauca; y Jorge Villareal en Boyacá; tendrán como "opositores" en el seno del partido a Alvaro Gómez, Luis Andrade, y Roberto Urdaneta, que fijando su influencia en Cundinamarca, y Alto Magdalena, pujan por concentrar en torno a ellos, el mayor grado de poder y por consiguiente de decisión (179).

El presidente, mientras, proseguirá con sus acciones de gobierno. Entre ellas, la que resultará más sintomática, será el cambio que el discurso de Gómez tenga cuando de Estados Unidos se trate. El conflicto de Corea, le servirá de disculpa. Para él, Colombia: "no podía dejar de alistarse al lado de la cultura occidental y cristiana a la cual

pertenece" (180). Por tal motivo, su gobierno envía al país asiático 1000 hombres agrupados en el denominado "Batallón Colombia".

En contraste, el país a los pocos meses de tener una nueva administración sufrirá, con mayor intensidad la Violencia. Que las elecciones presidenciales del 49 no fueran reconocidas desde filas liberales, y éstas tratasen de obstaculizar los planes de gobierno, actos guerrilleros incluídos, tenían por parte gubernamental una dura respuesta.

De ésta, habría que indicar el alto coste de vidas humanas que tuvo en su conjunto. El aumento en comparación con el año anterior era revelador. Si en 1949, habían llegado a 18.519, en 1950 se alcanzan los 50.253 (181). Las contiendas partidistas, los conflictos agrarios no resueltos, las diferencias políticas por el control local, dado que estaban cerrados los cauces de expresión política, el Congreso no celebró sesiones durante el año 50, encontraron vía Violencia, la solución más factible.

La responsabilidad de los dirigentes políticos, ya fueran liberales o conservadores, tampoco era ajena. Para los primeros, la acción de los guerrilleros liberales, era vista con ambigüedad. Así, para aquellos potentados liberales que temían las acciones de los grupos conservadores, la protección de los anteriores era útil. Sin embargo, cuando se trata de cambiar las condiciones sociales de sus empleados, despreciaban tal posibilidad. Los segundos, amparados en la defensa que las fuerzas militares les ofrecían, mantenían una posición de ataque.

Los últimos meses del año, mantuvieron la tensión que aquél había tenido. La renuncia del Registrador nacional Julian Cock - que pedía el aplazamiento de las elecciones, con vistas a terminar la cedulaación-, recibe por parte de Gilberto Alzate, diversas críticas. En

su opinión aquél: "resolvió prescindir de sistemas científicos de identificación universalmente conocidos" (182). La polémica termina con el relevo del primero.

A la anterior, se le unirían las recuperadas diferencias, entre los líderes del partido Conservador en Cali. Las líneas enfrentadas, ya señaladas, parecían expresar con intensidad, incluso mediante el empleo de fuerzas paramilitares, las disputas que tenían por escena al resto del país. Desde *El Siglo*, pedían calma, estos hechos "tienen carácter decisivo para el país y para nuestra causa" (183).

En medio de esta situación, el año 51, parecía que iba a ser una continuación, en cuanto a la pugna política, del anterior. El gobierno conservador, veía cómo las acciones llevadas desde el Ejecutivo, pese a la censura, encontraban, no sólo la contestación armada en buena parte de la República, sino también, la imposibilidad de conseguir un mínimo de legitimidad en sus acciones.

Con intención de salvar esta situación, Gómez plantea para septiembre unos comicios legislativos. Mediante esta convocatoria, y a pesar del llamamiento realizado por Eduardo Santos de "abstención en toda línea, oposición en toda línea" (184), el presidente, confiaba recuperar la presencia liberal en el Congreso.

Hasta que ese momento llegue, diversos puntos merecían atención. De una parte, los síntomas preocupantes de la crisis económica, afectada principalmente por el descenso del precio del café en los mercados internacionales, lo que obligó a nivel interno a adoptar medidas liberalizadoras; y de otra, desde la óptica política, el partido Conservador, comprueba cómo, los síntomas de desunión, tal y como ocurrió en Cali, se extendían a Medellín. Con ello, el control que Laureano Gómez tenía sobre el partido se iba perdiendo.

Ahora bien, sus acciones al frente del Ejecutivo, parecían no sufrir por ello. El 1 de febrero, da nuevos pasos en pos de la reforma judicial. En esta ocasión, los argumentos utilizados tienen que ver con la eficacia y la rapidez administrativas.

En igual medida, las acciones en favor de la UTC, se extienden. El reconocimiento de su filial en Cali, así lo prueba. Mientras, el sindicato "proscrito", la CTC, en reunión celebrada en Bogotá a principios de febrero, solicitaba "el mejoramiento económico y social de la clase obrera; incremento de la agricultura, garantizando la honra y los bienes de los campesinos e impidiendo la fuga de éstos hacia las ciudades, y un correcto funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales" (185).

Así las cosas, la preparación de las próximas elecciones legislativas, con la actualización de censos como uno de sus puntos básicos, atraviesa por distintos problemas. Para Gómez aceptar este hecho, resultaba difícil de comprender. Su oposición a la elaboración de aquéllos, profusamente empleada durante el gobierno de Ospina, pues según él los liberales los habían manipulado, encontraban, ya durante su mandato, renovadas dificultades. El retraso en la actualización de éstos, pasó a ser el motivo más esgrimido (186).

Por su parte, el liberalismo, no lograba recuperar la unidad de acción con respecto al Ejecutivo. A las opiniones dispares manifestadas por parte de López y Santos -a favor y en contra del diálogo respectivamente-, habrá que sumarle el desconcierto que el anuncio de elecciones legislativas provoca. Ante éstas, la dirección del partido, desconfiando de las labores de cedulação, llevadas a cabo por los conservadores, solicita por una parte, la vuelta del partido a los puestos que tenían en la Corte Electoral y, de otra, el mantenimiento, aunque sólo fuera a título personal, de la línea de

encuentros entre Gómez y López Pumarejo, con vistas a conseguir una intervención del último en favor de la pacificación de Los Llanos (187).

Estas aparentes contradicciones en las opiniones mantenidas, donde el presidente era culpado de tener una doble posición -como lo hacía Lleras Restrepo- (188), reclamaba por parte de los líderes políticos, una reflexión acerca de la magnitud que estaba alcanzando la Violencia.

La respuesta de tipo militar que se estaba dando, en la cual el general Gustavo Rojas Pinilla era el jefe de las operaciones, no lograba el efecto deseado, consistente en la erradicación de cualquier grupo guerrillero. Es más la contestación de éstos, hacía cada vez más imprevisible sus orientaciones, y por lo tanto las posibilidades de control por parte de los desorientados líderes centrales.

A la anterior, se le unirán las dificultades, que los distintos órganos del Estado tengan en estudio. El aparato judicial, era particularmente cuestionado. La impunidad, por miedo a denunciar los actos de Violencia, sufridos en las zonas más remotas, o la simple incapacidad de los jueces por impartir justicia, superando los condicionamientos impuestos por los caciques locales dibujaban un panorama desolador.

Ahora bien, el costo que las acciones tenían en diversos sectores, particularmente en los Llanos -afectando al ganadero-, en el cual los intereses de miembros de ambos partidos estaban dañados, parecieron agilizar las posibilidades de un aparente acuerdo (189).

Por su parte, el presidente, solidarizándose, más por la forma que por el contenido, con las críticas liberales hacia el aparato judicial, aprovecha una reunión de la Corte Suprema para solicitar de sus magistrados mayor "integridad, abnegación y sentido de la

responsabilidad al personal de la administración de justicia" (190). A su vez, expresaba "No estar satisfecho sobre la eficacia real y efectiva de la justicia ... para el descubrimiento de los autores de los crímenes ... " (191).

A esta situación de desorden encontrada en el aparato judicial, se le sumaría, la no comprobación de las cédulas para las elecciones legislativas. De nada servía la contratación de una misión canadiense encargada de las labores dactilográficas, que consideraba poco fiable el método empleado por las autoridades colombianas; sino también el comprobar que de un total de 1.826.250 cédulas, que componían el cuerpo electoral, sólo habían sido examinadas 239.685. Estos hechos produjeron el aplazamiento de las elecciones. La Corte Electoral se haría cargo del recuento, en base a los datos recibidos por la Registraduría (192).

En el interior del partido Conservador, mientras, los líderes internos con Gilberto Alzate como catalizador de la corriente mayoritaria, se encargaban de establecer sus propias líneas de acción. La unión de éste con el expresidente Ospina, pasaba a ser algo más que una labor de conveniencia. Conquistada la confianza del segundo, Alzate esperaba ganarse al importante sector cafetero e industrial, dado el ascendente de Ospina Pérez.

El resto de dirigentes conservadores, liderados por Alvaro Gómez, no se resignaban por las buenas relaciones de los anteriores. Es más, dada la fluída comunicación que mantenían con el Ejecutivo, pasaron a ser sus valiosos portavoces, haciendo hincapié en la necesidad de una reforma constitucional.

Será el propio hijo del presidente, quien desde mediados del año se encargue de ir sugiriendo las líneas sobre las cuales discurriría ésta. En su opinión:

" ... Coincidimos en reafirmar que la Constitución colombiana necesita reformas sustanciales, tanto para modernizarla en aquello que la experiencia ha demostrado indispensable, como quitarle los absurdos remiendos que le hicieron en 1945, 1936 y en 1910. Como base fundamental la Carta de Caro y Nuñez tiene que ser mantenida incólume ... " (193).

Ante las declaraciones anteriores, las sospechas sobre las intenciones de Gómez en sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, que impulsase una reforma, toman sentido. La indicada Asamblea, que tomaría la Carta del 86 como texto rector y en el que los principios corporativistas defendidos por los jesuitas en los años 30 pasarían a la práctica, sembraban amplias cotas de intranquilidad entre las formaciones mayoritarias.

Estos temores, no parecían estar mal orientados. El 4 de junio, se presentaba una declaración de intenciones en las cuales, estaba claramente especificada la decisión del gobierno de acudir a la formación de la mencionada Asamblea, y a través de ésta, señalar los pasos necesarios para impulsar la deseada reforma.

La situación general del país, sin embargo, con la Violencia y la crisis económica como protagonistas, parecieron diluir, por el momento, el empeño reformista del Ejecutivo.

La primera, con zonas como Tolima y Boyacá, donde el enfrentamiento no parecía ofrecer visos de finalización, y a las cuales se unían las opiniones de condena por parte de un líder tan sintomático como López, expresaban abiertamente, el cambio de posición de su partido. Respecto a la segunda, que afectaba a sectores básicos, se vio compensada por la firma de un tratado comercial con Estados Unidos, junto a uno en materia de defensa, lo que sirvió para aliviar la maltrecha economía nacional.

2.2.1.1. El gobierno interino de Roberto Urdaneta, 1951-53.

Ya en los meses finales, la continuidad de las actividades parlamentarias, en las cuales la presencia conservadora era exclusiva, hubo de aceptar el cambio en la jefatura del Estado, debido a la enfermedad de Laureano Gómez. El beneficiario de esta medida fue el entonces ministro de Guerra, Roberto Urdaneta Arbeláez. Con su nombramiento, primero como designado -en detrimento de Eduardo Santos-, y después presidente, vinieron de una parte, a ofrecer cierta sensación de distensión con los liberales; y de otra, el aumento de los temores, que las formaciones políticas, tenían al respecto.

Desde el partido conservador, las reticencias al nombramiento, venían por la "ruptura" que Urdaneta ocasionaba entre las facciones dominantes del partido. Con el nuevo presidente, se acrecentaba la dependencia del Ejecutivo respecto al sector lauranista, pues el retiro de Gómez era meramente táctico, dado el control que sobre un amplio sector poseía (194).

Enfrente de éste, estaba el grupo liderado por Alzate Avendaño, que con algunos jóvenes políticos, aspiraba a renovar las anquilosadas estructuras del partido, aunque para ello hubiera de entrar en antagonismos con el anterior.

A éstos, habría que unirles, con ciertos matices, Ospina. El expresidente, deseoso de mantenerse independiente -se abstiene de participar en el debate constitucional-, le preocupaban más, por ahora, seguir discretamente las intenciones de Alzate, o sus relaciones con los gremios, que el movedizo campo político.

Los liberales, por su parte, agrupados en torno a los miembros del Directorio Nacional -Eduardo Santos, Alfonso López y Carlos Lleras-, estaban a la defensiva. La pérdida de sus bases de apoyo, como fueron los sindicatos en los años treinta y cuarenta; las acusaciones provenientes del gobierno, identificando a la dirección liberal con los guerrilleros; el temor que la escalada iniciada por éstos, se escapara del control partidario -temerosos de la introducción de las ideas marxistas en los grupos rebeldes-; contribuyeron en alguna forma, a cuestionar la posición mantenida hasta ese momento.

Fue entonces cuando la convención liberal celebrada en junio del 51, acordó impulsar una política de paz, para lo cual utilizaría a la Dirección liberal, con el objetivo de reorganizar las vías de oposición al gobierno (195).

Una de las primeras tentativas, cuando Gómez estaba al frente del Ejecutivo, partió del conservador José Gnecco Mozo. El objetivo era ponerse en contacto con los guerrilleros, y saber qué peticiones planteaban. Para éstos los caminos de pacificación pasaban por: " ... que suelten a los presos; que pongan escuelas y granjas; que traigan semilla de arroz; que se funden Cajas Agrarias; que levanten la tropa del Llano; que no haya bloqueo; que tengamos derechos sobre las tierras ..." (196). Los buenos oficios del político conservador de nada sirvieron. Como respuesta obtuvo la desautorización e incluso la detención.

Antes que terminase el año, ya durante el período de mandato de Roberto Urdaneta, Alfonso López recibe el respaldo y apoyo del anterior para negociar con los guerrilleros. Estos, que consideraban la llegada del expresidente como algo importante para la causa, tampoco eran ajenos a la doble actuación que la dirección liberal mantenía respecto a sus actos. Las esperanzas iniciales, sin

embargo, resultaron fallidas. Los alzados en armas lejos de aceptar las propuestas de López Pumarejo, las desatendieron. Los dirigentes liberales, respondieron cancelando la mediación y cualquier muestra que supusiera apoyo para los guerrilleros.

Con esta situación, la escisión liberal entre las directrices centrales y regionales, aumentaba. Al igual que ocurrió en los meses finales de la primera administración López, el liberalismo acusaría estas indecisiones (197).

Así las cosas, los conservadores, que ya a principios de año habían tenido sus diferencias, celebran en noviembre el congreso nacional. En él están representadas las principales corrientes. Entre éstas, la alzatista, que contaba con la mayoría de representantes, queda fuera de los cargos directivos. Ante ello, el peligro de escisión estaba cercano. La intervención de Urdaneta, vía Gómez, mantuvo con una fuerte contestación, la unidad conservadora (198).

Con ello, el año 51 terminaba. La Violencia, quizás por los intentos de diálogo, aunque hubieran sido fallidos, había disminuido en la intensidad de sus efectos. Los 10.319, así lo indicaban (199).

La llegada del año 52, hizo albergar renovadas esperanzas. Los liberales, aún con desconfianza estaban participando de forma más activa en diferentes frentes, de los cuales la mediación, aunque fallida, parecía habilitar ciertos cauces de expresión. A su vez, el nuevo presidente, contando con las limitaciones que su mandato "vigilado" tenía, intentaba conjugar la prudencia con la habilidad. La asignación de cargos ministeriales a hombres como Leyva, y Luis Andrade, fue sintomática. El primero, defensor de los intereses laureanistas, o el segundo de triste recuerdo para los liberales tras la huelga del 47, servían de ejemplo.

Los primeros meses del año, resultaron intensos para el estrenado gabinete Urdaneta. El Ejecutivo, mantenía su primacía. Esta se veía aumentada desde el momento en que el Legislativo y Judicial, seguían controlados en exclusiva por el presidente. A ella, habría que añadirle la desaparición de cualquier contestación sindical o de otro partido que no fuera el liberal.

De igual forma, las fallidas negociaciones con los grupos rebeldes -bandoleros según el lenguaje oficial-, trajeron, toda vez que el principio de año volvió a suscitar un considerable incremento de las actividades armadas -con el Tolima, Antioquia y los Llanos, como centros-, renovados reproches entre ambas colectividades. Desde la prensa conservadora, se decía:

" ... Piérdale el país el miedo a los vocablos. Déjese el país de farsas ... Quedemos en que el liberalismo es el partido de los forajidos, y el conservatismo el del orden. Y estemos de acuerdo: el liberalismo seguirá conspirando y el conservatismo defendiendo los fueros constitucionales ... "

(200).

Los liberales, por su parte, no tardaron en responder. No sólo desestimaban la anterior, sino que apuntaban a motivos más profundos. En reunión celebrada en Bogotá el primer día de febrero, la Dirección Nacional, por boca del presidente Carlos Lleras, explicaba así los problemas que aquejaban a los diversos estamentos del Estado:

" ... Todo lo que es importante en la República, se encuentra en situación de interinidad. En primer termino el Poder Judicial, ya que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están ejerciendo el cargo interinamente y en su mayor parte fueron nombrados por el gobierno ... Cosa semejante ocurre en el Consejo de Estado. El gobierno ha nombrado

a sus miembros y los mantiene en interinidad ... y existe también interinidad en la presidencia de la República ... " (201).

Así las cosas, las dos colectividades, siguieron lanzándose acusaciones mutuas sobre la responsabilidad que tenían en la escalada de Violencia. Según el entonces ministro de Guerra, José María Bernal, la actitud de conciliación liberal, con el expresidente López Pumarejo como máximo representante, no estaba acompañada por la disposición del resto de compañeros de partido, pues a juicio del ministro: "corresponde a la Dirección del Liberalismo propiciar esa paz, desautorizando enfáticamente el movimiento sedicioso ... contra los cuales será implacable la acción del gobierno" (202).

Mientras, en el interior de los partidos (y en concreto el conservador), conocida la delicada salud de Gómez, los líderes locales aprovechan para extender sus líneas de acción. Las intenciones alzatistas por lograr convencer a Ospina, volvieron a tomar actualidad. La ciudad de Caldas -patrimonio político de Alzate-, celebraba, durante el mes de marzo, la convención departamental conservadora. Allí sería proclamada la candidatura presidencial de Mariano Ospina. Con ella se esperaba: "la oportuna aclamación por parte de la convención nacional del partido, interpretando el sentimiento unánime de las masas" (203).

Las opiniones anteriores, parecieron, como ocurrió en otras ocasiones, no encontrar respuesta de Ospina. Gilberto Alzate, seguía confiando en el cambio de actitud del expresidente. Si lograba su respaldo, desplazar la mayoritaria presencia de los gomistas en los distintos órganos del partido y del Estado, en beneficio suyo, sería más factible.

Entre tanto, una nueva escalada de Violencia vino a endurecer las difíciles relaciones liberal-conservadoras. Zonas como

Tolima -donde pueblos enteros aparecieron arrasados por acciones del Ejército-, y los ya conocidos Llanos, volvieron a vivir momentos de fuerte tensión (204). Ante estos episodios, las directivas partidarias, como tenían por costumbre, arrecieron en sus críticas. La propia Iglesia, sorprendida por las cotas alcanzadas, emprendía una cruzada nacional por la paz.

Sin embargo, los intentos por conseguir cierta distensión, no encontraban el eco suficiente. Ambas directivas, recordando los momentos previos al cierre del Congreso, no dejaban la más mínima opción de confianza. Por ahora, los momentos de tensión eran vividos como algo lejano y cercano a la vez. Lejano debido, principalmente a la localización rural de los encuentros armados. Cercano, porque eran compañeros de partido los afectados.

A la situación anterior contribuía, en buena medida, la división de intereses que el partido de gobierno tenía ante sí. Los alzatistas, no contentos con las peticiones realizadas a nivel departamental, incluyen -durante una reunión celebrada en abril-, una serie de propuestas al presidente. En su opinión, es del todo necesaria la renovación de la dirección del partido, al igual que la del gabinete. Para que ésta sea efectiva, señalan por una parte, la admisión de miembros de su grupo en los puestos de decisión, y de otra, una crítica abierta a la entonces directiva del partido: "que no ha cohesionado al conservatismo, sino que ha ahondado la querella con su política discriminatoria" (205).

La respuesta a las propuestas anteriores, llega pronto. Para Roberto Urdaneta su puesta en práctica carece de sentido. El cambio en la dirección del partido, nombrada por Gómez "conductor máximo del conservatismo", supondría "una intervención en materias sobre las cuales no tengo jurisdicción alguna" (206).

Asímismo, la petición de cambio gubernamental, coincidiendo con la renuncia de alguno de sus miembros, sirvió para que Urdaneta, refiriéndose a los alzatistas dijera: "Yo espero que ustedes encuentren propicia esta oportunidad para remover pasajeras inquietudes y enarbolar sinceramente la bandera de la unión" (207).

Al mes siguiente, las peticiones alzatistas, vinieron a provocar, en la reunión del Directorio conservador en Bogotá el 2 de mayo, fuertes discrepancias. Para los dirigentes conservadores, los mensajes de aquéllos eran tomados como una intromisión en sus decisiones; es más, pedían no incluir en la dirección del partido -en referencia indirecta a los alzatistas-, a "ningún elemento que haya estado fuera de la disciplina del partido o que en alguna forma se haya manifestado adverso en puntos fundamentales al gobierno nacional" (208). Con esta declaración, los alvaristas, apoyando decisivamente a Urdaneta, conseguían mantener, por ahora, sus prerrogativas en los órganos de dirección.

Por otra parte, y en contraste con las disputas partidarias que el país vivía, sin desligarse de la preocupación que tales actos causaban, los gremios económicos, y en concreto la ANDI, en reunión celebrada en abril, saludaban, al contrario que el anterior, los beneficios de éste. Para ellos, la política financiera del gobierno, merecía "la más decidida y sincera colaboración y el más franco respaldo a la tarea de equilibrio financiero, progreso económico y mejoramiento social, que está realizando" (209).

Tras ello, el presidente Urdaneta, decidido a impulsar los trabajos de la reforma constitucional, firma un decreto por el cual queda constituida la Comisión de Estudios Constitucionales, como encargada de la redacción de aquélla. Para ello, y sin tener en cuenta la opinión de los directorios políticos, el presidente, el Senado y la

Cámara de Representantes, elegirán a cinco, tres y tres representantes respectivamente, entre destacados juristas de ambos partidos.

Ahora bien, los deseos presidenciales por hacer partícipes a los liberales en la reforma, no son aceptados. La prensa conservadora, haciéndose eco de la negativa recibida expresaba:

" ... Frente a esta invitación ... ha habido dos actitudes diferentes. Una de mutismo <no indiferente> sino por el contrario, comprensivo y expectante por parte del sector que pudieramos llamar lopista, y otra agresiva y displicente, que se apresura a descartar toda posibilidad de entendimiento, que es la asumida hasta hoy por el sector santista ... " (210).

Al sentirse acusado, el diario *El Tiempo*, medio de expresión del santismo, respondía así a las críticas anteriores: " ... La constituyente haría posible el entendimiento sólo en las más estricta igualdad de condiciones ... Si se trata de hacer una imposible reunión de vencedores y vencidos, los organizadores de la asamblea podrían ahorrarse esfuerzos y dineros ... " (211). Igualmente, miembros tan destacados como Alfonso López o Carlos Lleras, manifestaban tanto la conveniencia de la estrenada Comisión, el primero, como la importancia, el segundo, que fuera realmente paritaria (212).

Los aparatos del Estado, mientras, con un control cada vez mayor por parte del Ejecutivo, dado que el Congreso mantenía una presencia homogéneamente conservadora, tendrían escasos momentos de actividad. Uno de ellos tuvo lugar el 23 de junio. En ella, mediante sesión extraordinaria, el Senado y la Cámara, abordaron:

" ... La Cámara se ocupó durante sus deliberaciones de la forma en que se ejercía la censura de prensa y mantuvieron un debate acerca de un

memorial presentado por el partido Liberal sobre la manera en que se lleva a efecto la represión en algunas zonas del país, que citado partido considera contrarias al espíritu de la Constitución ... Las Cámaras de formación conservadora homogénea rechazaron las imputaciones del liberalismo y, alegando que no tienen facultades investigadoras indicaron a los recurrentes que podían ser presentadas las denuncias del caso ante las autoridades competentes ... En igual sentido se procedió a la proclamación de Mariano Ospina, como candidato único del partido Conservador para el período 1954-1958 ... " (213).

Esta última cuestión trajo renovada intensidad a los debates políticos. Con la proclamación, los sectores alzatistas, confiando en deshacerse del dominio laureanista, y los liberales moderados, preocupados por la escalada de Violencia, cada vez más incontrolada, abrigaban ciertas esperanzas.

Roberto Urdaneta, entre tanto, dando un paso más en favor de la reforma constitucional, crea la Comisión de Estudios Constitucionales. Esta, tendrá como función la elaboración de la reforma. Sus miembros -que no serán nombrados por las directivas de los partidos-, proceden de ambas formaciones. Así, Alvaro Gómez Hurtado o Alfonso López Michelsen (hijo de López Pumarejo), entre otros, formarán parte de ella. Sin embargo, las propuestas iniciales respecto a la composición bipartita, no fructifican. La Dirección liberal, ante la perplejidad conservadora, prohíbe la presencia en aquélla a sus copartidarios (214).

Así las cosas, la mencionada Comisión iniciaba sus actividades. El 26 de agosto eran tratados, entre otros, el sufragio femenino y el derecho de huelga. Para la Comisión, la incorporación de la mujer al voto, debía hacerse de forma gradual, siendo "las elecciones para integrar los concejos municipales", un buen comienzo. Es

más, el derecho de huelga quedaría reconocido, si bien "la ley fragmentará su ejercicio" (215).

Acompañando a los anteriores estaba el artículo 30, referido al derecho de propiedad. En él, quedaba reconocida la función social, las limitaciones y el intervencionismo estatal, cuando se trataba de explotación industrial, que la propiedad debía tener. A su vez, la expropiación realizada en aras de "la seguridad nacional", reconociendo el pago de indemnizaciones, intranquilizaron a los sectores productivos del país (216).

Paralelamente a estos hechos, los actos de Violencia, con enfrentamientos cada vez más periódicos, entre Ejército y guerrilla, dibujaban una situación de difíciles previsiones. A pesar de ello, el expresidente López, repitiendo los intentos realizados a finales del 51, comprueba cómo la radicalización que gobierno y guerrilla esgrimen, se hace más insalvable.

El mes de septiembre resulta, en este aspecto, particularmente sintomático. La publicación de una carta -fecha en agosto-, dirigida por Alfonso López y Lleras Restrepo al gobierno, donde, refiriéndose a los mandos guerrilleros les recomendaban: " ... que no corran ligeros de corazón a retirarse de las posiciones que tomaron los primeros meses del año, respecto de un posible arreglo con el Gobierno para acelerar el término de sus actividades subversivas ... " (217), trajo, no sólo la respuesta de la prensa conservadora, que desde las páginas de *El Colombiano*, manifestaba: "La carta del señor López ... demuestra que los liberales dirigentes no quieren la paz sino el beneficio para los bandoleros ... " (218); sino que además, encontrarían el día 6 trágica expresión.

La anterior, tomada como una muestra, ya inequívoca, del consentimiento liberal con respecto a los alzados en armas, vino a

coincidir con la muerte de un grupo de policías a manos de esos en el Tolima.

Como reacción, partidarios conservadores -el indicado 6 de septiembre-, terminado el entierro de los anteriores, saquean e incendian edificios tan representativos como las casas de Alfonso López y Carlos Lleras, al igual que los diarios *El Espectador* y *El Tiempo*, portavoces privilegiados del liberalismo.

Con este hecho, no sólo se saldaba, por parte conservadora, el 9 de abril del 48; sino que también los líderes liberales, comprobaban cómo la Violencia, de ser algo lejano y rural, pasaba a convertirse, con el consentimiento oficial -dado que las casas de los afectados se encontraban a corta distancia de la de Urdaneta-, en cercano y urbano.

Es más, con la demostración anterior, daba la impresión, que el gobierno conservador, estaba dispuesto a extender los efectos del enfrentamiento interpartidario hasta sus elementos más notables, provocando -con el exilio de los afectados-, no sólo una fuerte crisis interna en el liberalismo, sino el cuestionamiento de los patrones clásicos de respeto entre las directivas (219).

Los afectados, y en concreto Lleras Restrepo desde México, señalaba como principal culpable al ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade, por haber promulgado " ... la tesis criminal de que debe cobrarse con la cabeza de los liberales distinguidos la vida de los policías que perezcan en las luchas guerrilleras ... " (220).

La réplica, a lo expresado por Lleras, la daba Urdaneta. Según él, aquellas noticias que anteriormente eran recibidas con indiferencia, cuando afectaban a remotas zonas del país, ahora que Bogotá y personas tan señaladas habían sufrido el bandalismo cercanamente era "preciso buscar que la indignación y la protesta cubran

unánimemente y por igual todos los incendios; los que afectan a los grandes y los que aniquilan a los pequeños" (221).

A los hechos descritos, habría de unírseles cinco días después, la declaración, por parte de los diferentes grupos guerrilleros que actuaban en el oriente del país de "La Primera Ley del Llano". Esta surge " ... Debido a la ineptitud en la Administración de Justicia por parte de la Dictadura que rige hoy en día los destinos de nuestra Patria, sistema que quedó abolido en los Llanos de Casanare ... " (222).

En ella, quedan incluidos distintos aspectos. Así, se contempla la ordenación de la justicia, para lo cual contará con jefes civiles y militares (Artículo I) (223). Igualmente, tendrá normas de carácter penal y policial -que consagran las libertades individuales y castigan los delitos contra la revolución-, compuesto por 26 artículos (224). A su vez, existirán unas normas de reglamentación agrícola -imponiendo límites y condiciones al uso de la tierra- con 21 artículos (225). Para finalmente, ocuparse de la reordenación ganadera, que incluía 18 artículos (226).

Tales perspectivas trajeron mayor inquietud al tambaleante sistema bipartidista. El predominio del Ejecutivo, incuestionable hasta ahora, quedaba -tras lo ocurrido-, al amparo del Ejército. Este, no sólo era el garante contra la Violencia, era además, un factor de decisión que adquiriría mayores cotas de responsabilidad en su interior.

Sin embargo, las variables directivas partidarias, temerosas por las dimensiones que las acciones a favor y en contra de la Violencia alcanzaban -amenazando guerra civil-, plantean fuera de la corriente laureanista, sus líneas de acción.

La anunciada candidatura de Ospina, será el garante principal. El expresidente, poseedor de amplias conexiones entre los

grupos productivos, algo que le permitía ganar la confianza liberal, junto a las fuerzas alzatistas -que contaban desde septiembre, con su propio medio de expresión *Diario de Colombia*-, aventuraban, pese a las reiteradas negativas ospinistas, cierto éxito para la solución.

No es la única, a medida que la Comisión de Estudios avanzaba -donde iba descubriendo una composición de las Cámaras de tipo corporativista-, creaba, excepto entre los alvaro-laureanistas, una amplia zozobra para el resto de políticos. Igualmente el deseo de no ver al enfermo jefe conservador y a sus adeptos, como organizadores exclusivos del régimen, vino a servir de aglutinador entre liberales y conservadores.

Hasta que los intentos de unión fueran efectivos, las que en ciertos casos daban la impresión de ser monolíticas opiniones, comienzan a variar. El cómo responder a los actos de los alzados en armas, era la causa. Aquellos dirigentes liberales que todavía permanecían en el país, como era el caso de Abelardo Forero Benavides, opinaba que: "el liberalismo no intenta llegar al poder por los caminos de la subversión ... el bandolerismo no puede tener aplauso ni respaldo en las gentes honradas de ningún partido" (227).

La declaración anterior, tuvo dos lecturas. La primera y de parte conservadora, fue de gratitud. Para el laureanista *El Siglo*, " ... Se trata de un nuevo intento para llegar a la creación de un clima político de paz y de patriótico entendimiento, que esta vez, parte de un planteamiento sereno y realista de los problemas nacionales ... " (228).

La segunda, desde las filas liberales, la daba el santista *El Tiempo*, según éste : "De la carta que ha dirigido el señor Forero Benavides a su amigo y compatriota, señor Andrade, y de la respuesta de éste, no se desprende, ninguna novedad que pueda alterar el desarrollo de la política colombiana" (229).

Estas opiniones, volvían a repetir las posiciones divergentes sobre diálogo u oposición, cuando había que tratar con los conservadores. Estos, por su parte, acompañaban a los anteriores en las dificultades internas. Una declaración del Directorio Conservador, que incluía entre otras, la necesidad de impulsar la reforma constitucional, el distanciamiento de "las tendencias extrañas a la doctrina", al tiempo que reconocen a Ospina Pérez como único candidato, provoca fuertes disensiones (230).

El motivo no era otro, que la ya reiterada intención por parte de Alzate, de forzar al máximo la presencia de Ospina al frente del gobierno -llegando incluso a solicitar el adelantamiento de las elecciones-, y por lo tanto consumir así la separación laureanista del poder. Sin embargo, la posición del expresidente, que iniciaba una serie de giras políticas por el país, continuaba invariable. Con ella, los en principio entusiastas alzatistas, debían esperar hasta que la decisión final se produjera (231).

Al debate interpartidario, se les uniría el institucional. La votación destinada a aprobar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, va acompañada de una fuerte pugna, mezclada con acusaciones personales entre partidarios gubernamentales y alzatistas, en el seno de las Cámaras. Lo que venía siendo evidente, se traslada al interior del Estado (232).

Con ello, el año 52 tocaba ya a su fin. Antes y para satisfacción del retirado Gómez, la Constituyente era aprobada (62). Atrás quedaban las 13.250 víctimas de la Violencia, que con el asalto guerrillero de 31 de diciembre, a la base aérea de Palanquero, hablaban de su vigencia (233).

El año 53 iniciaba su andadura con una desgastada herencia. La crisis que invadía a los partidos políticos, había

extendido su campo de acción a las instituciones. El Ejecutivo, preocupado, ya de forma exclusiva, por las actividades de la reforma constitucional, sin olvidar el temor que la candidatura de Ospina levantaba -pese al teórico apoyo oficial-, transmitía, para el conjunto de la sociedad, una clara inactividad.

Actos como el asalto guerrillero, o la apariencia de una realidad sin salida, llevaron al partido Conservador a tomar posiciones más defensivas. La solución al problema de los alzados en armas, diluídos los patrones de intermediación política, encontraban como respuesta por parte del Ejecutivo la aplicación continua del Ejército, involucrando a éste de forma paulatina en este tipo de actividades.

Por su parte, los gremios económicos, superados los trágicos momentos del 51, consolidadas en el 52 sus posiciones de beneficio, comprueban que a pesar de la situación interna, la actividad económica nacional no se resiente. Es más, la posible vuelta de Ospina, ahora como factor de conciliación, eran bien vista entre todos ellos.

En medio de todo ésto, el Ejecutivo que seguía ocupado en agilizar los trabajos de la reforma constitucional, da paso a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para ello, el 9 de enero, el presidente interino, expide el decreto 0029 regulando el acto. Los gremios, las instituciones educativas, la Iglesia, el Ejército, la prensa etc, con diez representantes cada uno, serán algunos de los sectores presentes (234).

El ofrecimiento gubernamental encuentra algunas contestaciones. El *Diario de Colombia* -propiedad de Alzate-, cuestiona la decisión por considerar que " ... Los diputados así escogidos no serán voceros de las asociaciones sino agentes del gobierno ... " (235). Igual

opinión mantiene el director de *El Colombiano*, Fernando Gómez Martínez pues "no será otra cosa que representación del Ejecutivo" (236).

Las críticas anteriores no afectaron a la Comisión. El 29 de enero el anteproyecto de reforma constitucional estaba terminado. Con ello, en principio, culminaban la revisión de la Constitución, incluyendo una serie de reformas (237).

La renovación propuesta era amplia. De un total de 218 artículos que componían la Constitución, 92 permanecían intactos. Entre las recomendaciones realizadas por la Comisión, estaban entre otras, la ampliación de la autoridad del presidente, siendo responsable de sus actividades ante el Procurador General (Fiscal General); el reordenamiento del Senado, con una parte corporativa y otra representativa; la recuperación del papel preponderante de la Iglesia; y el cambio en la elección de los concejos, donde el voto de los casados legítimamente valía por dos (238).

Estos, hasta que llegue la aprobación efectiva, tendrán que pasar por la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, que paralelamente a la Comisión, desarrollaba sus actividades. Mientras, el ministro Andrade, satisfecho por las reformas recomendadas estimaba:

" ... La Constitución así reformada será conservadora para toda la nación ... será católica, democrática, de régimen representativo, con sufragio universal (pero no en todas las elecciones). Unicamente en las de presidente de la república, pues cumpliremos el pensamiento del gran Caro: "Ejecutivo, fuerte, justo, progresista y honesto" ... " (239).

Por su parte, la prensa liberal, refiriéndose a las palabras del ministro opinaba:

" ... La declaración del ministro además de franca, ha sido de grande oportunidad porque liquida hasta la más remota posibilidad de que

haya siquiera un liberal que quiera asumir ante su partido la responsabilidad de asistir a una Constituyente, que ya tiene trazado su plan, que será orientada por un criterio ya definido ... " (240).

Así, los temores que la reforma creaba entre la colectividad liberal -por considerar que las libertades ciudadanas estaban disminuídas-, quedaban fuera de duda (241). La espera del proyecto definitivo, que sería enviado al gobierno en febrero, aumentaba la tensión. A ella, no le serían extrañas las dudas que se cernían en torno a la candidatura de Ospina, y los recelos, que desde el Ejecutivo llevaba consigo.

La celebración de diversos actos políticos -que servían de preámbulo a la elección de diputados, en el mes de marzo-, vinieron a recuperar la tensión acumulada en los partidos. Gilberto Alzate, que al igual que los liberales ordena la abstención en las elecciones, manifiesta estar a disgusto por la actitud del gobierno en contra de sus militantes (242).

Paralelamente, los líderes liberales, que seguían en el exilio, trataban mediante declaraciones, mantener viva la esperanza entre su debilitada comunidad. Tal era el caso del expresidente Santos. Este, en declaraciones al venezolano diario *El Nacional* expresaba sus dudas en que los males que aquejaban al país, tuvieran solución gracias a la violencia. Más adelante y refiriéndose a lucha mantenida por las guerrillas, decía: "En Colombia la obra de los guerrilleros, cualquiera que sea el móvil que ellos tengan, ha producido infinitos dolores y daños incalculables a miles y miles de liberales inocentes. Los guerrilleros han dado el pretexto, sin quererlo, para atropellos inenarrables" (243).

En ellas, se descubría por una parte, la distancia ya clara con respecto a los alzados en armas, que hasta entonces habían

mantenido una posición de conexión con los liberales, y de otra, la reacción que desde los medios conservadores provocaban tales declaraciones.

Así para el ministro de Gobierno, Ignacio Andrade, las palabras pronunciadas por Santos, si bien variaban la postura inicial del líder liberal, no por ello se apartaban de "los propósitos que han hecho tan pérvida carrera bajo el bien entendido santo y seña de fe y dignidad" (244).

Mientras éstas encontraban agria respuesta por parte del diario *El Tiempo*, los comicios celebrados, llenaban las Cámaras de laureanistas. La abstención liberal y alzatista, habían conseguido sus frutos. Con ello, la soledad del Ejecutivo resultaba patente. La falta de unión, acrecentada por la debilidad y desconfianza de los alvaristas, cuando de apoyar a Ospina se trataba, dibujaban un panorama para el partido Conservador de fuertes disensiones.

La celebración de un homenaje el 11 de abril, organizado por Gilberto Alzate, para agradecer a Ospina el comportamiento de éste durante el 9 de abril de 1948, sirvió de detonante. Allí, el expresidente manifestaba estar dispuesto "a defender el derecho que tiene el pueblo conservador a escoger sus propios mandatarios. Acepto la bandera que se me ofrece. En mis manos estará firme y nadie habrá de arriarla" (245).

Fue a partir de entonces cuando la distancia guardada por los sectores gomistas, dejó de existir. Empleando la tribuna que *El Siglo* les ofrecía, emprendieron una oposición abierta a Ospina Pérez. Para éstos:

"... el doctor Ospina Pérez ha planteado su reelección contra el gobierno y por encima de las directivas y de la convención nacional conservadora ... El gobierno actual es, para él, un régimen totalitario a la

rusa que <fusila las ideas> si no lo apoya, sólo acata el veredicto de la convención, si lo elige ... Se trata de un ataque de fondo a la organización doctrinaria de la colectividad ... " (246).

Tales palabras eran del todo representativas. Días después Laureano Gómez, expresaría su propia opinión. El 18, a través de la Radiodifusora nacional hizo un análisis del papel jugado por Ospina en la historia del partido Conservador. Para Laureano, el expresidente no sólo " ... gozaba del merecido privilegio de consagrar su tiempo completo a la gestión de valiosos negocios personales o de empresas privadas ... " sino que, tal y como ocurrió con el 9 de abril, " ... el conservatismo no ha olvidado el desencanto que sufrió cuando veía a su presidente aquejado de una especie de rubor de profesar los principios del partido ... ". Por ello, prosigue Gómez: "¡Ay del partido conservador si olvidándose de la doctrina se envenena con personalismos! ... ¡si entrega sus destinos a mentes equidistantes ... sin fe y amor al ideal! ... " (247).

La respuesta, vino dada desde *El Colombiano* -cercano a la familia del expresidente-. Este, contestando al discurso comentaba: " ... A Ospina Pérez, según Gómez, no le debe el conservatismo ninguna acción denodada en la obra de la reconquista del poder ... Pero entonces ¿por qué el señor doctor Gómez le ofreció en canastilla de bodas la candidatura presidencial en 1946? ... " (248).

Sería la última defensa que pudieran hacerle. La censura que él había implantado, era utilizada, en esta ocasión, para prohibirle cualquier comunicación que no fuera personal. Al ver que su campaña política quedaba suspendida, Mariano Ospina rompe con los grupos del Ejecutivo, acercándose al resto de disidentes conservadores (249).

Mediante estas acciones, el gobierno silenciaba a los conservadores más críticos. La soledad del gabinete, junto a la crisis

interna que le afectaba, así lo confirmaban. Como salida, los lazos de unión con el Ejército aumentaban. La visita de Urdaneta a los Llanos, en compañía del entonces jefe de Estado Mayor, general Gustavo Rojas Pinilla -enfrentado con Gómez-, para elaborar un plan de ataque, vía exterminio, contra los guerrilleros, son un ejemplo (250).

Entre tanto, las bases que conformaban la reforma constitucional, salen a la luz. La presentación corre a cargo del ministerio de Gobierno, que mediante circular N° 146, la remite a la Asamblea Nacional Constituyente, para su discusión el 15 de junio.

La reforma, tomando los principios reguladores del 86 como punto de partida, sufría diversos cambios. Así, y en relación con el Ejecutivo, el presidente, no sólo conservaba el cargo de jefe militar y policial -artículos 29 y 30-, sino también, la responsabilidad de enjuiciarle, que hasta entonces tenía la Cámara, pasaba ahora al Procurador General de la Nación -artículo 28-. El Consejo de Estado, por su parte, quedaba sujeto al Ejecutivo (251).

Igualmente la mencionada reforma llegaba al Legislativo. El Senado, tendrá composición mixta, una corporativa, a la cual corresponden 15 representantes, elegidos entre los industriales, el clero, el cuerpo docente, etc, y la de representación política, mediante voto indirecto, -artículo 21-. A su vez, los diputados elegidos no tendrán iniciativas "en materia de gastos para la expedición de leyes, ordenanzas y acuerdos. Esta atribución corresponde al gobierno nacional, departamental y municipal sobre planes y programas previamente expedidos por el congreso, las asambleas y los concejos", artículo 22 (252).

No serán los únicos. Por una parte, la Iglesia recupera el papel que la Constitución del 86 le concedía -rompiendo la tendencia secularizante que los legisladores liberales le dieron-, artículo 1, y de otra, la permanencia de la censura de prensa, artículo 16 (253).

En igual orden, el proyecto, cuidando los aspectos corporativos, nombrará a la familia "como núcleo fundamental de la sociedad", para ello, el Estado le concede una protección especial, artículos 6 y 7 (254). Esta se verá acompañada en la urnas. Así, las personas casadas legalmente, podrán ejercer el derecho al voto de forma doble. Igualmente las mujeres, que hasta entonces lo tenían negado, en virtud del artículo 24 lo tendrán reconocido (255).

Los conflictos sociales también quedarán contemplados en el proyecto. No sólo, atenderán al problema de la lucha de clases, artículo 4, estableciendo su proscripción, sino también, reconociendo el derecho de huelga "sólo como último recurso", artículo 9 (256).

Como era de esperar, las reacciones fueron inmediatas. Desde *El Siglo*, las alabanzas al proyecto quedaban establecidas por los:

"largos y cuidadosos meses de estudio, el gobierno ha presentado a la consideración de la opinión pública las bases de la reforma constitucional ... Desde el primero hasta el último numeral, este pliego de postulados está inspirado en los principios del orden y de la autoridad, de la disciplina social y de la responsabilidad de pensamiento, de la planificación administrativa y del presidencialismo bolivariano, de la educación católica y de la justicia social, del parlamentarismo técnico y de la judicatura independiente, de la descentralización fiscal y de la unidad orgánica del país, de las libertades responsables y del sufragio cualificado ... El conservatismo, ante el total fracaso de su adversario, comenzó ya a gobernar con sus hombres y va a comenzar a legislar exclusivamente también con sus doctrinas ... " (257).

Ante estas declaraciones, la prensa liberal entendía que:

" ... Una vez más los exégetas de la reforma advierten al país que su propósito no es otro que el de hacer una constitución de partido,

estrictamente conservadora, mas no en cuanto esta idea pueda tener reminiscencia alguna de criterio democrático ni <liberalizante>, sino en cuanto exprese una auténtica y beligerante reacción antiliberal ... nunca nos hicimos ilusiones de que las cosas fueran a resultar de distinta manera. Por eso nos pareció siempre ingenuo -además indigno- que el liberalismo pensara en asitir a una reunión política -la Asamblea Constituyente- en donde su voz carecería de eco y su criterio de influencia alguna ... " (258).

La tensión que el texto suscitaba era obvia. La redacción había correspondido a una parte de la élite política. Esta, pensaba que así realizaría las reformas a su medida. Es más, las transformaciones introducidas desde el Ejecutivo, donde se descubría un cambio en el esquema liberal de representación, unido al control que detentaba el presidente, creaban fuertes tensiones. Su procedencia, no sólo era de los sectores disidentes del partido Conservador, sino también de todos aquellos que deseaban un mayor reparto de poder, y consideraban que gracias a la vía representativa, la vuelta a la más alta magistratura tendría mejores posibilidades (259).

Hasta que la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente tenga lugar, las diferencias expresadas con motivo de la indicada reforma, ganaban adeptos. Los sectores disidentes, ya fueran conservadores o liberales, preocupados por la continuidad de la Violencia y de las propagaciones no controladas que ésta tuviera - como ocurrió en septiembre del año pasado-, contemplaban sin excesivo disgusto la posibilidad de un golpe de Estado.

Los últimos días de mayo aumentaron las expectativas. El Ejército, que hasta entonces había sido el máximo aliado del Ejecutivo, pasa a convertirse en sospechoso. Las diferencias que

mantenían Gómez y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, contribuían a ello. La negativa de éste, persuadido por sus compañeros, a aceptar un viaje al extranjero, con motivo de la inauguración de una línea aérea, aumentó las distancias (260).

Posteriormente, Rojas, convencido que Gómez buscaba apartarle del cargo, da su propia respuesta. El 22 de mayo, en un banquete organizado por las Fuerzas Armadas homenajeando al presidente interino -al cual asisten, entre otros, Mariano Ospina-, resulta revelador.

El general, dirigiéndose a Urdaneta, le renovará, por una parte, el apoyo de los militares, y de otro, refiriéndose a las innecesarias campañas que intentan dividirles, indicará que: "los oficiales, los suboficiales ... comprenden y no olvidan que en la unión firme y sincera está nuestra fuerza y que de ésta dependen la seguridad de vuestro gobierno, la defensa y porvenir de las Fuerzas Armadas y la salvación de Colombia" (261).

Con ellas, las advertencias indirectas a Gómez eran claras. El Ejército, además, daba un importante paso en su posición política deliberante. Esta situación merecía la siguiente opinión por parte de la legación española:

" ... A la entrega del bastón de mando procedió un largo, elaborado y político discurso del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, en el que se indicó la esperanza de que se terminaran las discusiones que minan la unidad del partido conservador ... siendo contestado por el presidente con un habil y circunstanciado discurso La importancia evidente de este acto radica, sobre todo, en la presencia pública y patente -sin embozos de ninguna clase- del Ejército en la vida política de Colombia, tomando partido e indicando en cierto modo condiciones para

su apoyo al gobierno. Se puede afirmar que la aparición del Ejército en el juego político se ha hecho más patente ... y que por el momento, tanto los políticos como sus organizaciones habrán de incrementar sus contactos con las fuerzas militares, que se presentan -al amparo de las circunstancias que vive el país-, como un elemento imprescindible cuyo rumbo futuro, frente a las divisiones políticas, no se puede preverer ... " (262).

Días después, Roberto Urdaneta corresponderá a las Fuerzas Armadas. El 1 de junio, impone a los generales Rojas y Régulo Gaitán, la Gran Cruz de Boyacá. Con este acto, por una parte se congratulaba con el Ejército, y de otra, tranquilizaba a Laureano - dado que Gaitán era amigo suyo-, molesto por la asignación de Pabón Núñez al ministerio de Guerra.

Sin embargo, las muestras externas de concordia, pasarán rápido. Un escándalo, conocido como "el asunto Felipe Echavarría", vino a precipitar los hechos. La supuesta existencia de un complot, dirigido por el industrial Echavarría, que tendría como fin atentar - entre otros-, contra Rojas, fue descubierto por la inteligencia militar. Mientras el detenido era interrogado, los simpatizantes gomistas, criticaban el comportamiento militar. En opinión de aquéllos, el industrial estaba siendo torturado, motivo por el cual pedían el castigo de Rojas, al considerarle responsable de la operación (263).

Laureano, conocidos los hechos anteriores, ordena la sustitución de Rojas. Urdaneta, por su parte, se niega a cumplir el mandato. Gómez, vista la situación, vuelve a la presidencia. Entre tanto Gustavo Rojas, conocedor del apoyo que los sectores disidentes -ospinistas y alzatistas-, unidos con los liberales, le proporcionan, antes de aceptar la dimisión, el 13 de junio da un golpe de Estado.

Con él, buena parte de las directivas políticas, completaban sus deseos de ver apartado a Gómez de la presidencia. Paradójicamente, el golpe había tenido lugar dos días antes que la ansiada reforma fuera aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma y por primera vez en el siglo XX, el Ejército, con el beneplácito de amplios sectores partidarios, rompía la aireada neutralidad.

2.2.2. Las relaciones Iglesia-Estado.

Tal y como ocurrió en el gobierno anterior, la continuidad conservadora, no creó inquietud entre los medios eclesiales. Aún así, el recuerdo que las actitudes del líder conservador traía para temas como el Concordato o la identificación católica-conservadora, servían -desde pequeños sectores urbanos y de la Nunciatura-, para mantener mínimas distancias hacia éste. Ahora bien, el clero rural, separado no solo geográficamente de los criterios urbanos, le era fiel. Las condenas de Gómez al liberalismo, encontraban amplio eco entre aquéllos (264).

La toma de posesión de Gómez, estuvo precedida por el fallecimiento del arzobispo de Bogotá, Ismael Perdomo, el 3 de junio de 1950. El entierro, fue aprovechado por el gobierno para manifestar su fidelidad al pensamiento católico, al tiempo que reconocían a la Iglesia como "forjadora de nuestra grandeza, asilo de nuestras esperanzas y seguro de nuestro destino" (265).

En lugar de Perdomo, resulta elegido el hasta entonces obispo de Tunja Crisanto Luque. Este, hombre de amplia capacidad administrativa, debía hacer frente no sólo a los posibles problemas de cohesión interna -distanciándose de las líneas retardatarias del

clero-, sino también, buscar la concordia entre los sectores civiles, en unos años de especial convulsión.

Las pruebas le llegan pronto. La Violencia de los cincuenta no perdonó al clero. En septiembre, un sacerdote moría en un asalto guerrillero. Con ello, el arzobispo creía necesario aclarar que el materialismo práctico era la clave de los males que aquejaban al mundo, pidiendo a los católicos su colaboración para restaurar una sociedad cristiana (266).

El hecho anterior, no tendría carácter aislado. La reacción que tales actos encontraban entre los sectores eclesiales y su influencia en la precipitación de la Violencia, resultaban difíciles de medir. Para el clero, la solución pasaba por la extensión, tal y como quedó señalado, de aquellos valores que impulsasen un "reino cristiano". La declaración que en noviembre del 50 hizo el nuncio Samoré -con motivo de la proclamación del Dogma de la Asunción de Maria, por parte de Pío XII-, manifestando que el progreso moral y material de Colombia dependían del progreso de la Iglesia, parecen indicar esa dirección (267).

En igual medida, la identificación que desde el Ejecutivo se buscaba -sin desprecio eclesial-, respecto a los valores conjuntos católico-conservadores, tenían a principios de 1951 buen reflejo. El homenaje que Gómez ofrece a Luque, alabando la importancia del párroco como elemento de autoridad, una vez que los intentos por alterar la presencia moral de aquél han sido superados, encuentran en el arzobispo palabras de apoyo y colaboración para sustentar tal logro (268).

Ahora bien, la crisis política que afectó al país, influyó de igual manera en el papel que la Iglesia pasó a jugar en la política nacional. La indicada identificación de aquélla con los valores

conservadores, su preocupación excesiva por defender la pureza doctrinal, ya sea en contra de los protestantes o comunistas -de forma más sutil con éstos, pues ya no había pastorales en su contra, pero si artículos en publicaciones católicas, que esbozaban los horrores "tras la cortina de hierro"-, y respaldo dado al sindicato UTC, contrario a las orientaciones de CTC, levantaron no pocos recelos sirviendo, además, para restarle capacidad de conciliación entre los grupos enfrentados (269).

Es así como, el Episcopado, en línea con la pauta iniciada durante 1950 -cuando con motivo del Año Santo, hace un llamamiento a la pacificación del país-, decide al año siguiente promover una Cruzada por la Paz. A ella estarán destinadas las pastorales de julio y enero del 52, para las cuales las causas y males ocasionados por la Violencia debían buscar -si deseaban terminar con ella-, los aspectos devocionales (270).

Los efectos que éstas tuvieron, pese a contar con el apoyo oficial, no lograron exceder más allá del entusiasmo conservador o la educada distancia liberal. Los recuerdos pasados, no superados por ninguna de las partes, unidos al inexistente control que tanto autoridades civiles como eclesiales tenían sobre la situación, hicieron muy difícil el logro de una solución.

Entre tanto, la Iglesia, favorecida por las relaciones que mantenía con el gobierno, ve cómo sus ingresos, procedentes de las arcas públicas -en virtud del artículo 25 del Concordato, que obligaba al Estado a auxiliarla, para mantener seminarios, diócesis, etc- suben de los invariables 82.000 pesos de 1919 a los nuevos 262.000 de 1951 (271).

Por su parte, y en concordancia con el momento, la que habría de constituir, entre otras, fuente de amplia polémica -el

debate constitucional-, encontró por parte de ciertos representantes del clero eco y difusión. Tal fue el caso del jesuita Félix Restrepo. Este, en 1951, dicta a través de la Radiodifusora Nacional, cuatro conferencias, que bajo el título genérico de "Colombia en la Encrucijada", creen encontrar, mediante la constitución de una república utópica, Cristilandia, la solución ideal -que en cierto modo reflejaba el proyecto de Gómez-, respecto a la problemática nacional (272).

Los dos últimos años de gobierno conservador, ya con Urdaneta como presidente, siguieron en las relaciones Iglesia-Estado, las pautas que le habían precedido. La indicada Cruzada por la Paz, esta vez en mayo del 52, volvió a recibir el impulso eclesial, presidencial y papal. Sin embargo, la influencia de ésta, conocidos los obstáculos que debía superar, hacían difíciles, no sólo los intentos por cuantificar su eficacia, sino también descubrieron, desde el punto de vista interno la necesidad de cambio, dada la crisis de valores que la Violencia traía consigo.

Así, la constitución de la Conferencia de Obispos -con el primer secretario permanente del continente-, unida a la fundación de seminarios -superada la crisis vocacional-, sin olvidar la presencia en la UTC, y por último, la extensión de sus actividades a las zonas rurales -gracias al empleo de la radio-, apuntaban en esa dirección (273).

Pese a ello, la influencia tenida en años anteriores, disminuye. La escasa respuesta que las llamadas episcopales al gobierno tenían, cuando solicitaba de éste la condena penal del adulterio, el concubinato o la prostitución, servían de ejemplo (274). Con ellas, y debido al golpe de estado del general Rojas Pinilla -

apoyado inicialmente de facto por la Iglesia-, se cerraba un capítulo de relaciones, y se abría otro de incógnitas (275).

2.2.3. El Estado y las Fuerzas Armadas.

Al igual que Ospina, la nueva administración hubo de superar la desconfianza, que el hacer político de Gómez levantaba entre los militares. Estos y con mayor razón los de filiación liberal, rota la Unión Nacional, son desplazados. Sin embargo, la habilidad del presidente, garantizando la no reducción del presupuesto, unido al cuidadoso trato que recibían aquellos militares considerados incómodos, como el general Sánchez Amaya, colaborador de Ospina y sin enemigos liberales, nombrado embajador en Inglaterra, traían inicialmente, cierta tranquilidad.

En contraste -rotos los canales de diálogo-, la conflictiva situación interna, encuentra por parte del Ejecutivo dos respuestas. De una parte, la opción militar para terminar con la Violencia, de otra, el sorprendente envío de tropas -por deseo presidencial-, al conflicto de Corea.

Con ello, Laureano perseguía diversos objetivos. Primeramente, aceptaba la llamada hecha por Naciones Unidas, y concretaba la promesa que Ospina le hizo al presidente Harry Truman sobre el particular (276). Seguidamente, la opinión pretérita de Laureano, respecto al gobierno estadounidense, sufría un cambio sustancial, por lo que lograba, no sólo, tranquilizar al Departamento de Estado -preocupado por las noticias que misioneros protestantes y liberales exiliados le expresaban-, sino también, a los sectores económicos, que temían, si repetía sus acciones, imprevisibles respuestas contra sus productos (277). Tercero y en relación con la

Violencia, intentaba -ofrecidas ya las tropas-, conseguir, en virtud del tratado firmado en 1949, la renovación del variado material de guerra colombiano, y así aumentar su efectividad en el combate antiguerrilla.

Así, una vez que las intenciones presidenciales superan las ambiguas respuestas de los Departamentos de Estado y Defensa estadounidenses -que llegaron a pensar en desestimar la propuesta de Gómez-, deciden, vistos los efectos políticos que una negativa traería consigo, aceptar la incorporación de mil hombres, que bajo el nombre de Batallón Colombia, una vez completada la formación, partiría hacia Corea (278).

Por su parte, el gobierno conservador, fiel al anuncio hecho por Gómez -salvando el año 1950-, dada la intensidad que el enfrentamiento armado alcanzaba, se ocupa, por una parte, de aumentar la cuantía de sus efectivos, y de otra, incrementar el presupuesto del ministerio de Guerra.

Los efectivos, que en 1950-51 eran de 14.660, ascienden en 1952-53 a 15.660. Igual subida experimentan los presupuestos. De los cerca de 70 millones de pesos, que suponen un 15.7% del presupuesto nacional en el 50, pasa los años 51 y 52 -uniendo sus cantidades con las de la policía-, a 100 y 128 millones de pesos, lo que significa un 17.9% y 23.3% respectivamente, para finalmente, alcanzar en 1953, la cifra de 55. millones de dólares, y el 25.4% del gasto público (279).

Sorprendentemente, tal aumento -que incluía los gastos generados por el Batallón Colombia-, no encontró ningún tipo de oposición. Los liberales, conocedores de la arbitrariedad presidencial -pues para enviar tropas al exterior, su aprobación era necesaria-, optan por no criticar tal acción e indirectamente, congratulándose

con el Ejército, acatan la decisión. A éstos, les acompañan los sectores productivos (280).

Ahora bien, el objetivo prioritario -dada la conflictividad interna generada en 1950-, lo constituye, según el criterio del partido Conservador, la supresión de cualquier expresión guerrillera. De esta forma, el Ejército, que ya desde el 48, había sido empleado con mayor o menor éxito en actividades de gobierno, asume ahora un nuevo papel.

La inclusión de aquél en un enfrentamiento que como éste, llevaba consigo una fuerte identidad partidista, resultaba peligroso. A ello contribuía -salvo pequeños grupos comunistas-, de una parte, la filiación liberal de las guerrillas, y de otra, las primeras muestras de apoyo, que desde la directiva liberal, exceptuando el caso de López, recibían estos grupos.

Entre tanto, el año 51, recogiendo la triste herencia del anterior, tiene una inusitada actividad cívico-militar. Finalizado el período de entrenamiento, el Batallón Colombia, previa bendición en febrero, de los hombres y armas que lo componen (281), parten en mayo hacia Corea (282).

El gobierno, mientras, creaba el Comando General de las Fuerzas Armadas. En él, estaban incluidas las fuerzas policiales, que pasaban del ministerio de Gobierno, al de Guerra. De esta manera, Gómez, unificaba las fuerzas antiguerrilla, que bajo el mando del general Gustavo Rojas Pinilla conseguían, por una parte, superar el descontento que la actuación policial tenía entre los militares de filiación liberal, y de otra, le concedía al Ejército mayor control en su lucha (283).

La presencia de Rojas al frente del Comando es corta, en marzo -al mismo tiempo que la misión estadounidense visitaba el

país, para coordinar las tropas colombianas destinadas a Corea-, es nombrado subjefe de la Junta Interamericana de Defensa y enviado a Washington (284). Su sustituto, será el hasta entonces, hombre de confianza de Laureano, coronel Régulo Gaitán, ascendido a general en abril (285).

Paralelamente, la guerrillera recuperaba su actividad. Las directivas políticas, especialmente la liberal, preocupadas por la intensidad alcanzada, y por el poco eco que sus recomendaciones - ahora distanciados de los alzados en armas-, encontraban entre aquéllos, buscan con la mediación de Alfonso López, llegar a un acuerdo. Los resultados son conocidos, ni los guerrilleros cambian de actitud, ni el gobierno acepta ninguna transacción que suponga un cambio en la solución militar del conflicto.

Fue a raíz de este momento cuando las contradicciones internas del estamento militar comenzaron a funcionar. Si para el Ejecutivo resultaba imprescindible contar con un Ejército capaz para combatir la guerrilla, no menos real fue la protección que algunos militares liberales concedieron a líderes guerrilleros, dificultando con ello la efectividad perseguida (286).

Igualmente, y en relación con la anterior, las entonces fluídas relaciones con Estados Unidos, hicieron abrigar esperanzas, entre el gobierno colombiano, de conseguir la periódica renovación del material de guerra. Las gestiones diplomáticas ante aquéllos, a favor y luego en contra -por parte de los exiliados liberales-, jugaron su papel hasta hacerla real (287).

El retiro de Gómez, vino prácticamente a cerrar un año en el que las intromisiones oficiales -petición de adscripción partidaria para entrar en la Escuela de Cadetes-, o la ampliación del tiempo de permanencia a filas -de doce a dieciocho meses-, sin olvidar los

conflictos, que por cuestiones administrativas tenían los militares en los Llanos, marcaban un tiempo de difíciles relaciones (288).

Roberto Urdaneta, hasta entonces al frente del ministerio de Guerra, tuvo que asumir interinamente la presidencia. La situación heredada, iba a tener pocas variaciones en el método de solución. Las reuniones que ya en enero del 52 mantuvieron una delegación colombiana y otra estadounidense, para elaborar un acuerdo bilateral de asistencia militar (289), que priorizaba -por parte colombiana-, la solicitud de armas, fue visto con iniciales recelos en Washington.

No sólo eran las sospechas que el empleo de las anteriores pudiese tener -algo que ofendía al gobierno colombiano-, sino también, las presiones liberales que cuando el Pacto de Ayuda Militar Bilateral fue firmado -24 abril del 52- (290), tuvieron en el escritor Germán Arciniegas uno de sus detractores, por lo que ello suponía de facilidad para la compra de material (291).

En igual medida Urdaneta, temeroso que la división conservadora tuviese reflejo en la oficialidad, intenta, mediante un mayor acercamiento, limar diferencias entre ellos. La presencia de los generales Rojas Pinilla y Régulo Gaitán -ospinista y gomista respectivamente-, así lo recomendaba.

De los anteriores, el primero era sin duda, el oficial de más alta graduación que mayor simpatía despertaba. Su destino a Corea, -en el cual se quiso ver un intento de Gómez por desplazarle-, le fue de gran provecho. Allí pese a no entrar en combate, pudo ampliar sus relaciones con la oficialidad (292). La concesión, por parte de las autoridades norteamericanas, de la Legión del Mérito; la atención que la prensa y especialmente *Diario de Colombia* -propiedad de Alzate-, le presta; la visita que realiza a los Llanos, a finales del

52, declarando a su vuelta que " ... la ciudadanía puede tener la seguridad de que las fuerzas armadas impondrán el orden, la seguridad y la paz con responsabilidad y energía... " (293); le hacían ganar prestigio -dada la situación del país-, dentro y fuera de la institución militar.

Laureano era consciente de ello. La primera mitad del año 53, resultaría esclarecedora al respecto. La aceptación del general, no tenía respuesta en el gobierno. Primero fue la negativa de Gómez a nombrarle ministro de Guerra. Posteriormente vino el fallido intento de enviarle en misión oficial al exterior y así destituirle; para terminar, acusándole de maltratar a un conocido industrial, por lo que pide su renuncia a Urdaneta -que no acepta cumplirla-, y nombrar como sustituto al general Régulo Gaitán.

Con ello -una vez que Laureano Gómez recupera la titularidad presidencial-, la fidelidad del general Rojas, un tanto resquebrajada por la injerencia presidencial, había terminado. El 13 de junio, día en el que Gómez esperaba ver consumada su obra reformista, el Ejército al mando de Rojas Pinilla, da un golpe de estado.

De esta forma, los militares, apoyados por amplios sectores de la oposición a Gómez que van desde los ospinistas hasta los liberales, pasando por el silencio de los gremios económicos, ganan la bienvenida. Para aquéllos, conscientes de ser el único grupo de poder que permanecía cohesionado, y que pese a no tener una adscripción política concreta, más allá de la familiar, la acción de gobierno era un reto.

2.2.4. Las relaciones entre los Gremios y el Estado.

El nuevo gobierno, recogiendo las perspectivas favorables, que para este apartado se preveían, intenta mantenerlas por dos vías. Para ello, en primer lugar, encauza su política económica de acuerdo a las pautas marcadas por el Banco Mundial (294), y segundo, acepta el papel ascendente de los gremios -que como el cafetero-, se asientan durante este mandato.

Atendiendo al primer punto, la llegada en 1950 de la Misión Currie, supuso, en aquella época "la presentación del primer programa económico, objetivo, completo y cuantitativo en la historia de Colombia" (295). Las recomendaciones hechas al respecto fueron diversas. Desde una mejor administración de los beneficios monetarios, pasando por la reforma agraria, sin descuidar las obras de infraestructura -desestimando la siderúrgica de Paz del Río-, para finalmente, ofrecer garantías aceptables al inversor foráneo.

Respecto al segundo, es destacable la consolidación que el gremio cafetero -por encima del resto-, adquiere en el panorama económico nacional. No sólo es la aportación del 79,6% al total de la exportación, que supone para la Oficina de Control de Cambios el 95% de sus ingresos en divisas (296); sino también, los precios que el café, a partir de 1950, alcanza en la bolsa de Nueva York.

Así, la libra del tipo Medellín, pasa de los 53,46 centavos de dolar del primer año, subiendo al siguiente a 58,83, bajando a 57,01 en 1952, para finalmente en 1953 llegar hasta 60,02 (297).

Tal y como quedó indicado, el gabinete, fiel a los postulados indicados por la misión Currie, antes de ponerlos en práctica, forma -para el estudio de las propuestas-, en septiembre de 1950, el Comité de Desarrollo. En él estarán incluidos, entre otros,

algunos miembros de los gremios más importantes: Martín del Corral, presidente de la Asociación Bancaria, Pedro Nel Ospina Vásquez, ganadero y accionista de Coltabaco, y Alfredo García Cadena, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (298).

Al año siguiente, el Comité presenta al Ejecutivo un informe sobre la reforma del sistema de cambios. En éste piden, de una parte, libertad de importaciones y exportaciones, contando con aviso previo, y de otra, la recepción que los exportadores tendrán del valor de sus ventas en certificados de cambio, a excepción de los cafeteros que obtendrían el 75% de sus entradas en divisas, parte en cambio oficial y otra en cota libre. Asimismo, el Banco de la República, con el fin de evitar fluctuaciones innecesarias, intervendría en el mercado de certificados cuando lo considerase oportuno (299).

Las alternativas a esos objetivos son inmediatas. Así el que fuera ministro de Hacienda durante el mandato de Ospina, Hernán Jaramillo Ocampo, expresaba su acuerdo por la libertad de importaciones, pero no en la de cambios. En igual sentido *La Patria* periódico de Manizales, vinculado al ministro de Hacienda Alvarez Restrepo, desconfiaba de los posibles logros. En su opinión, las materias importadas, más caras que las nacionales, llevarían consigo un alza de precios, perjudicando por añadidura a la industria nacional, pues no estaba preparada para tales efectos (300).

Desde el gobierno, la respuesta llega, en marzo, con la promulgación del Decreto 756 de 1951. En éste, contrario a lo pedido por la Comisión, desaparecen los cupos de importación, al tiempo que, como sugerían Oliverio Lara y Manuel Mejía presidente del gremio cafetero, aprueban la existencia de dos listas, una de productos de importación permitida y otra prohibida (301). Junto a

ese, y respondiendo a la reorganización de la Oficina de Cambios, se funda la Junta Reguladora de Cambios. Sus órganos directivos saldrán de organismos oficiales -ministerios Hacienda, Agricultura, Fomento, y Banco de la República-, y gremiales, Federación de Cafeteros (302).

Igualmente el Banco de la República, ampliaba sus funciones. Como encargado de la centralización del manejo financiero, regularía, los cupos de crédito, las reservas de caja, o las tasas máximas de interés, tendentes a superar las restricciones de liquidez (303). Asimismo, comprará los dólares provenientes de la exportación al cambio de 2.50 pesos/dólar, exceptuando aquellos que procedan del café, donde los primeros 75 dólares se consiguen al cambio establecido y los 25 restantes a 1.95 (304).

Estas disposiciones, a pesar de ser tomadas provisionalmente, encontraron tanto en el cambio de moneda, como en la lista de productos prohibidos, el disgusto de los gremios. Primero fue el cafetero. El cambio establecido para las divisas obtenidas por el café, aún estando anunciada su desaparición progresiva, o el destino que éstas seguirían, aunque fuera para favorecer al Fondo Cafetero, como la participación de aquél en la Caja Agraria -donde poseía el 33.5% de las acciones-, no logran alejar el descontento (305).

Luego vino la contrariedad que la ANDI, en su octava asamblea expresaba. Según ellos, a la necesaria ampliación de esfuerzos para restablecer la tranquilidad en el agro, o el estímulo de las inversiones extranjeras, había que sumarle otros. Entre estos figuraba la devolución a los cafeteros "el ciento por ciento del valor de la venta de su producción al nuevo tipo de cambio", que con la disminución, no sólo de los costos de producción, sino también, a través de la exención del pago de los servicios sociales, sería factible (306).

De esta manera, el malestar de los anteriores se confirmaba. El control establecido para los cafeteros preocupaba, dado que la capacidad de compra quedaría restringida, si éste seguía fijo. La administración, pese a ello, pensaba, en boca de Alvarez Restrepo que "con una o dos excepciones, las solicitudes de la ANDI vienen a ratificar la política oficial". Sin embargo, vistas las críticas, el Banco de la República, concede -para compensar el costo de bienes importados-, el traspaso a los bancos comerciales, de 20 millones de pesos (307).

Con ello, la impaciencia gremial pareció detenerse. La ayuda estatal, en un año de precios cafeteros favorables, facilitaba el apoyo. No iba a ser la única. Las obras de infraestructura, con la apertura de nuevas vías hacia la costa Pacífica, como los enlaces Cali-Buenaventura o Barranquilla-Cartagena -demandadas por los industriales y recomendadas por el informe Currie-, tienen en el presupuesto de Obras Públicas 86.327.178 millones de pesos -el de mayor cuantía-, sobre un total de 500.635.416,7 millones, cumplida respuesta (308).

La referencia, sin embargo, que la misión hace acerca de la necesaria introducción de impuestos progresivos, inclusive en las tierras aptas para la agricultura, recupera la tensión pasada. El gremio de agricultores -SAC-, empleando todos los medios a su alcance, califica la propuesta "de marcada orientación socialista", desestimando -como lo hace la sección del Valle-, "las teorías artificiosas de los economistas foráneos", ya que -para Ramón Gómez Sierra, directivo de la SAC-, "pretender que hay una oligarquía latifundista en Colombia y que por esto se ha de socializar el problema de la tierra es una necedad o ignorancia de la realidad del país o quizás simple demagogia" (309).

A ellos se les une la opinión de Hernán Jaramillo Ocampo. Para éste: "Una empresa agrícola no se proyecta ni organiza por la sola amenaza de que su propietario pague una tasa adicional" (310).

Otro grupo de importancia, como es FENALCO, molesto por la lista de prohibida importación, previa salutación al gobierno "al haber dado muestras elocuentes de su sincero afán de acierto", expone sus exigencias. La libertad mercantil, por un lado, y la petición para el gremio, de otro, de "las mismas facilidades que el Instituto de Abastecimientos o la Caja de Crédito Agraria, para importar y distribuir alimentos y herramientas", serán algunas de ellas (311).

Tales posiciones encontrarían, en julio, la respuesta del ministro de Hacienda. En opinión de Álvarez Restrepo, era necesario mantener las medidas adoptadas, si se quería evitar una subida de la inflación, a la vez que recordaba a los detractores "que el diferencial cafetero va a robustecer el Fondo Nacional del Café, que es otra línea de defensa esencial de nuestra economía" (312).

Así las cosas, y pese a lo manifestado por el ministro, al mes siguiente hay un cambio. Para alegría de los industriales, y en consonancia con las intenciones del gobierno -tendientes a incluir la economía colombiana en el mercado mundial-, aparece el esperado Decreto 545 autorizando la inversión extranjera en Colombia. La disposición contemplaba la libre importación de capitales, y maquinaria, permitiendo -en el caso de los primeros-, su posible reexportación -beneficios incluidos-, habilitando para el caso, cuentas especiales en divisas en el Banco de la República (313).

Este ambiente de euforia se extiende a los cafeteros. Estos, obtienen en octubre la recompensa a sus presiones. El Decreto 2277, según el cual el 40% de los giros recibidos por aquéllos será pagado a 2.50 pesos/dólar, y el resto a la antigua tasa de 1.95,

esperando, pasados cuarenta meses, desmontar el diferencial, a razón de punto y medio cada mes, explican la satisfacción inicial (314).

Dos meses después, con la promulgación del Decreto N° 2602 el 18 de diciembre, por el que se establece un nuevo arancel, los deseos gremiales quedan, en buena parte completos. La SAC y ANDI, serán los más favorecidos. En el caso de los primeros, la libertad de gravámenes a los productos que estuvieran destinados al medio agrícola, unida a la reducción de aquéllos cuando de maquinaria importada se tratase, tienen continuidad, para los segundos, en la disminución de imposiciones a las materias primas necesarias para la industria nacional (315).

El nuevo arancel, propiciado por el entonces ministro de Fomento, Carlos Villaveces, en contra de la opinión de Alvarez Restrepo -favorable a la apertura cuando mejorase la reserva nacional de divisas-, supuso para el erario público, perder 20 millones de pesos para el presupuesto de 1952 (316).

El año 52, recogiendo la herencia que los logros gremiales dejan tras de sí, tiene desde las perspectivas del Estado, gracias al manejo tributario y al indicado precio cafetero, una importante disponibilidad presupuestaria -632 millones de pesos-. Estos, una vez que la Deuda Pública, algo más de 113 millones, lleva la mayor parte, destinan -de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial-, como seguidor inmediato a Obras Públicas, 111 millones. No menos importante, debido a la Violencia, resultan las cantidades dedicadas al ministerio de Guerra, 105 millones (317).

Paralelamente, el gobierno, a pesar de saber que entraba en contradicción con las propuestas económicamente liberales que presidían su política, atiende la expansión de los organismos

públicos, aún dando cabida a representantes privados en sus consejos de administración.

La formación del comité Planificador, encargado de orientar la política de inversiones, es un buen ejemplo. La presencia de Jesús María Marulanda, financiero conservador y presidente de la emisora de "La Voz de Colombia", Emilio Toro, representante de Colombia en la Oficina Panamericana del Café, y Rafael Delgado Barreneche -diseñador de la política económica de gobiernos conservadores, gerente de la Compañía Distribuidora de Azúcares, etc-, expresan esa conexión (318).

Con todo, la disposición del Ejecutivo a ampliar la intervención estatal seguía. Primero fue el nuevo decreto de 16 de enero, que regulaba el funcionamiento del INA -que pasaría a llamarse Corporación de Defensa de Productos Agrícolas-. Por él, debía garantizar a los agricultores tanto precios mínimos en artículos básicos -arroz, maíz, trigo, etc-, como el abastecimiento de éstos, ya fuese por medio de ventas e importaciones. La extensión de sus servicios o la financiación -autorizado el Banco de la República a emitir bonos por valor de 38 millones de pesos-, también iban incluidos (319).

Dos meses después le tocó el turno a otro organismo oficial, el Instituto de Fomento Municipal. Con ello, no sólo se trataba de avanzar en las pautas marcadas por el programa Currie, sino también, dada la importancia que ese adquiría, en el impulso que las obras de infraestructura local tendrían. Los recursos, como en el anterior, eran aportados por el gobierno central 63,1%, departamentos y municipios, 20 y 16,9% respectivamente (320).

Desde la óptica gremial, esta potenciación de los institutos oficiales, al contrario que en otras ocasiones, no parecía preocuparles.

Algunos, esperanzados por las propicias condiciones tenidas a finales del 51, confiaban que se mantuviesen. Las asambleas que ANDI en abril, y FENALCO en junio celebran, tratan de confirmarlo.

Los industriales, particularmente interesados en la ampliación del crédito, el control de las exenciones aduaneras y el estímulo de las exportaciones nacionales, logran la concesión del primero (321).

A su vez los comerciantes, más críticos, creían, contrariamente a lo pensado, que era necesario introducir ciertas variaciones. Una de ellas, indirectamente dirigida a la estrenada Corporación Agrícola, abogaba por que las concesiones a los institutos oficiales, no significasen el monopolio de un producto por parte de éstos. Las otras, y aquí coincidía con ANDI, deseaba tanto la revisión del arancel aduanero, como el cambio del dólar a 2,50 pesos (322).

Pero, no sólo las preocupaciones monetarias ganarían en ellos adeptos. La formación, el indicado mes de abril del Comité Pro-Paz, en un año de particular virulencia, también tiene acogida entre los gremios. Los industriales en particular, que con José Gutiérrez Gómez al frente creían que la lucha entre los partidos y los brotes de violencia, eran un elemento perturbador para la economía nacional, cuentan con el respaldo, entre otros, del presidente de FENALCO en Medellín, Diego Calle.

De forma paralela a estas actividades, las noticias económicas vertidas desde el gabinete, ya en agosto, pese a la preocupante situación política, despertaban una prudente confianza al interior de los grupos privados. Los comentarios hechos por el ministro de Hacienda Antonio Alvarez Restrepo, sobre el conjunto de la economía, eran una muestra.

En opinión de ese, puntos como el control del cambio, 2,50 pesos/dólar, las restricciones en la concesión de créditos, y la lista de prohibida importación, permitían que la situación fuese más llevadera. A estos, sin embargo, no podía unírseles el equilibrio fiscal. La reiterada pugna entre partidos y su consiguiente gasto en orden público, era para el titular de Hacienda la culpable (323).

A pesar de ello, la disposición del gabinete, igualmente en agosto, para contentar las intenciones gremiales proseguía. Los decretos de libre exportación para productos anteriormente no permitidos, como arroz, maíz, etc, vista con beneplácito desde la ANDI, al igual que el de importación para automóviles, última concesión según Alvarez Restrepo, venían a confirmarlo (324).

Un mes después, la preocupación gremial por la convulsionada realidad política, alcanza su máximo grado. El permitido asalto que las casas de Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo sufren, unido al incendio de *El Tiempo*, eran la causa. Con ello, las directivas de los partidos daban muestras de ruptura, y las gremiales permanecían perplejas.

Para éstas, si bien es cierto que los favores estatales les beneficiaban -por ejemplo la supresión del encaje adicional del 25% por el Banco de la República-, los anuncios corporativistas del Ejecutivo, no encontraban igual confianza. Las presiones provenientes del gabinete, destinadas a agilizar la presencia de representantes empresariales en la Asamblea Nacional Constituyente, constatan la sospecha.

Mientras, y hasta que la convocatoria de la ANAC fuese efectiva, el cuidado equilibrio que desde los organismos oficiales mantenían con los gremios, seguía su curso. La extensión a los ganaderos del crédito a cinco años, al igual que los industriales,

anunciado en octubre por Camilo Cabal, entonces presidente del Comité Nacional de Arroceros y ministro de Agricultura, viene a respaldarlo (325).

Al término del año ambas partes, parecían estar satisfechas. El impulso que el Ejecutivo dió a las contrucciones públicas, la legislación propicia para el capital extranjero -654 millones de dólares entre 1950-1953-, o la balanza comercial que reflejaba este año un superávit de 67 millones de dólares, contribuían a que fuese realidad (326).

Igualmente, la incorporación de una nueva entidad oficial, Banco Popular, destinada a suministrar créditos a la necesitada industria nacional, y la política salarial seguida, que primaba los bajos ingresos como lo demuestran los salarios mínimos reales que en el período descrito iban desde los 2.40 pesos de 1950, pasando a 2.28 y 2.33 dos años después, para finalizar en 1953 con 2.19 pesos de promedio (327), lo completaban.

Las halagüeñas perspectivas económicas, ya en 1953, sin embargo, contrastaban decididamente con las políticas. El contumaz empeño de Gómez para que los gremios presentasen sus candidatos e indirectamente apoyasen el proyecto constitucional por él ideado, marca el comienzo de la discordia.

Para los grupos privados el ofrecimiento tiene un significado distinto. La lista de representantes, algo que debería hacerse pues si no el gobierno se encargaba de completarla, causa malestar. En ella aparecen reflejadas diáfamente las divisiones políticas, que tras los hechos de septiembre, son abiertas. Así mientras la SAC y la Federación de Cafeteros cuentan con los conservadores ospinistas Eugenio Gómez Gómez, y Hernán Jaramillo Ocampo respectivamente, Carlos Sardi Garcés en FENALCO y Belisario

Betancur para la prensa hablada y escrita eran laureanistas. Los liberales por su parte, con Jorge Chaparro de la Federación Nacional de Cooperativistas también estaban, y ponían de manifiesto la indicada separación (328).

Es por eso que a partir de este momento, los intentos del gabinete por conciliar en su favor a los líderes gremiales, resulten fallidos. De nada servirá que el 6 de febrero el decreto extraordinario 270, abra las puertas a la nueva reforma tributaria y anuncie beneficiosas condiciones para aquéllos, o que el 12 de marzo otro decreto extraordinario el 860, deje libre de gravamen arancelario los equipos destinados a la producción eléctrica (329). La constatación del distanciamiento llega cuando, igualmente en marzo, Ospina Pérez lanza su candidatura presidencial.

Las duras críticas que a él le dirigen, sirven para advertir al resto de dirigentes gremiales. El de comerciantes en particular, un mes después, ha de cambiar de presidente. Arcesio Londoño, militante liberal, debe retirarse dada la discrepancia que mantiene hacia el gobierno. En su lugar nombran a José Restrepo, presidente del gremio en Manizales y propietario del diario conservador *La Patria* (330).

Con esto, y el discurso radiofónico que Gómez el 18 de abril pronuncia contra Ospina, despreciando su "elegante figura de financiero", los opositores de aquél se deciden a buscar relevo. Los temores de que los laureanistas, con el pretexto de utilizar la violencia para control del debate público, la dirigieran, en su exclusivo interés, hacia la política económica, lo hacían recomendable.

El final, con golpe de estado incluido, fue bien recibido por los gremios. La unificación alcanzada, esta vez en torno a Rojas

Pinilla y al Ejército les permitía recobrar la confianza que parecían haber perdido. Los propietarios no consideraban a los uniformados una amenaza potencial en su contra.

NOTAS.

- 1) Abel, Christopher. "Política, Iglesia y Partidos en Colombia: 1886-1953", Bogotá, Ed. Universidad Nacional, 1987, p. 146
- 2) Oquist, Paul. "Violencia, Conflicto y Política en Colombia", Bogotá, Ed. Banco Popular, 1976, págs. 231-232.
- 3) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 12 de diciembre/46) en *Registro 1752 Expediente 8*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 4) *Revista Javeriana* 27, N° 131, (febrero de 1947), "Vida Nacional", págs. 10-11.
- 5) Pecaut, Daniel. "Política y Sindicalismo en Colombia", Bogotá, Ed. La Carreta, 1973, págs 219-23.
- 6) Urrutia M, Miguel. "Historia del Sindicalismo en Colombia" Bogotá, Ed. Universidad de los Andes, 1969, p. 222.
- 7) Wilde, Alexander W. "Conversations among Gentlemen Oligarchical Democracy in Colombia", en *Linz, Juan J. Stepan, Alfred., The Breakdown of democratic Regimes. Latin America*, Baltimore, John Hopkins University, 1978 p. 44
- 8) Pecaut, Daniel. "De las Violencias a la Violencia", en *Sánchez, Gonzalo-Peñaranda, Ricardo., (compiladores), Pasado y Presente de la Violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1986, p. 187.
- 9) El empleo del término "Violencia" lo haremos cuando se trate del conjunto del proceso; "violencia", al tratarse de manifestaciones concretas.
- 10) CEPAL. "El Desarrollo Económico de Colombia", México, ONU, 1957, p.17., Mármora, Lelio., "Las Migraciones Internacionales laborales en Colombia", Quito, sin editorial, 1981, p.30.
- 11) Wilde, Alexander W. op. cit., p. 41.

12) Leal Buitrago, Francisco. "Análisis Histórico del Desarrollo Político Nacional, 1930-1970", Bogotá, Ed. Colección Manuales Universitarios, Tercer Mundo, 1973, p. 75.

13) Gaitán, Jorge E. "La Plataforma del Colón", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, p. 209.

14) Abel, Christopher. op. cit., p. 150.

15) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 21 de marzo/47), en *Registro 1752, Expediente 9*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

16) Avila, Abel. "Abstencionismo y Anticarisma en Colombia", Bogotá, Ed. Universidad Simón Bolívar, 1980, p. 60.

17) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 29 de marzo/47), en *Registro 1752, Expediente 9*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

18) Gaitán, Jorge E. "Parte de Victoria, tras las elecciones de 1947", en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, p. 267.

19) Ibid págs 271-3.

20) Abel, C. op. cit., p. 151.

21) Gaitán, Jorge E. "Memorial de Agravios al Presidente Mariano Ospina Pérez", op. cit., págs 308-311.

22) Pecaut, Daniel. "Orden y Violencia: Colombia 1930-1954", Bogotá, CEREC-Siglo XXI, 1987, 2 Vol., Vol. II, p. 447.

23) Pecaut, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 215.

24) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol II, p. 449.

25) Pecaut, D. "Política y Sindicalismo ... ", p. 217.

26) Ibid. p. 217.

27) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... " Vol. II, p. 463.

28) *Revista Javeriana* 28, N° 136, (agosto 1947), "Vida Nacional", p. 60.

- 29) Wilde, A W. op. cit., págs 46-47.
- 30) *Revista Javeriana* 28, N° 139, (octubre 1947), "Vida Nacional", pp. 146-152.
- 31) Cif en *El Siglo* (Bogotá 2 de septiembre/47), Ibid., p. 154.
- 32) Ibid 154-158.
- 33) Cf en *Jornada* (Bogotá 7 de septiembre/49), Ibid., p. 154
- 34) *Revista Javeriana* 29, N° 141 (febrero 1948), "Vida Nacional", p. 10.
- 35) Lleras Restrepo, Carlos. "De la República a la Dictadura", Bogotá, Ed. Argra, 1955, p. 72.
- 36) Cif en Revista Javeriana 28, N° 140 (nov 1947), "Vida Nacional", p. 206.
- 37) Ospina P, Mariano. "Obras Selectas", Bogotá, Imprenta Nacional, 1982, p. 417.
- 38) Cif *El Tiempo* (Bogotá 4 de Octubre/47), en Revista Javeriana 28, N° 140, (Noviembre 1947), "Vida Nacional", p. 204.
- 39) Ospina P, Mariano. op. cit., p. 454.
- 40) *Revista Javeriana* 29, N° 141, (febrero 1948), "Vida Nacional", p.10.
- 41) Medina, Medófilo. "Los terceros partidos en Colombia 1900-1960" en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Vol. II, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, p. 284.
- 42) Pecaú, D. "Orden y Violencia ... ", Vol. II., p. 473.
- 43) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 24 de enero/48), en *Registro 2814, Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

44) Gaitán, Jorge E. "Oración por la Páz, en Obras Selectas, Bogotá, Imprenta Nacional, 1979, p. 318.

45) Gaitán, Jorge E. "Oración por los Humildes", Ibid, p. 320.

46) Ibid., p. 320.

47) Ospina Pérez, Mariano. "Crísis, Defensa, y Consolidación de la Democracia", en El Gobierno de Unión Nacional, Tomo V, Bogotá, Imprenta Nacional, 1950, p. 351.

48) Cif., en Dirección Nacional Liberal, "El Liberalismo Frente a la Dictadura", Declaración de la Junta Liberal de parlamentarios, hecha el 29 de febrero de 1948. p. 7-8., en Oquist, Paul., op. cit., pp. 233-34.

49) Ospina P, Mariano. op. cit., Tomo V, (30 de marzo de 1948), p. 20.

50) Abel, C. op. cit., p. 153.

51) Braun, Herbert. "The Assassination of Gaitán, Public Life and Urban Violence in Colombia", Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1985, p. 154.

52) Oquist, Paul. op. cit., p. 235.

53) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... " Vol II, p. 477.

54) Leal Buitrago, Francisco. op. cit., p. 76.

55) Molina, Gerardo. "Las Ideas Liberales en Colombia", Bogotá, Ed. Manuales Universitarios, Tercer Mundo, 1978, Volúmen III, p. 235.

56) Ibid., p. 234.

57) Ibid., 227.

58) Oquist, Paul. op. cit., p. 235.

59) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 91.

60) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 19 de abril/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

61) Abel, C. op. cit., p. 155.

62) De José María de Areiza a Alberto Martín Artajo (Buenos Aires 23 de abril/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio Asuntos Exteriores, Madrid.

63) Pecaú, D. "Orden y Violencia ... ", Vol II, p. 481.

64) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 19 de abril/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

65) Wilde, A. op. cit., p. 38.

66) De Pedro Salvador de Vicente -encargado de Negocios-, a Alberto Martín Artajo, (Bogotá 7 de julio/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

67) Ibid.

68) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 148.

69) Medina, Medófilo. "La Protesta Urbana en Colombia en el Siglo XX", Bogotá, Ed. Aurora, 1984. p. 81.

70) Pecaú, D. "Orden y Violencia ... ", Vol II, p. 502.

71) De Pedro Salvador de Vicente -encargado de Negocios-, a Alberto Martín Artajo (Bogotá 7 de julio/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

72) Cf. en *El Colombiano* (Medellín 10 de junio/48), en Revista Javeriana 30, N° 146 (julio del 48), p. 10. 88) Cf. en *El Liberal* (Bogotá, 18 de enero/49), en Revista Javeriana 31, N° 152, (marzo 1949),

73) De Pedro Salvador de Vicente -encargado de Negocios-, a Alberto Martín Artajo (Bogotá 15 de julio/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

74) Ospina P, Mariano. op cit., Tomo V, p. 94.

75) Wilde, Alexander W. op. cit., p. 47.

76) *Revista Javeriana* 30, N° 147 (agosto 1948), "Vida Nacional", p. 78.

77) Cf Lleras R, Carlos. op. cit. p. 509.

78) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 10 de noviembre/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

79) Ibid.

80) *Revista Javeriana* 30, N° 148 (Septiembre 1948), "Vida Nacional", p. 120.

81) Ospina P, Mariano. op cit., Tomo V, p. 113.

82) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 10 de noviembre/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

83) Ospina P, Mariano. op. cit., Tomo V, p. 114.

84) *Revista Javeriana* 31, N° 151 (febrero 1949), "Vida Nacional", p. 20.

85) Ospina P, Mariano. op. cit., Tomo V, p. 118.

86) Oquist, Paul. "Violencia, Conflicto y Política en Colombia", Bogotá, Ed. Banco Popular, 1976, p. 17.

87) *Revista Javeriana* 31, N° 151, (febrero 1949), p. 30.

88) Cf. en *El Liberal* (Bogotá, 18 de enero/49), en *Revista Javeriana* 31, N° 152, (marzo 1949), p. 70.

89) Ibid., p. 70.

- 90) Oquist, P. op. cit., p. 252.
- 91) Cf. en *El Colombiano* (Medellín, 8 de marzo/49), en Revista Javeriana 31, N° 153 (abril 1949), p. 124.
- 92) Ibid., p. 126.
- 93) Ibid., p. 128.
- 94) Ibid., p. 136.
- 95) Cf., en *El Colombiano*, y *El Tiempo* (Medellín y Bogotá, 7 de marzo/49), Ibid., p. 136.
- 96) Abel, C. op. cit., p. 158.
- 97) Wilde, A. op. cit., p. 49.
- 98) Cf. en *El Siglo* (Bogotá, 9 de marzo/49), en Revista Javeriana 31, N° 154 (mayo 1949), "Vida Nacional", p. 202.
- 99) Ospina, Mariano. "Historia de un Proceso Político, Mensajes y Documentos", en El Gobierno de Unión Nacional, Tomo VI, Bogotá, Imprenta Nacional, 1950, p. 212.
- 100) Abel, C. op. cit., p. 159.
- 101) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 116.
- 102) *Revista Javeriana* 31, N° 155 (junio 1949), "Vida Nacional", p. 250.
- 103) Cif. en *El Catolicismo*, (24 de abril/49) en Revista Javeriana 31, N°155 (junio 1949), "Vida Nacional", p. 265.
- 104) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 22 de mayo/49), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 105) *Revista Javeriana* 32, N° 156, (julio 1949), "Vida Nacional", p. 8.
- 106) Cif. en *El Siglo* (Bogotá, 14 de junio/49), en Revista Javeriana 32, N° 156, (julio 1949), "Vida Nacional", p. 14.
- 107) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 161.

108) Cif. en *El Colombiano* (Medellín, 12 de junio/49), en Revista Javeriana 32, N° 156, (julio 1949), "Vida Nacional", p. 14.

109) Abel, C. op. cit., p. 159.

110) *Revista Javeriana* 32, N° 158 (septiembre 1949), "Vida Nacional", p. 102.

111) Ibid., 102.

112) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 187.

113) *Revista Javeriana* 32, N°159, (octubre 1949), "Vida Nacional", p. 168.

114) Cf. en *El Siglo*, (Bogotá, 2 de septiembre/49), en Revista Javeriana 32, N°159, (octubre 1949), "Vida Nacional", p. 169.

115) Cf. en *El Tiempo*, (Bogotá 3 de septiembre/49), en Revista Javeriana 32, N°159, (octubre 1949), "Vida Nacional", p. 169.

116) Cf. en *El Espectador*, (Bogotá 3 de octubre/49), en Revista Javeriana 32, N° 160, (noviembre 1949), p 208.

117) Wilde, A. op. cit., p. 51.

118) Cf. en *El Siglo*, (Bogotá 24 de Septiembre/49), en Revista Javeriana 32, N° 160, (noviembre 1949), "Vida Nacional", p. 210.

119) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 4 de noviembre/49), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

120) Abel, C. op. cit., p. 163.

121) Cf. en *El Siglo*, (Bogotá 13 de octubre/49), en Revista Javeriana 32, N°160, (noviembre 1949), "Vida Nacional", p. 220.

122) Berry, Albert., Hellman, Ronald G y Solaun, Mauricio., eds., "Politics of Compromise: Coalition Government in Colombia", New Brunswick, New Jersey, 1980, p. 32.

123) Ospina P, Mariano. op. cit., Tomo VI, p. 369.

- 124) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 508.
- 125) Ibid., p. 203.
- 126) Oquist, P. op. cit., p. 17.
- 127) Abel, C. op. cit., p. 199.
- 128) González, Fernán. "La Iglesia Católica y el Estado colombiano (1930-1985)", en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Volúmen II., Bogotá, Ed Planeta, 1989, p. 381.
- 129) Alvarez Mejía, Juan. "La Iglesia Católica en Colombia", en Revista Javeriana 28, N° 137 (agosto 1947), "Vida Nacional", pp. 109-110.
- 130) *Revista Javeriana* 29, N° 145, (junio 1948), "Crónica Religiosa", pp. 240-242.
- 131) De Roux, Ramón Rodolfo. "La Iglesia Colombiana en el período 1930-1962" en *Dussel, Enrique. "Historia General de la Iglesia en América Latina"*., Salamanca, Ediciones Sígueme, 1981, Volúmen VII., p. 531.
- 132) *Revista Javeriana* 29, N° 145, (junio 1948), "Crónica Religiosa", pp. 246-7.
- 133) Ospina, Eduardo. en Revista Javeriana 29, N° 146 (julio 1948), pp. 20-29.
- 134) *Revista Javeriana* 30, N°146, (agosto 1948), "Vida Nacional", pp. 79-93.
- 135) *Revista Javeriana* 30, N° 150, (noviembre 1948), "Vida Nacional", pp. 257-61.
- 136) *Revista Javeriana* 31, N° 151, (febrero 1949), "Vida Nacional", pp. 30-35.
- 137) *Revista Javeriana* 31, N° 153, (abril 1949), "Vida Nacional", pp. 68-84.
- 138) Abel, C. op. cit., p. 201.

- 139) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 190.
- 140) González, F. op. cit., p. 382.
- 141) Wilde, A. op. cit., p. 50.
- 142) Ramsey, Russell W. "Guerrilleros y Soldados", Ed. Tercer Mundo, 1981, p. 117.
- 143) Cf en "Memoria de Gobierno, 1946", Bogotá, 1946. pp. xix-xx., en *Abel Christopher*. op. cit., p. 246.
- 144) Ospina Pérez, Mariano. "Mensaje presidencial al Congreso de 1947 y otros documentos, Julio a Diciembre de 1947, Bogotá, Imprenta Nacional, 1949., en "Obras Selectas", Bogotá, Imprenta Nacional, 1982, pp 362-3.
- 145) Ospina Pérez, Mariano. "Historia de un Proceso Político, Mensajes y Otros Documentos, 1949", Tomo VI, Bogotá, Imprenta Nacional, 1950, p. 354.
- 146) Ospina Pérez, Mariano. "Crisis, Defensa y Consolidación de la Democracia", Tomo V, Bogotá, Imprenta Nacional, 1950, p. 93.
- 147) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 9 de diciembre/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 148) Gilhodés, Pierre. "El Ejército Colombiano analiza la Violencia", en Pasado y Presente de la Violencia en Colombia. Compiladores *Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo.*, Bogotá, Cerec, 1986, p. 309.
- 149) Leal Buitrago, Francisco. "Política e Intervención Militar en Colombia", en Revista Mexicana de Sociología, Mayo-Junio, N° 3, 1970, págs 491-538, p. 508.

150) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 9 de diciembre/48), en *Registro 2418 Expediente 15*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

151) Ibid.

152) Maullin, R. "Soldiers, guerrillas and politics in Colombia", Lexington, Lexington Books, 1973, pp. 82-3.

153) Gilhodés, Pierre. op. cit., p. 310

154) Abel, C. p. 248.

155) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 191.

156) Abel, C. op. cit., p. 248.

157) Wilde, A. op. cit., p. 50.

158) CEPAL. "El Desarrollo Económico de Colombia", México, ONU, 1957, p.17.

159) Arango, Mariano. "La Industria en Colombia 1945-53" en Lecturas de Economía N° 12 (sep-dic 1983) Universidad de Antioquia, pp. 37-38.

160) Ocampo, José A. "Historia Económica de Colombia" Bogotá, Siglo XXI, 1987, p. 248

161) CEPAL. op. cit., p. 24.

162) Arango, Mariano. op. cit., p. 39.

163) CEPAL. op. cit., p. 31.

164) Cf. en Revista del Banco de la República, (cuadro 6) en Kalmanovitz, Salomón., "Economía y Nación" Bogotá, Siglo XXI, 1986, p. 362.

165) Ocampo, José A. op. cit., p. 261.

166) Kalmanovitz, Salomón. "Economía y Nación" Bogotá, Siglo XXI, 1986, pp 381-2.

167) Ocampo, José A., op. cit., p. 261

168) Pecaute, Daniel. "Orden y Violencia ... ", Vol. II, p. 508.

- 169) Ibid. p. 508.
- 170) Kalmanovitz, S. op. cit., p. 383.
- 171) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 25 de octubre/49), en *Pecaut, D. "Orden y Violencia ... "*, Vol II, p. 511.
- 172) *Revista Javeriana* 33, N°168 (septiembre 1950), "Vida Nacional", p. 92.
- 173) Ibid., p. 110.
- 174) Bergquist, Charles. "Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia", California, Stanford, 1986. p. 357.
- 175) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 7 de agosto/50), en *Registro 2440 Expediente 36*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 176) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 27 de septiembre/50), en *Registro 2440 Expediente 37*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 177) Tirado Mejía, Alvaro. "El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar", en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Vol. II, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, p. 101.
- 178) *Revista Javeriana* 33, N° 170 (noviembre 1950) "Vida Nacional", p. 204.
- 179) Abel, C. op. cit., p. 166.
- 180) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 11 de noviembre/50), en Revista Javeriana, N° 171 (febrero 1951), "Vida Nacional", p. 22.
- 181) Oquist, Paul. op.cit., p. 17.
- 182) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 21 de noviembre/50) en Revista Javeriana 35, N° 171 (febrero 1951), "Vida Nacional", p. 10.

183) Ibid (Bogotá 30 de diciembre/1950) "Vida Nacional", p. 14.

184) *Revista Javeriana* 35, N° 172 (febrero 1951), "Vida Nacional", p. 12.

185) Cf. en *El Tiempo*, (Bogotá 16 de febrero/51), en Revista Javeriana 35, N° 172 (febrero 1951), "Vida Nacional", p. 50.

186) *Revista Javeriana* 35, N° 172 (marzo 1951), "Vida Nacional", p. 52.

187) Cf. en *El Siglo*, (Bogotá 10 de marzo/51), en Revista Javeriana 35, N° 172 (marzo 1951), "Vida Nacional", p. 78.

188) Lleras Restrepo, Carlos. op. cit., p. 227.

189) Oquist, P. op. cit., p. 284.

190) *Revista Javeriana* 35, N° 174, (mayo 1951), "Vida Nacional", p. 108.

191) Ibid., p. 108.

192) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 10 y 19 de abril/51), en Revista Javeriana 35, N° 174, (mayo 1951), "Vida Nacional", p. 110.

193) Cf. en *El Colombiano* (Medellín 14 de mayo/51), en Revista Javeriana 35, N° 175, (junio 1951), "Vida Nacional", p. 144.

194) Leal Buitrago, Francisco. op. cit., p. 87.

195) Molina, Gerardo. op. cit., p. 281.

196) Isaza, Franco. "Las Guerrillas del Llano", Bogotá, Ed. EFE, 1959, p. 233.

197) Ibid., p. 286.

198) Cf. *El Siglo* (Bogotá 11 de noviembre/51), en Revista Javeriana 37, N°181, (febrero 1952), "Vida Nacional", p. 12.

199) Ibid., p. 17.

200) Cf en *El Siglo* (Bogotá 28 de enero/52), en Revista Javeriana 37, N° 181 (febrero 1952), p. 48.

- 201) Lleras R, Carlos. op. cit., p. 356.
- 202) Cf. en *El Tiempo* (Bogotá 15 de febrero/52), en Revista Javeriana 37, N° 181, (marzo 1952), "Vida Nacional", p. 50.
- 203) *Revista Javeriana* 37, N° 183 (mayo 1952), "Vida Nacional", p. 120.
- 204) Sánchez G., Gonzalo. "Violencia, guerrillas y estructuras agrarias" en Historia Política 1946-1986, en *Nueva Historia de Colombia* Vol. II, Bogotá, Ed. Planeta, 1989, p. 140.
- 205) *Revista Javeriana* 37, N° 184 (junio 1952), "Vida Nacional", p. 148.
- 206) Ibid., p. 148.
- 207) Ibid., p. 150.
- 208) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 3 de mayo/52), en Revista Javeriana 37, N° 184, (junio 1952), "Vida Nacional", p. 148.
- 209) *Revista Javeriana* 37, N° 184 (junio 1952), "Vida Nacional", p. 150.
- 210) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 7 de junio/52), en Revista Javeriana 38, N° 186, (julio 1952), "Vida Nacional", p. 6.
- 211) Cf. en *El Tiempo* (Bogotá 8 de junio/52), en Revista Javeriana 38, N° 186, (julio 1952), "Vida Nacional", p. 6.
- 212) Ibid., p. 8.
- 213) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 15 de julio/52), en *Registro 2981 Expediente 58*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 214) Ibid., (Bogotá 14 de agosto, 1952).
- 215) *Revista Javeriana* 38, N° 189, (octubre 1952), "Vida Nacional", p. 108.
- 216) Ibid. p. 110.

217) *Revista Javeriana* 38, N° 189, (octubre 1952), "Vida Nacional", p. 102.

218) Ibid., p. 104.

219) Pecaut, D. "Orden y Violencia ... ", Vol II, p. 525.

220) Lleras Restrepo, Carlos. op. cit., p. 399.

221) *Revista Javeriana* 38, N° 189 (octubre 1952), "Vida Nacional", pp. 106.

222) Guzmán Campos, Germán. "La Violencia en Colombia", Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1986 (tercera reimpresión), Tomo II, p. 62.

223) Ibid., pp 63-65.

224) Ibid., pp 67-70.

225) Ibid., 71-74.

226) Ibid., 74-77.

227) *Revista Javeriana* 38, N° 190 (noviembre 1952), "Vida Nacional", p. 156.

228) Ibid. p. 158.

229) Ibid. p. 160.

230) Cf en *El Siglo* (Bogotá 6 de noviembre/52) en Revista Javeriana 39, N° 191, (febrero 1953), "Vida Nacional", p. 12.

231) *Revista Javeriana* 39, N° 192 (marzo 1953), "Vida Nacional", p. 55.

232) *Revista Javeriana* 39, N° 191 (febrero 1953), "Vida Nacional", pp. 18-22.

233) Cf en *El Siglo* (Bogotá 30 de diciembre/52), en Revista Javeriana 39, N° 192 (marzo 1953), "Vida Nacional", pp. 42-43.

234) Oquist, Paul. op.cit., p. 17.

235) *Revista Javeriana* 39, N° 191 (marzo 1952), "Vida Nacional", p. 48-49.

236) Ibid., p. 48.

237) Ibid.

238) Henderson, James. "El Proyecto de Reforma Constitucional Conservadora de 1953 en Colombia", en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura N° 13-14, Bogotá, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, 1985-1986, p. 263.

239) *Revista Javeriana* 39, N° 192 (marzo 53), "Vida Nacional", p. 47.

240) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 28 enero/53), en Revista Javeriana 39, N° 192 (marzo 53), "Vida Nacional", p. 56.

241) Cf. en *El Tiempo* (Bogotá 29 enero/53), Ibid.

242) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 19 de febrero de 1953), *Registro 3181 Expediente 12*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

243) *Revista Javeriana* 39, N° 193 (abril 1953), "Vida Nacional", p. 79.

244) Ibid., p. 88.

245) Ibid., p. 89.

246) *Revista Javeriana* 39, N° 194 (mayo 1953), "Vida Nacional", p. 121-2.

247) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 14 de abril/53), Ibid.

248) *Revista Javeriana* 39, N° 195, (junio 1953), "Vida Nacional", pp 160-162.

249) Cf. en *El Colombiano* (Medellín 19 de abril/53), Ibid.

250) Leal Buitrago, F. op.cit., p. 89.

251) *Revista Javeriana* 39, N° 195 (junio 1953), "Vida Nacional", pp 152-153.

- 252) *Revista Javeriana* 39, N° 195 (junio 1953), "Vida Nacional", pp. 156-157.
- 253) *Ibid.*, p. 156.
- 254) *Ibid.*
- 255) *Ibid.*
- 256) *Ibid.*, p. 156.
- 257) *Ibid.*, p. 155.
- 258) Cf en *El Tiempo* (Bogotá 7 mayo/53), *Ibid.*, p. 158.
- 259) Cf en *El Tiempo* (Bogotá 13 mayo/53), *Ibid* p. 158.
- 260) Henderson, James. op. cit., p. 270.
- 261) *Revista Javeriana* 39, N° 195 (junio 1953), "Vida Nacional", pp. 153-154.
- 262) *Revista Javeriana* 39, N° 195 (julio 1953), "Vida Nacional", pp. 14-15.
- 263) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 30 de mayo/53), *Registro 3176, Expediente 80*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
- 264) *Revista Javeriana* 40, N° 196 (agosto 1953), "Vida Nacional" p. 38.
- 265) Abel, C. op. cit., 201.
- 266) *Revista Javeriana* 34, N° 166, (julio 1950), "Vida Nacional", p. 20.
- 267) *Revista Javeriana* 34, N° 168 (octubre 1950), "Vida Nacional", pp. 144, 154.
- 268) Cf. en *El Catolicismo* (3 de octubre/50) en *Revista Javeriana* 34, N° 169 (noviembre 1950), "Vida Nacional", pp 224-226.
- 269) *Revista Javeriana* 35, N° 171 (febrero 1951) "Vida Nacional" pp. 23-24.

270) Pacheco, M. Juan. "*La persecución de los protestantes y la libertad de cultos*" en Revista Javeriana 34, N° 168 (octubre 1950), pp. 192-198; -González Quintanar, Guillermo., "*La persecución religiosa en Checoslovaquia*" en Revista Javeriana 34, N° 169 (noviembre 1950), pp. 303-311; - Teixidor, Luis., "*Las Encíclicas y el Liberalismo*" en Revista Javeriana 35, N° 172 (marzo 1951), pp. 105-115.

271) *Revista Javeriana* 36, N°177 (agosto 1951), pp. 59-64, y N° 178 (septiembre 1951), pp. 100-104.

272) *Revista Javeriana* 35, N° 173 (abril 1951), "Vida Nacional", p. 96.

273) *Revista Javeriana* 36, N° 176 (julio 1951), pp. 7-9; N° 177 (agosto 1951), pp 71-86; N° 178 (septiembre 1951), pp. 139-148.

274) Wilde, Alexander W. "Redemocratization, The Church and Democracy in Colombia", Indiana, Kellog Institute-Notre Dame, junio de 1984, Working Paper N° 22 p. 18.

275) Cf. en *Conferencias Episcopales de Colombia*, Tomo I, 1908-1953 (Bogotá, 1956) pp. 203, 325-6., en Abel, C. op. cit., p. 202.

276) González, Fernán. op. cit., p. 383.

277) Cf. en *El Siglo*, (Bogotá 29 de julio/50), en Revista Javeriana 34, N° 167, (agosto 1950), "Vida Nacional", p. 52.

278) Abel, C. op. cit., p. 251.

279) Urán, H. Carlos. "Colombia y los Estados Unidos en la Guerra de Corea", Indiana, Kellog Institute-Notre Dame University, mayo 1986, Working Paper N° 69, pp 30-32.

280) *Revista Javeriana* 33, N° 161 (febrero 1950), "Vida Nacional", p. 27; Ibid 35 N° 171 (febrero 1951), p. 16; Ibid 37, N°

181 (febrero 1951), p. 21; Maullin, Richard., "Soldiers, Guerrillas and Politics in Colombia", Londres, Lexington Books, 1973, p 82-83.

281) Urán, H. Carlos. "Rojas Y La Manipulación Del Poder", Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1983, p. 58.

282) Cf. en *El Siglo* (Bogotá, 25 febrero/51), en Revista Javeriana 35, N° 172, (marzo 1951), "Vida Nacional", p. 74.

283) Ibid., N°175 (junio 1951), "Vida Nacional", p. 140.

284) Oquist, P. op. cit., p. 262.

285) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá 8 de marzo/51), en *Registro 2828 Expediente 37*. Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

286) *Revista Javeriana* 35, N° 174 (mayo 1951), "Vida Nacional", p. 142.

287) Oquist, P. op. cit., p. 261.

288) Urán, H. Carlos. "Colombia y los Estados Unidos ... ", p. 35.

289) Abel, C. op. cit., p. 253.

290) De José María Alfaro a Alberto Martín Artajo (Bogotá, 21 de enero /52), en *Registro 3173, Expediente 40*. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores., Madrid.

291) Ibid. (Bogotá 17/22 de abril/52).

292) Urán, H. Carlos. "Colombia y los Estados Unidos ... ", pp. 43-45.

293) Ramsey, W. Russell. "The Colombian Battalion in Korea and Suez", en Journal of Inter-American Studies, Volume IX, N° 4, octubre 1967, p. 554.

294) Cf. en *Diario de Colombia* (Bogotá 14 de noviembre/52) en Revista Javeriana 39, N° 191 (febrero 1953), p. 11.

295) Jaramillo Ocampo, Hernán. "Momentos Estelares de la Política Colombiana", Bogotá, Ed. Tercer Mundo, 1989, p. 30.

296) *Revista Javeriana* 34, N° 170 (noviembre 1950), "Vida Nacional", p. 210.

297) CEPAL. "El Desarrollo Económico de Colombia", México, ONU, 1957, p. 31.

298) *Revista del Banco de la República*, Vol XXVII, Diciembre 1954, N° 326, Bogotá, Imprenta del Banco de la República, 1954, p. 1496.

299) Echeverri Uruburu, Alvaro. "Elites y Proceso Político en Colombia 1950-1978", Bogotá, Ed. Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, 1986, p. 86.

300) *Revista Javeriana* 35, N° 173 (abril 1951), "Vida Nacional", p. 82.

301) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 28 de febrero /51), Ibid.

302) *Revista Javeriana* 35, N° 173 (abril 1951), "Vida Nacional", p. 86.

303) Echeverri U., A. op. cit., p. 88.

304) Bejarano A, Jesús A. "Industrialización y Política Económica (1950-1976)" en Arrubla, Mario. Colombia Hoy, Bogotá S. XXI, 1978, p. 238.

305) *Revista Javeriana* 35, N° 173 (abril 1951), "Vida Nacional", p. 92.

306) Machado, Absalón. "Política Cafetera 1920-1962", en Desarrollo y Sociedad N° 8, Mayo 1982, p. 194.

307) *Revista Javeriana* 35, N° 174 (mayo 1951), "Vida Nacional", pp. 124-125.

308) Cf. en *El Siglo* (Bogotá, 24 abril/51), Ibid., p. 126.

309) *Revista Javeriana* 35, N° 171 (febrero 1951), "Vida Nacional", p. 16.

310) Bejarano A, Jesús Antonio., "Economía y Poder. La SAC y el Desarrollo Agropecuario Colombiano 1871-1984", Bogotá, CEREC, 1985, p. 284.

311) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 14 de mayo/51), en Revista Javeriana 35, N° 175 (junio 1951), "Vida Nacional", p. 154.

312) Ibid, p. 155

313) *Revista del Banco de la República*, Volúmen XXIV, Agosto 1951, N° 286, Bogotá, Imprenta del Banco de la República, 1951, p. 815-6.

314) *Revista Javeriana* 36, N°178 (septiembre 1951), "Vida Nacional" p. 86.

315) Machado, A. op, cit., p. 196.

316) *Revista Javeriana* 37, N°181 (febrero 1952), "Vida Nacional", p. 21.

317) Echeverri U., A. op. cit., p 94.

318) *Revista Javeriana* 37, N° 181, (febrero 1952), "Vida Nacional", p. 21.

319) Echeverri U., A. op. cit., p 45.

320) Cf en *El Siglo* y *El Tiempo* (Bogotá 17 de enero/52), en Revista Javeriana 37, N° 182 (marzo 1952), "Vida Nacional" pp. 54-55.

321) CEPAL. op. cit., p. 88.

322) *Revista Javeriana* 37, N° 185 (junio 1952) "Vida Nacional" p. 152.

323) *Revista Javeriana* 38, N°186 (julio 1952), "Vida Nacional" pp. 14-15.

324) *Revista Javeriana* 38, N° 188 (septiembre 1952), "Vida Nacional", pp. 75-76.

325) Cf. en *El Siglo* (Bogotá 6 de agosto/52), en Revista Javeriana 38, N° 188 (septiembre 1952), "Vida Nacional " pp. 76-77.

325) Cf. en *El Espectador* (Bogotá 18 de octubre/52), en Revista Javeriana 38, N° 190 (noviembre 1952), "Vida Nacional" p. 164.

326) *Revista Javeriana* 39, N° 193 (abril 1953), "Vida Nacional" pp. 58-59.

327) Cf en "Evolución de las formas de intervención del Estado en la Economía en América Latina", en *Revéiz Edgar*. "El Estado y El Desarrollo", Bogotá, CEDE, 1980, Cuadro N° 5, p. 65.

328) Echeverri U., A. op. cit., p 108.

329) *Revista Javeriana* 39, N° 194 (mayo 1953), "Vida Nacional" p. 129.

330) Echeverri U., A. op. cit., p. 44.

ABRIR CAPÍTULO III

